



Sembradores de paz

Una reflexión colectiva
para responder a la
violencia

Froylán Enciso

Fernando Nieto

EDITORES

SEMBRADORES DE PAZ

SENADO DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

Comité Directivo

Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente

Sen. Roberto Armando Albores Gleason
Secretario

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz
Secretario

Sen. Benjamín Robles Montoya
Secretario

Secretaría Técnica

Onel Ortiz Fragoso
Secretario Técnico

Junta Ejecutiva

Dr. Gerardo Equivel Hernández
Coordinador Ejecutivo de Investigación

Mtro. Alejandro Encinas Nájera
Director General de Investigación Estratégica

Mtro. Pérez Noel Pérez Benítez
Director General de Finanzas

Mtro. Juan Carlos Amador Hernández
Director General de Difusión y Publicaciones

Dr. Alejandro Navarro Arredondo
Director General de Análisis Legislativo

Sembradores de Paz. Una reflexión colectiva para responder a la violencia.

Autores: **Froylán Enciso**
Fernando Nieto

Primera edición: agosto de 2017
ISBN 978-607-8320-74-5

Cuidado de la edición: **Papel Metal SC**

Diseño de portada e interiores: **Papel Metal SC/Maru Aguzzi**

Corrección de estilo: **Papel Metal SC/Isaura Leonardo**

Edición de fotografía: **Diego Berruecos**

Fotógrafos: **Dominic Bracco, Mauricio Palos, Eunice Adorno**

Foto de portada: **Eunice Adorno**

DR© Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República
Donceles 14, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
06020, Ciudad de México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Impreso en México

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista del Instituto Belisario Domínguez o del Senado de la República.

SEMBRADORES DE PAZ

Froylán Enciso y Fernando Nieto

Editores

México, 2017

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	9
por Froylán Enciso y Fernando Nieto	
EN BUSCA DE LA PAZ EN EL NOROESTE	13
CARLOS GERO FONG	29
por Daniela Pastrana	
LA LUCHA CONTRA LA GUERRA	35
por Gero Fong	
JAVIER LLAUSÁS: EMPRENDEDOR DE LA PAZ	43
por Andrew Paxman	
PAZ POSITIVA EN CULIACÁN	51
por Javier Llausás Magaña	
SILVIA YERMO	55
por Diego Enrique Osorno	
SER ACTIVISTA EN EL DESIERTO: FEMINICIDIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SONORA	61
por Silvia Núñez Esquer	
FERNANDO OCEGUEDA, EL RASTREADOR	71
por Galia García Palafox	
UNIDOS POR LOS DESAPARECIDOS DE BAJA CALIFORNIA	79
por Fernando Ocegueda Flores	
ESCUCHAR	89
por Alexandra Délano Alonso	

PAZ Y JUSTICIA EN EL SUR	95
ABEL BARRERA: LA LUCHA DE LA MONTAÑA	109
por Témoris Grecko	
MÉXICO VIOLENTO: LA REALIDAD DE LA PAZ INESTABLE EN GUERRERO	117
por Abel Barrera	
EL PADRE ALEJANDRO SOLALINDE: LA LIBERTAD Y LA REBELDÍA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	127
por María Consuelo Mejía	
OAXACA: ENTRE EL REINO DE DIOS Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA	133
por Alejandro Solalinde	
EL PADRE SEGURA	141
por Emiliano Ruiz Parra	
LA PAZ EN MICHOACÁN SE LLAMA JUSTICIA	149
por José Luis Segura Barragán	
RECOBRAR LA CONFIANZA	157
por Fernando Nieto Morales	
PAZ Y MEMORIA EN EL NORESTE	165
JORGE	179
por Lolita Bosch	
ACCIONES CIUDADANAS FRENTE A LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN COAHUILA	185
por Jorge Verástegui	
A TU VUELTA	193
por Daniela Rea	
MI EXPERIENCIA	199
por Lourdes Huerta	
RAYMUNDO RAMOS, EL RESISTENTE	203
por Óscar Balderas	
TAMAULIPAS	209
por Raymundo Ramos	
LA SIEMBRA QUE YA EXISTE, LA PAZ MEXICANA EN PROCESO	215
por Roberto E. Mercadillo Caballero	

PRESENTACIÓN

Froylán Enciso y Fernando Nieto

México vive un momento oscuro. La ola de violencia y crimen que ha arrasado casi todos los rincones del país ha cobrado la vida de decenas de miles de personas en los últimos años y ha marcado a millones más. Las noticias de violencia endémica, comunidades desgarradas y tragedias impunes se han vuelto cotidianas. La situación no es sostenible, ni debería serlo. Así piensan cientos de mexicanos ejemplares, quienes, como los que se retratan en este libro, han resistido y respondido a esta violencia.

El 22 de junio de 2016, bajo los auspicios del Senado de la República y El Colegio de México, ciudadanos, activistas, académicos, funcionarios públicos y legisladores se reunieron en el Foro de Líderes Sociales por una Cultura de Paz. En aquel foro se presentaron diagnósticos, ideas y perspectivas para entender la violencia en diez de los estados más violentos del país, de acuerdo con cifras públicas de homicidios dolosos. En el noroeste de México, retomamos los casos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. En el noreste, nos enfocamos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; mientras del sur incluimos a Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Pronto se hizo evidente que estas regiones del país sufren una variedad de males, no solo caracterizados por la violencia homicida, sino también por múltiples formas de crímenes y oprobios contra la población y, sobre todo, contra segmentos específicos como las mujeres, los pobres, los campesinos, las minorías sexuales, y un largo etcétera. Las causas aparentes eran varias, algunas transversales en todo el país, y otras tantas propias

de condiciones locales concretas. Sin embargo, el común denominador de esas sesiones fue la evidencia del trabajo de varias organizaciones y personas por hacer frente a las violencias de esos estados.

Uno de los aspectos más valiosos de aquel foro fue la constatación de que a lo largo y ancho de México existen esfuerzos cotidianos para resolver conflictos, retomar el espacio público, denunciar y resistir injusticias y mejorar las condiciones de miles de comunidades que han sido desgarradas por la violencia, la intimidación de criminales y la indolencia o incompetencia de las autoridades. Este libro que tiene en sus manos es un esfuerzo por dejar constancia de esas experiencias. La idea es dar a conocer algunos de los esfuerzos de los sembradores de paz del país; de esos hombres y mujeres que han hecho de sus vidas, voluntariamente o no, una carrera en contra del olvido y a favor de la justicia.

Los textos que se incluyen en este volumen presentan las visiones y experiencias de diez sembradores de paz. A cada uno se le pidió resumir su visión sobre la violencia en su comunidad o región, explicar cuáles son las causas y las acciones de mitigación posibles y, no menos importante, cuáles son las carencias y los retos que enfrenta en su trabajo. Cada uno de estos textos, por tanto, da cuenta no únicamente de los problemas, sino también de los esfuerzos por enfrentarse y reponerse ante los mismos. Incluyen también una crítica honesta y abierta del papel de los ciudadanos, las autoridades y las instituciones públicas. Son estampas que nos permiten entender las diferencias y los esfuerzos e innovaciones a favor de la paz en el país.

Reconocidos periodistas y escritores escribieron semblanzas biográficas de cada uno de los sembradores de paz, con el propósito de permitirnos saber más acerca de las circunstancias y la importancia social y comunitaria de su vida y su trabajo. También se incluyeron las reflexiones de tres académicos que participaron en el foro original en el Senado.

Estos textos se complementaron con fotografías editadas por el fotógrafo y artista Diego Berruecos. Bajo la coordinación de Berruecos, talentosos fotógrafos retrataron a cada uno de nuestros sembradores de paz, en sus lugares de origen o durante visitas a la Ciudad de México. Además,

se comisionaron tres ensayos fotográficos para introducir de manera gráfica e íntima las condiciones sociales en cada una de las tres regiones. Sin caer en la crudeza, el trabajo de Dominic Bracco en el noroeste, Mauricio Palos en el sur y Eunice Adorno en el noreste busca transmitir la emoción de responder a la violencia en México, reto estético que resolvieron finamente.

La paz se construye con acciones concretas, pero, sobre todo, con voluntad e imaginación. Esperamos que este trabajo sirva para inspirar a muchos más a emprender acciones a favor de la paz que tanto necesita este país.



Queremos agradecer a todas y todos quienes hicieron posible este libro. Primeramente, queremos agradecer la buena disposición y el esfuerzo de los autores, así como de los periodistas, escritores, investigadores, fotógrafos, diseñadores, editores y académicos que también participaron en este proyecto. Nuestra gratitud para las y los senadores y los funcionarios e investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en particular a Gerardo Esquivel y a su equipo: Raúl Zepeda Gil, Carlos Galindo, Mara Gómez Pérez, Miriam Zaragoza, Jorge Tamayo, Alejandro Encinas, Mario Arriagada y Alberto Serdán. También queremos agradecer a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de El Colegio de México y de su Centro de Estudios Internacionales. En particular, va nuestra gratitud para Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz de esa institución. De igual forma, agradecemos sinceramente a todos los miembros, asistentes de investigación y colaboradores permanentes o eventuales del Seminario: Clementina Chávez, Virginia Arellano, Marusia Musacchio, Laura Flamand, Luis David Ramírez de Garay, Luz Paula Parra, Brenda Pérez, Pablo Reyes, Carlos Enrique Ramírez, Beatriz Peralta, Daniela Cruz, Claudia Cote, Fiacro Jiménez, Miguel Ángel Ortega, Iñaki Berenzon, Eduardo Vital, Matías Gómez, Alejandra Pérez, Alejandro Escalante, Enrique Pelayo y Luis Guerrero. Muchas gracias a todos.

**EN
BUSCA
DE LA PAZ
EN EL
NOROESTE**



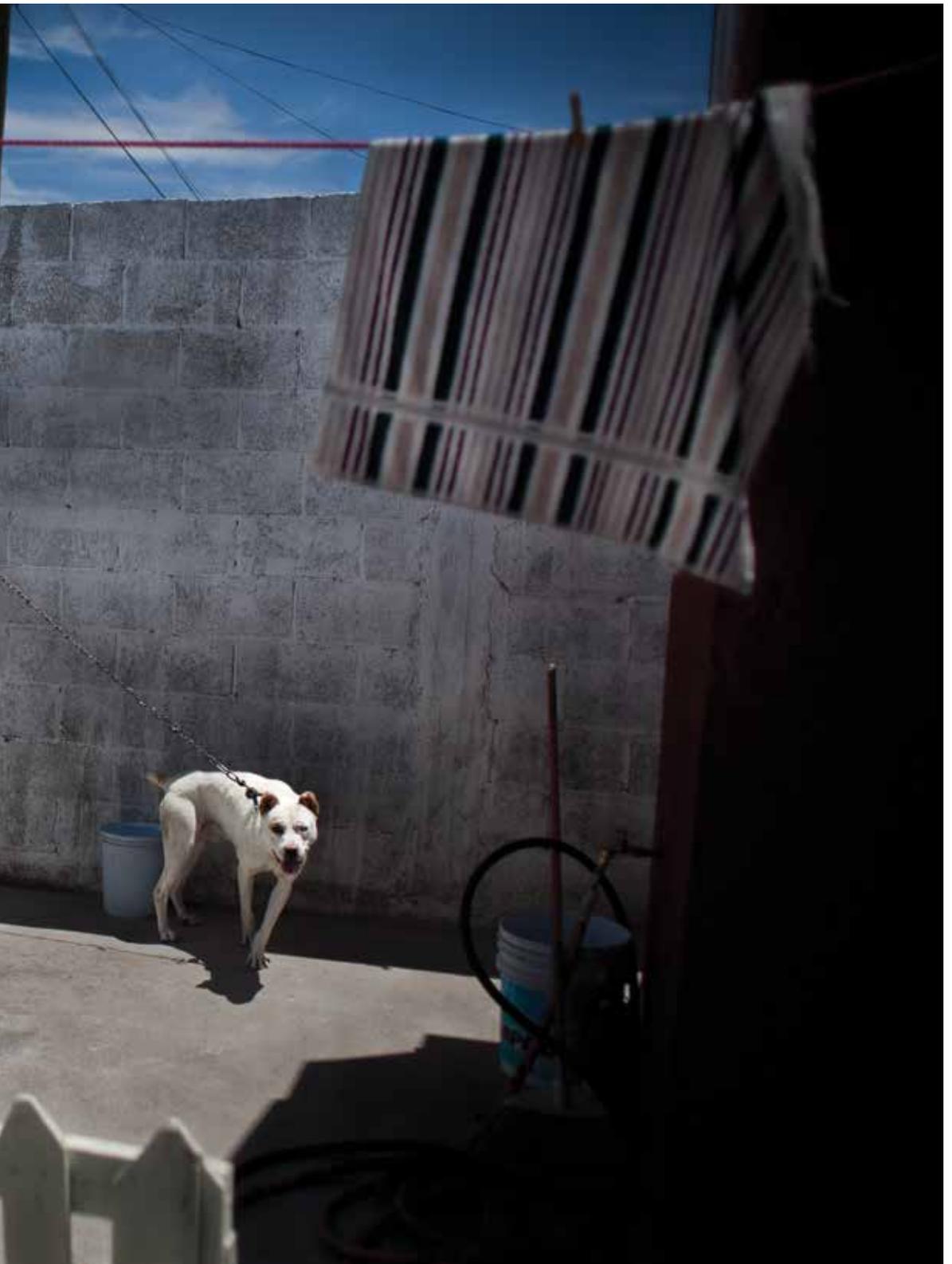
Ensayo fotográfico por **Dominic Bracco**









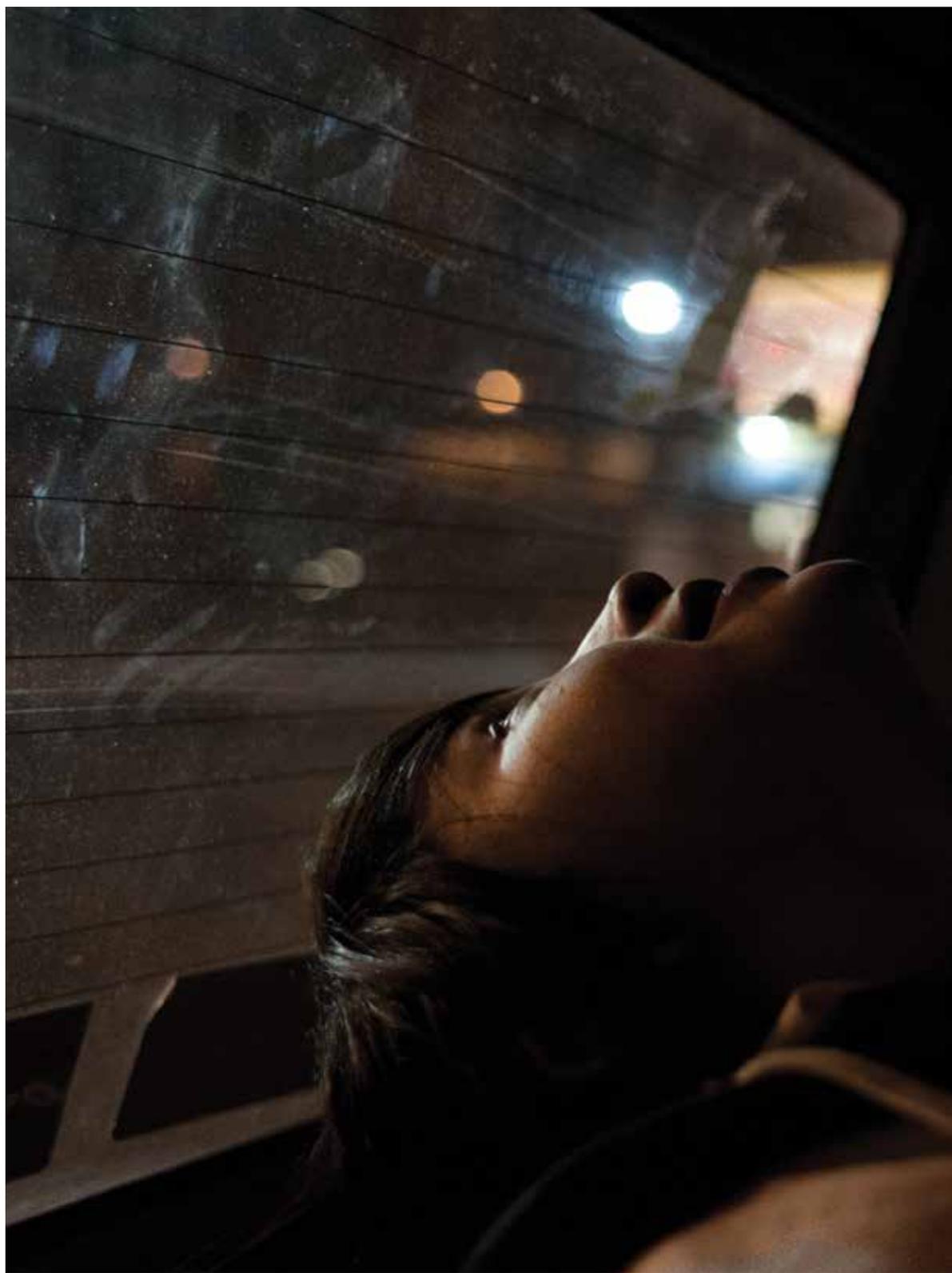


















CARLOS GERO FONG

Daniela Pastrana

La noche del sábado 23 de agosto de 2008, después de participar en una marcha contra la militarización en Ciudad Juárez, Carlos Fong regresó a su casa y se encontró con un comando militar en la entrada de la colonia donde vivía. No le dio importancia, pues en esos días el ejército tenía retenes por toda la ciudad. Pero dos días después, el 25 de agosto, otro comando se instaló exactamente enfrente de su casa.

Los soldados llevaban una tanqueta. Estuvieron unos minutos más y se fueron sin hacer ni decir nada. Ese mismo día de 2008, los políticos y gobernantes, encabezados por Felipe Calderón, el presidente conservador que en pleno siglo XXI militarizó al país bajo el subrepticio de la “guerra contra el narcotráfico”, habían firmado en la Ciudad de México el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Al día siguiente, el casero de Fong recibió una llamada extraña: alguien, que dijo ser de la Secretaría de Gobernación, lo interrogó sobre sus inquilinos. El hombre tuvo que responder si había arrendado a gente que se dedicara a la política o que participara en un grupo subversivo o armado.

Fong respondió con un artículo que se difundió por internet: “Lo que está ocurriendo es un hecho de intimidación del ejército y el gobierno contra las organizaciones políticas que nos manifestamos contra su política de terror y hambre y se encuadra perfectamente en la política de represión contra los movimientos sociales [...] Hago directamente responsable de cualquier cosa que pudiera pasarnos a mí, a mi familia o a mis

compañeros de lucha a Felipe Calderón Hinojosa, jefe supremo de las fuerzas armadas, José Reyes Baeza Terrazas, gobernador del estado de Chihuahua cómplice de la militarización, y a José Reyes Ferriz, presidente municipal de Ciudad Juárez”.

Ese es Carlos Yéffim Fong Ronquillo, más conocido entre los activistas y académicos de Ciudad Juárez como *Gero* Fong. Un hombre de largas barbas que nació hace 41 años en Delicias, Chihuahua, y que ha dedicado toda su vida a la lucha social.

Porque a Fong no le gusta que lo definan como activista ni como defensor de derechos humanos. Se siente más cómodo cuando lo llaman luchador social. Sigue reivindicando causas y conceptos que a muchos les parecen caducos, como la lucha de clases, y que a las generaciones del cambio de siglo les suenan extraños, como hegemonía cultural o capas proletarias. Que todavía se refiere a “los camaradas” y no a las personas sujetas de derechos. Que habla de los “cuerpos represivos del Estado”, y no del uso excesivo de la fuerza de los cuerpos policiales; de “los planes neoliberales del Consenso de Washington” y no de las políticas de desarrollo sustentable. Que llena sus discursos de adjetivos (“el artero y escandaloso fraude electoral”) y que usa palabras y frases tan políticamente incorrectas como “derrocar”, “neoimperialismo” o “civilistas del pensamiento débil”.

Un radical, dicen algunos integrantes del movimiento social de Ciudad Juárez. Radical, pero consecuente, aclaran.

Gero Fong es hijo de Luis Fong Fierro, un luchador social de la causa obrera en el norte del país, que fundó y organizó la Liga Socialista Revolucionaria y fue editor de revistas y periódicos marginales de resistencia hasta su muerte en 2011. Su primera actividad política fue a los ocho años, haciendo dibujos para una revista obrera.

Ahora se presenta a sí mismo con estas credenciales: “pertencí al Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, soy miembro de la

**Años más tarde
terminaríamos
de entender la
importancia de
esa declaración de
“guerra contra el
terrorismo” hecha
por Bush.**

Asamblea Popular Regional Paso del Norte —que tiene como principal demanda la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa— y fundador del Colectivo Universidad Contra el Miedo, entre muchas otras”.

Esas muchas otras cosas lo han llevado, en la última década, a luchar contra la guerra que emprendió el gobierno mexicano contra su población con el pretexto de combatir al narcotráfico. Una guerra que convirtió a Ciudad Juárez en el epicentro del dolor, según la definición que hizo el poeta Javier Sicilia en 2011, cuando recorrió el país con miles de víctimas.

En esos días, Chihuahua recogía los muertos de la batalla de Felipe Calderón. Sicilia y cientos que se le sumaron en la Caravana del Dolor llegaron a Juárez con un decálogo para cambiar al país. La idea era ratificarlo en Juárez. Pero la discusión se empantanó en un punto: el diálogo con el gobierno del presidente Felipe Calderón que proponía el equipo del poeta. El grupo de *Gero Fong* dijo: no. Los integrantes del movimiento los acusaron de radicales. Pero al final el tiempo les daría la razón y hoy muchos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dicen que la reunión con Calderón fue un error.

El grupo de víctimas regresó a la Ciudad de México, se abrió un espacio de diálogo con el gobierno y se impulsó la Ley de Víctimas. Fong se quedó en Chihuahua a seguir luchando desde la misma trinchera contra la guerra. O las guerras... desde su perspectiva, las batallas que se están librando en el planeta tienen como objetivo el uso de los bienes naturales. Por eso, cuando se presenta dice que más que un luchador “por la paz” es un luchador “contra la guerra”.

Pero, aunque no le guste, Fong es un activista. Y un sembrador de paz.

Gero Fong >



Foto **Jair Tapia**



LA LUCHA CONTRA LA GUERRA

Gero Fong

Mi nombre es Carlos Yéffim Fong Ronquillo, pero me conocen como *Gero Fong*. Tengo 41 años y he sido un luchador social (no me gusta el título “activista”) prácticamente toda mi vida. Mi primera actividad con conciencia —no sé si de clase ya— fue a los ocho años, haciendo dibujos para una revista política obrera llamada *El Adelante*.

Lo primero que debo aclarar es que más que un luchador “por la paz”, he pretendido ser un luchador “contra la guerra”. No se trata de una distinción meramente formal sobre cómo deben decirse las cosas. No se trata de decirlo con menos filo para intentar agradar a todos. Tampoco es una diferencia menor que, más allá de su expresión, llega al mismo punto; es decir, aquella idea de “¡es lo mismo pero dicho de otra manera!”. No, no es así. No es lo mismo estar “en contra” que “a favor”. Estoy totalmente de acuerdo con esto y quiero reiterar que mis actividades políticas y organizadas, al menos en los últimos 16 años, se han enfocado *contra* la guerra. Naturalmente, la pregunta que sigue es: ¿de qué guerra estamos hablando? Vayamos, pues, a mis actividades contra la guerra.

La idea de hacer un movimiento contra la guerra en el estado de Chihuahua tuvo un primer antecedente en una organización llamada Taller no a la guerra, que operó entre 2001 y 2003. Se trataba de un colectivo, mayor a un centenar de jóvenes entusiastas, con influencias socialistas, anarquistas, altermundistas, pacifistas, zapatistas, autonomistas y artísticas que nos dedicamos a organizar protestas y ejercicios de reflexión “contra la

guerra” en las ciudades de Chihuahua capital y Juárez. Lo hicimos para oponernos puntualmente a la guerra contra Afganistán, declarada por el gobierno de Estados Unidos en octubre de 2001, después de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de ese mismo año.

A causa de que la guerra en Afganistán continuaría con la intervención imperial en Irak en 2003, bajo el singular rotulo de “guerra contra el terrorismo”, el Taller no a la guerra operó intermitentemente durante este breve periodo. Años más tarde terminaríamos de entender la importancia de esa declaración de “guerra contra el terrorismo” hecha por Bush, en la que la anunció como una guerra larga y dolorosa. En aquel tiempo esta idea de “guerra contra el terrorismo” solo nos parecía un eufemismo que la retórica imperial utilizaba para esconder una tradicional guerra de intervención en Oriente Medio.

Recuerdo que dentro de las actividades del Taller no a la guerra invitamos a Rogelio Luna, un viejo luchador chihuahuense, a compartir una charla. En aquella charla nos preparamos para escuchar que era necesario y posible parar la guerra si todo el mundo se unía bajo esta consigna generosa. Sin embargo, aún recuerdo las palabras de inicio en esa conferencia, que cito de memoria: “El imperio ha decidido ir a la guerra y toda la oposición mundial no va a poder evitarlo, no sabemos cómo regrese el imperio de su aventura bélica en Medio Oriente, puede venir victorioso o puede venir derrotado, pero debemos prepararnos porque venga como venga, viene contra nosotros”.

Enseguida, Rogelio Luna procedió a explicar las coordenadas de su razonamiento: por un lado, si el imperio regresaba victorioso de Oriente Medio, querría extender su dominio sobre su patio trasero y, por el otro, si venía derrotado querría cobrarse la derrota con sus dominados, empezando obviamente por su patio trasero. Nosotros, desde luego, somos el patio trasero de Estados Unidos.

En honor a la verdad, pocos tuvieron en cuenta las palabras casi proféticas del compañero Luna. Puedo decir que yo mismo no presté la debida atención en aquel momento. No obstante, esas palabras, en los siguientes

años, se fueron convirtiendo para mí en toda una revelación. La conexión entre las “distintas guerras” —la recién comentada “guerra contra el terrorismo” y la llamada “guerra contra el crimen” que ha bañado en sangre a México— se aclarará más adelante. Antes, relataré otro antecedente de mi actual actividad contra la guerra.

El periodo de Patricio Martínez como gobernador de Chihuahua, entre 1998 y 2006, fue especialmente criminal. Bajo su mandato, anclado en el discurso de la seguridad, se crearon más de una docena de cuerpos especiales policiaco-militares y se construyó en Chihuahua el centro policial militarizado C4 —en su momento, el más avanzado de América Latina, con tecnología y asesoría importada directamente de los militares en Estados Unidos—.

En este periodo el feminicidio aumentó de forma dramática en Chihuahua, a la par que se vivió un sensible aumento de la violencia. La complicidad del estado con el crimen organizado fue puesta de manifiesto muchas veces. En ese entonces en Chihuahua estábamos en el cambio de siglo, bajo esa peculiar situación —ahora ya muy conocida— en la que el estado aumenta los cuerpos represivos bajo el pretexto de cuidar la seguridad, pero el crimen más bien avanza y se consolida.

Los cuerpos represivos del estado no habían tomado parte hasta ese momento en ninguna especie de guerra contra el crimen, estaban simplemente ahí, como si esperasen algo. Todos los llamados de alerta que hacíamos desde la izquierda acerca del aumento armamentista del estado eran tachados como lo que yo denominaría la etiqueta de “paranoia antiseguridad”.

No obstante, a pesar de que las fuerzas especiales militarizadas no intervenían directamente para disolver manifestaciones como se hace ahora, sí hubo un aumento considerable de abusos policiacos contra jóvenes de barrio, artistas y activistas. Todo esto desembocó en una lucha contra la represión que unió a toda la izquierda chihuahuense y tuvo su clímax en la marcha de 2003, “¡Si eres diferente, eres delincuente!”, realizada en la capital del estado. Fue en ese contexto que un suceso cristalizó definitivamente mi visión sobre la guerra... pero esto fue en el Bajío mexicano.

Fui convocado a León, Guanajuato, para asistir a una reunión nacional de la Liga de Unidad Socialista, organización a la cual yo pertenecía entonces. Durante la reunión notamos la ausencia de un joven camarada y, más adelante, nos sorprendió una llamada de este mismo camarada en la que nos informaba que no había asistido porque él y otros manifestantes estaban rodeados por la policía.

Así, un grupo de camaradas fuimos comisionados para trasladarnos al lugar y asistir al grupo de manifestantes acosados por la policía. Como la manifestación no había sido muy numerosa —apenas unos cincuenta—, esperaba ver a un grupo de jóvenes jaloneándose con unos policías abusones en medio de un zafarrancho. Pero me quedé frío cuando arribamos a un pequeño zócalo donde unas cuantas decenas de jóvenes, de entre 15 y 20 años, estaban totalmente rodeados por cientos de elementos policíacos fuertemente armados: había equipos antimotines, rifles de alto poder, perros y hasta un helicóptero rondando el área.

En medio, un funcionario de apellido Cabeza de Vaca, del PAN, apretaba las mandíbulas para no dar la orden de destrozar a los jóvenes. El municipio había prometido que estos jóvenes no volverían a rayar el centro de la ciudad.

Por fortuna, gracias a una cámara de televisión, junto con algunas personalidades de la izquierda local, académicos y periodistas que fueron arribando poco a poco al lugar, y a nuestra propia presencia, logramos detener la represión.

Pero entonces tuve una visión, no era nada más Chihuahua y no era únicamente el PRI o el gobernador ultraderechista Martínez, eran todas las ciudades y los principales partidos, era todo el contexto. El Estado mexicano se estaba preparando para reprimir a la población y, por fin, comprendí a cabalidad aquellas palabras que dijera Luna: la guerra de *allá* se continuaba *aquí*.

El capítulo inmediato de la lucha contra la guerra sería, desde luego, la llamada “guerra contra el crimen” desatada y nunca oficialmente declarada por Calderón en el 2008. Pero entre 2003 y 2008 siguieron ocurriendo cosas que reforzaron mis ideas, y pido una disculpa porque seguiré rodeando el punto un poco más.

En 2005 fui invitado a participar en una escuela política internacional en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Ahí pude conocer a varios camaradas de América Latina; de Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Brasil. Para ser breve, puedo decir que al conocer más a detalle la experiencia de los demás países latinoamericanos concluí cuatro ideas generales.

Primero, que los planes neoliberales avanzaban en todo el subcontinente de la mano del Consenso de Washington. Segundo, que los principales objetivos del modelo eran los recursos naturales y energéticos. Tercero, que las diferencias en la aplicación del modelo se debían a las particularidades de cada país y a la resistencia local. Cuatro, que los principales retos del Consenso de Washington para la aplicación del modelo eran los gobiernos progresistas, pero principalmente los pueblos originarios.

Aprendí también otra cosa de suma importancia: el neoliberalismo como modelo global había llegado a su cenit en el año 2000 y, desde entonces comenzaba a tomar un giro altamente represivo. Años después leería un texto de Atilio Borón que confirmaría esta percepción, cuando él habla del advenimiento de un “neoliberalismo armado”.

Mis experiencias previas y estos aprendizajes terminaron por convencerme de que en México pronto habría una guerra, por lo menos en el sur mexicano. La cuestión era ahora: ¿cómo comenzaría la guerra?

Mi estancia en Ámsterdam coincidió con el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra Ulises Ruiz en esa entidad. Así que, de acuerdo con mis percepciones, tuve la ocasión de insistir allá en Europa en la importancia de esta batalla. Andreu Coll, un camarada catalán, se interesó en el asunto y me pidió un artículo para el público europeo que sería publicado en *Revolta Global*. Al regresar a México escribí otro artículo titulado “El contexto de la batalla de Oaxaca”. Se trata de un texto que sigo citando porque me parece que tiene un aura un tanto profética. Dejaré que ustedes juzguen:

Es evidente que México se debate en una gran crisis política nacional en medio de una singular coyuntura política que podría catapultar a

los movimientos sociales y políticos a la perspectiva de derrocar al estado mexicano, o bien una peligrosa y violenta camarilla de poderosos pro-imperialistas podrían pretender gobernar con el terror.

Dentro de unos días el ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa tomará posesión de la presidencia de la República seguramente en medio de protestas masivas. El sexenio de Vicente Fox puede ser denominado el sexenio del fracaso en todos los sentidos. No solamente porque no cumplió sus promesas de hacer avanzar la democracia y dismantelar al estado corrupto heredado de los sexenios priistas, sino porque desde el punto de vista de la agenda del Consenso de Washington, no pudo lograr las llamadas reformas estructurales, que consisten en la privatización de los recursos naturales y energéticos y las reformas fiscal y laboral que permitan mayores facilidades a los empresarios.

El artero y escandaloso fraude electoral presidencial que dio como 'ganador' a Calderón, operado tanto por miembros del PAN —el partido de Fox—, miembros del PRI, empresas privadas, las instituciones de justicia, y con el apoyo de los grandes medios de comunicación y la Casa Blanca, debe tomarse como una fuga hacia delante de la derecha mexicana, a la cual se le acaba el tiempo, engranada a la apuesta neo-imperialista de Estados Unidos ahora en duda. Antes de que los movimientos sociales masivos se presenten en México como en Sudamérica o bien que el consorcio petrolero militarista que gobierna en Washington termine de derrumbarse, los poderosos en el país harán lo necesario para remontar los seis años perdidos del foxismo, incluso arriesgando un levantamiento de la población.

El conflicto en Oaxaca no puede reducirse a un conflicto por falta de canales democráticos como quieren pregonar los civilistas del pensamiento débil. De hecho, el conflicto en Oaxaca está enredado en la pugna por una de las zonas geoestratégicas más importantes del mundo, lo cual le confiere al conflicto una importancia global e histórica como trataremos de demostrar. Oaxaca está en el corazón de una de las dos zonas, junto con la cuenca amazónica, más

ricas en biodiversidad del mundo, ésta es precisamente la zona que mayormente coincide con las características de las contempladas por el Plan Puebla Panamá (PPP): las selvas del sur mexicano y Centroamérica, ricas en minerales, maderas, agua, especies, litorales, zonas turísticas de gran belleza, patrimonio cultural prehispánico, tienen además petróleo y gas y podrían ser un importante paso de mercancías del Pacífico al Atlántico y viceversa.

El PPP es la estrategia político-comercial imperial que operaría lo que apenas está firmado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), prácticamente el saqueo de la riqueza de la zona y la sustitución del ambiente rural comunitario indígena por la urbanización industrial de tipo comercial y maquilador. Es inevitable que tal agresión al corazón de México provoque un éxodo masivo de emigrantes hacia el norte aun mayor que el actual, he aquí una de las razones por las cuales Estados Unidos militariza la frontera con México. Pero son precisamente los estados del sur mexicano (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, etcétera), donde está la mayor concentración de pueblos indios en México, y Oaxaca es precisamente el estado con más concentración indígena en el país.

Lo que podría estarse jugando en estos momentos en esta entidad es el futuro de un proyecto de nación, uno sometido a los intereses del gran capital, donde a los pueblos no les quede más que desaparecer disueltos en las capas proletarias, u otro que reconozca el aporte y la autonomía indígena y preserve el ecosistema. Por eso se necesitan criminales al estilo URO, pegados a los intereses de los caciques terratenientes y a los paramilitares que operan en toda la zona, para “gobernar”. Se trata primero que nada de controlar y limpiar la zona del sur de México, en una verdadera guerra de baja intensidad contra la gente. Es por eso que URO se ha distinguido como un represor e intolerante mayormente contra los pueblos indios y los maestros “rojos”.



JAVIER LLAUSÁS: EMPRENDEDOR DE LA PAZ

Andrew Paxman

¿Es posible ser empresario y altruista a la vez? ¿Es congruente practicar los negocios y predicar la paz? Hay una larga tradición ideológica en México que contestaría a ambas preguntas con un contundente “no”. Como apuntó Enrique Krauze en *La presidencia imperial*, *capitalismo* era una palabra maldita en los años sesenta, y en ciertos rincones de la academia y la prensa la idea de que los empresarios son una clase sospechosa sigue siendo un artículo de fe.

Los que buscan una respuesta menos ideológica y más empírica a esas preguntas bien podrían fijarse en Javier Llausás. Egresado del Tec de Monterrey y radicado desde 1989 en Culiacán —donde tiene una empresa de servicios de refrigeración llamada Thermo King—, Llausás no tiene un nombre que suena afuera de su natal Sinaloa, lo que se debe en gran medida a su notable modestia. Sin embargo, Llausás ha dedicado buena parte de sus 55 años de vida a promover el deber comunitario entre los empresarios del estado. Ha ejercido como presidente de la filial de Coparmex y ha participado como consejero en varios organismos estatales que promueven el emprendimiento, la seguridad pública y la democracia electoral.

Sobre todo se ha comprometido a combatir la maldición de la violencia que ha manchado el nombre de Sinaloa y hecho que Culiacán se encuentre cada año entre las cinco ciudades más violentas de la nación, medida por tasa de homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad

Pública. En 2011, con la ayuda de ocho pares de la iniciativa privada, Llausás lanzó una atrevida estrategia para rescatar Altata, en el municipio colindante de Navolato. Altata era una meca turística de los culiacanenses de clases media y popular, a la que en tres años una tendencia criminal —homicidios, robos, asaltos a turistas— había transformado en pueblo fantasma. Su policía ya no funcionaba, los agentes eran asesinados o huían. Fuentes locales culparon a una lucha entre bandas afiliadas a los cárteles de Sinaloa y de Juárez.

“Rescatemos Altata” empezó por convencer al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Francisco Córdova Celaya, de mandar elementos de la policía estatal a detener a los delincuentes. En pocas semanas arrestaron a 95. Luego se organizó una caravana de 300 vehículos para ir a Altata un fin de semana y recuperar el pueblo en forma tanto simbólica como física. Los mil participantes llenaron sus restaurantes y disfrutaron de su malecón. Sentaron un precedente, ya que el equipo de Llausás y las autoridades locales revivieron o establecieron toda una serie de eventos para seguir recuperando a los turistas, así como el Festival de Jaiba o los concursos de papalotes y castillos de arena. Hoy, Altata continúa buscando gozar su libertad y su turismo.

Pero estos esfuerzos no eran suficientes. Llausás vio en los expedientes de los delincuentes que casi todos tenían entre 17 y 25 años; habían ganado 1,500 pesos por coche robado o un sueldo fijo como “halcones” para los cárteles. Se dio cuenta de que para asegurar una paz duradera tendría que proveer alternativas para esos jóvenes. Con el apoyo de Córdova Celaya y del organismo australiano Instituto de Economía y Paz, e inspirado por el programa Tijuana Innovadora, Llausás y sus amigos empresarios ayudaron a los pueblerinos a establecer pequeños negocios para rentar kayaks y jet skis o para operar farmacias. Uno de los nueve, un ingeniero colaborador de la NASA, llamado Eduardo

El noreste estaba por debajo de los datos nacionales de violencia hasta 2009, esto cambió por el incremento de la tasa de homicidio para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Guizar, concibió el proyecto *Near Space Explorers* para involucrar a los alumnos de la prepa local en la construcción de microsatélites, impulsados por globos de helio. Varias docenas de jóvenes locales han participado en él.

Fue por medio de “Rescatemos Altata” que Llausás recibió una invitación a emplear sus instintos emprendedores y filantrópicos —aunque él prefiere el término *responsabilidad social* a *filantropía*— para proyectos de más amplio espectro. El ofrecimiento vino de Alberto Coppel Luken, uno de los cinco hermanos dueños de la cadena minorista nacional Coppel y amigo suyo desde la prepa. Coppel Luken lo invitó a dirigir los programas sociales de su Fundación C1, que ya tenía un programa ambicioso para rescatar los 1,150 parques públicos de Culiacán y Navolato, la gran mayoría de ellos descuidados. En abril de 2014, Llausás aceptó.

“Parques Alegres” ha resultado un largo trabajo en elaboración. Coppel Luken y Llausás comparten la visión de que un parque puede ser un sitio fundamental para promover el “tejido social” de una comunidad, pero para sostener cualquier plan de recuperación hay que involucrar a los lugareños. Hay que guiarlos sobre cómo trabajar primero entre ellos mismos y, segundo, con los municipios y la iniciativa privada. Así, la Fundación C1 emplea a 23 asesores para cultivar proyectos de rescate en 50 parques cada uno. Empiezan por tocar timbres y convencer a los vecinos de formar comités. Luego estos presentan sus planes a las autoridades y empresas locales. Los fondos para mejorar los parques vienen de estos tres grupos, no de la Fundación C1, cuyo rol es el de asesorar. Hasta la fecha se han formado 800 comités, de los cuales Llausás calcula que unos 450 están funcionando bien.

Ahora la Fundación C1 opera unos ochos programas sociales y quizá el más ambicioso es “Culiacán Participa”. Enfocado por lo pronto en las seis colonias más afligidas por el crimen, el programa emplea un acercamiento multifacético para restaurar el tejido social local. Escuelas y empresas, parques y calles, todas son objetos de estudio y blancos de un remedio tanto económico como social, como el que funcionó en Altata. Unas 30 organizaciones ya están involucradas. No solo buscan cómo capacitar a

jóvenes, generar empleos y recuperar espacios públicos, sino que ofrecen servicios sociales como consultas médicas.

Llausás sueña con una Culiacán libre de violencia, donde cada joven tenga la perspectiva de un trabajo digno. Es un sueño obstaculizado por eventos de fuerza mayor. En 2008, Culiacán se volvió un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán y sus exsocios, los Beltrán Leyva. Entre 2012 y 2015 la cuota de sangre disminuyó en alguna medida, pero a partir de enero de 2016, con la (tercera) detención de Guzmán, y aún más desde su extradición a Estados Unidos, la batalla por Culiacán se ha intensificado, en parte debido a una lucha interna en su cártel. Otro obstáculo ha sido la apatía de muchos culiacanenses. Como observa una reportera local: “La violencia ha sido normalizada. La gente tiende a respetar al narco”.

No obstante, Llausás piensa a largo plazo. Menciona Medellín, exfeudo de Pablo Escobar y por décadas una de las ciudades más violentas de las Américas. Desde hace doce años —gracias en parte a la participación de la iniciativa privada— Medellín ha visto notables mejoras en la calidad de vida a todo nivel socioeconómico; ya goza de una reputación como ciudad innovadora y destino turístico. Más cerca de casa, Ciudad Juárez ha logrado bajar su tasa de homicidios notablemente, con la ayuda de proyectos sociales en los que trabajan juntos los ciudadanos, los empresarios y las autoridades. Según Llausás, esa es la triple alianza que con mayor eficacia puede asegurar la paz.





Foto Luis Brito

< Javier Llausás Magaña

PAZ POSITIVA EN CULIACÁN

Javier Llausás Magaña

En el año 2011, la revista *Forbes* publicó un artículo en el que se presentaba la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo de acuerdo con el Índice de Paz Global. Dentro de esa lista, la ciudad de Culiacán estaba ubicada en el lugar número 24. Estos datos me alarmaron y me llevaron a investigar sobre el Índice de Paz y tratar de entender por qué la ciudad de Culiacán integraba esa lista. De esta forma, me acerqué al Instituto de Economía y Paz, que es un *think tank* nacido en Australia, por iniciativa del sector privado, y se dedica a analizar las causas de la violencia en el mundo, así como a realizar diagnósticos sobre el impacto económico negativo y positivo que tiene la violencia en los países.

México es uno de los tres países que, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, lleva a cabo un estudio acerca de la violencia a nivel país, utilizando una metodología estandarizada que sigue el modelo de Índice de Paz Global. Para el cálculo del índice en México se tienen en cuenta siete indicadores ponderados que incluyen mediciones sobre homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, eficiencia del sistema judicial, delitos con violencia, presos sin condena, financiamiento de las fuerzas policiales y los crímenes cometidos por la delincuencia organizada.

Al conocer la metodología para el cálculo del Índice de Paz, supe que la ciudad de Culiacán estaba dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo debido a que la tasa de homicidios cometidos por cada 100,000 habitantes es de las más altas del mundo. En la ciudad de Culiacán

se comenten 42.27 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, que cada año se cometen cerca de 400 homicidios. De ahí que la ciudad sea señalada como peligrosa por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y que las inversiones de capital no lleguen ni a Culiacán, ni a Sinaloa; sin que ni siquiera el sector público y privado se percaten de esa situación.

Ante el panorama adverso, y en conjunto con un grupo de ciudadanos y empresarios, emprendimos distintos proyectos que tenían como propósito generar lo que el Instituto de Economía y Paz llama “paz positiva”, que en resumen es el conjunto de actitudes, instituciones y estructuras que contribuyen a crear y sostener sociedades pacíficas.

Uno de esos proyectos consistió en recuperar una de las playas más visitadas por los habitantes de los municipios de Culiacán y Navolato: playa Altata. Esta iniciativa consistió en lograr que la delincuencia organizada no continuara arrojando cuerpos humanos en la playa y que cerca de 100 delincuentes fueran detenidos con ayuda de las autoridades municipales, por medio de un comando especial de policías de élite de seguridad.

A estas acciones se sumaron grupos de ciudadanos que recorrieron los varios kilómetros que conforman la playa de Altata en una caravana de autos, en un acto simbólico que representaba que ese espacio de recreación familiar y público regresaba a tener la función de lograr la cohesión social y familiar, en contra de la violencia generada por grupos criminales y la delincuencia organizada.

Actualmente, cada año miles de personas disfrutan la playa de Altata, y muchos microempresarios generan ingresos para sus familias por medio de los negocios que se instalaron a lo largo de un corredor gastronómico y turístico creado desde la recuperación de la playa a fines del año 2011.

Siguiendo con esas iniciativas, hemos coordinado también la recuperación de cientos de parques públicos que fueron abandonados por los ciudadanos debido al clima de violencia ascendente en el estado de Sinaloa, derivado de la lucha contra el narcotráfico emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

De esta forma, hemos trabajado en el proyecto Parques Alegres IAP —patrocinado por el Grupo Empresarial C1—, el cual se enfoca en contactar a los ciudadanos que viven cerca de un parque público, pero que han dejado de utilizarlo como una opción de esparcimiento y de socialización. Un grupo de jóvenes coordinadores toca la puerta de las casas, les deja folletos informativos, y después de varias visitas comienzan a generar un equipo de trabajo formado por los vecinos. Los participantes, después, van poco a poco recuperando el parque, hasta que es rehabilitado en su totalidad, y es de nuevo apropiado por todos los vecinos de la zona.

Con base en la experiencia del rescate de la playa de Altata y otros proyectos que coordinamos, he comprendido que una de las formas para combatir la violencia es acercar a los ciudadanos a las iniciativas de recuperación de espacios públicos, que buscan generar impactos positivos en la creación de valores de los niños, los jóvenes y en general de toda la población. Esto a su vez genera diferentes actitudes y hará que se logre un ambiente de mayor confianza entre la población y las autoridades.

En suma, he visto que la unión entre ciudadanía, empresarios, académicos y gobierno es la clave que propiciará los cambios necesarios para combatir la violencia; y que no solo las acciones de gasto gubernamental en seguridad y armamento lograrán la reducción de los indicadores de violencia. El éxito del trabajo que hemos emprendido radica en convertir una buena práctica social en política pública.



SILVIA YERMO

Diego Enrique Osorno

Por lo menos una mujer es asesinada cada semana en Sonora solo por el hecho de ser mujer. Sus atacantes suelen ser sus propios esposos, examantes, amigos, familiares, o bien, desconocidos; mientras que el lugar habitual de los crímenes es su propio domicilio, donde los feminicidas las agreden con armas de fuego, a golpes o cuchillazos. Una buena parte de las víctimas tenían entre 21 y 30 años de edad cuando perdieron la vida.

En otra época, la información que permite tener esta radiografía de los asesinatos de mujeres se hubiera perdido en el desierto de las estadísticas oficiales, pero gracias al Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio se pudieron documentar por lo menos 444 feminicidios ocurridos entre 2008 y 2015 en este lugar del noroeste de México.

Silvia Núñez Esquer, quien lidera los trabajos del Observatorio en Sonora, tiene un nombre que se deriva de *selva* en latín. Silvia es también una mujer que ha sido varias mujeres a lo largo de su vida. La Silvia a la que ahora me toca presentar es la que ha cultivado la defensa de los derechos humanos en este yermo de impunidad, ubicado en un sitio del país donde leyes injustas, coerción de libertades, discursos de odio y políticas absurdas ocurren con la misma normalidad con la que sale el sol todos los días.

La lucha de Silvia contra la violencia hacia las mujeres viene desde los sesenta, cuando declararse feminista era un asunto de alto riesgo y había

que asumir las consecuencias. Pero ridículas, locas, exageradas e ignorantes, son calificativos que Silvia y sus compañeras siguen recibiendo por hacer su labor en este páramo en el que el horror y la belleza suelen convivir. En medio de esta realidad, Silvia logró en noviembre de 2013 que se incluyera el delito de feminicidio en el Código Penal estatal.

Sin embargo, el número de mujeres asesinadas en Sonora sigue aumentando año con año. Si en 2008 eran 40 las víctimas, en 2015 la cifra había subido a 62. Las sociedades del norte del país, lo sabemos, están enfermas de machismo, tanto o más que sus respectivas instituciones. Por eso es que en ambos mundos se enmarca el trabajo de Silvia. Recuerdo el caso del conductor de noticias locales que condenó a una maestra por participar en un concurso playero de baile, diciendo al aire que él no solo la correría del trabajo, sino que —tal cual— la mandarían matar.

Además de una sanción contra el locutor, Silvia y un grupo de activistas consiguieron acordar con el sindicato de radio y televisión la creación de un manual de lenguaje no sexista para tratar de contener la avalancha de comentarios misóginos que acaparan las transmisiones cotidianas. Como periodista que es también, Silvia sabe el poder que puede tener lo mismo un noticiero que una telenovela para mantener o acrecentar el vasto reino de la misoginia mediática.

Si alguien quiere estar al día con la lucha librada por Silvia, vale la pena visitar <www.mujersonora.com>. En este portal de periodismo feminista podrán encontrarse con análisis legislativo, estadísticas, sitios de ayuda y un seguimiento puntual del siniestro de la Guardería ABC, en el que 49 hijos de obreros murieron el 5 de junio de 2009 a causa de la corrupción. Silvia no ha dejado de dar seguimiento a esta atrocidad aún impune. Fue en este contexto en el que me tocó conocerla y verla acompañar a las familias de las víctimas, lo mismo en marchas que analizando la documentación sobre el caso.

**Necesitamos
cambios efectivos.
Ya no queremos
que cuando nos
pregunten “¿de qué
murió?” tengamos
que contestar:
“Murió de ser mujer”.**

El escrito más antiguo que encontré en su blog data de agosto de 2008. Ahí Silvia recuerda algo que suele pasar desapercibido en luchas cruciales como en la que ella participa:

Lo malo de sentarse a la mesa cuando todo está listo y servido es no ponderar en su justa medida los esfuerzos previos al festín. La desconsideración es consecuencia de no preguntarse si quiera quién lo hizo, cuánto tiempo invirtió, en qué condiciones, si se cansó o si le causó algún dolor.

Lo mismo ocurre con los logros que a través de la historia van apareciendo como producto de las luchas sociales para disfrute de las nuevas generaciones y que se consideran normales y sobre todo naturales, sin reflexionar sobre sus antecedentes. Por ello es tan absurdo pensar en que podrían no existir o en las condiciones que se producirían si alguien por decreto los desapareciera de pronto.

Silvia, la mujer que con su escritura, su análisis y su activismo cultiva humanismo en el yermo de la impunidad para los feminicidas. Silvia, la mujer por la que no olvidamos a las mujeres asesinadas cada semana en Sonora. Silvia Núñez, Silvia Yermo...

Silvia Núñez
Esquer >

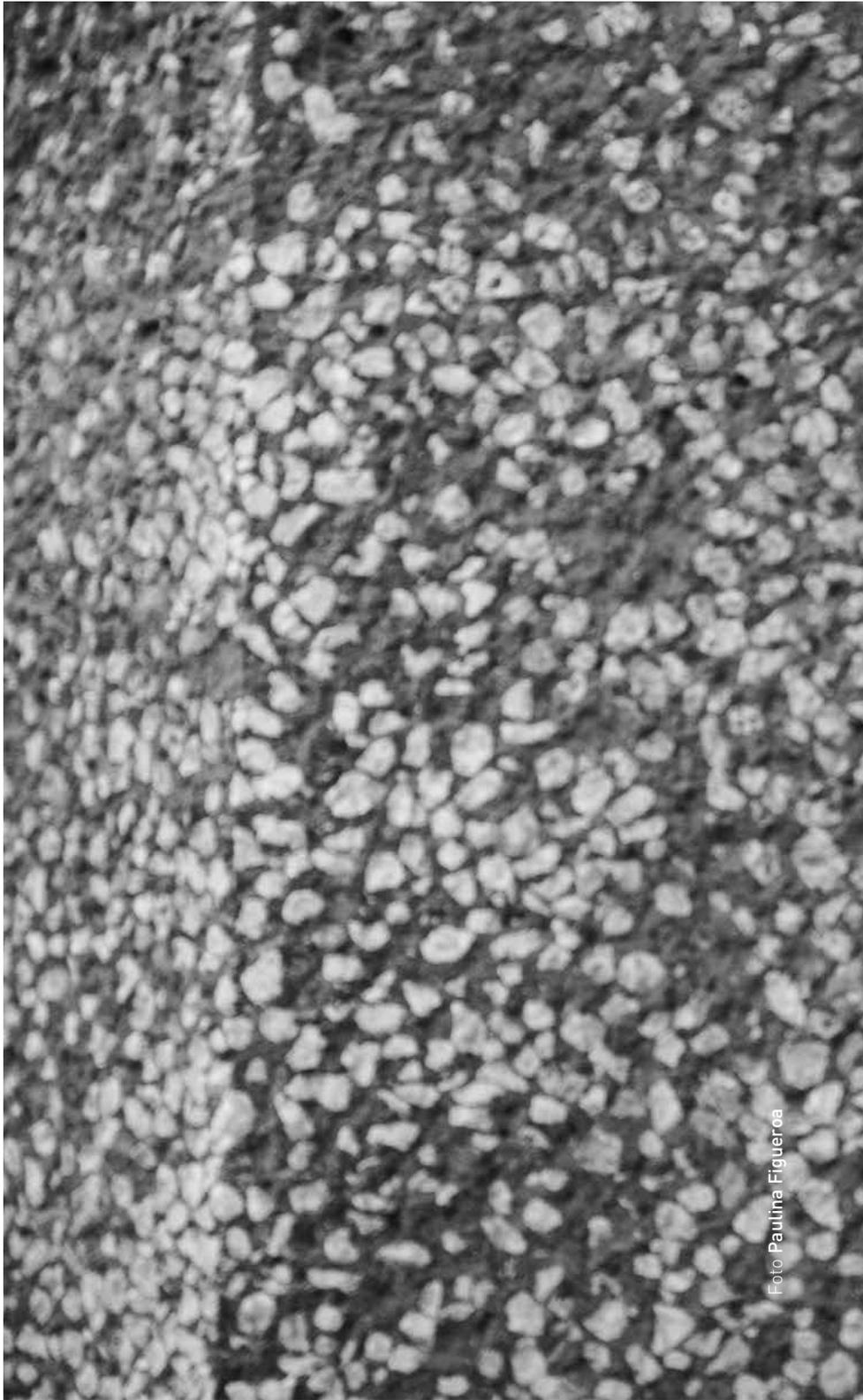


Foto Paulina Figueroa



SER ACTIVISTA EN EL DESIERTO: FEMINICIDIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SONORA

Silvia Núñez Esquer

No hablo en nombre de todas las mujeres en Sonora, pero sí de las mujeres que me ha tocado ser en las diferentes etapas de la vida. Quiero compartir un poco de nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos, lo que hacemos como una pequeña contribución que forma parte, a su vez, del universo de acciones para construir la paz.

Cuando me dijeron que escribiría sobre lo que estamos haciendo como activistas en nuestros lugares de residencia, pensé: ¿qué de todo? Porque el activismo social nunca para. Siempre hay una inconformidad, una política mal aplicada, una ley injusta, una medida que afecta, que limita libertades, un discurso de odio que hay que parar. Pero también siempre hay una propuesta que impulsar. Esa es la esencia del activismo social o, por lo menos, ese es el que conocemos allá en el noroeste, allá en el desierto en el que vivimos.

Hasta hoy hemos logrado visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres, emulando a las feministas que desde los años sesenta y con mucha visibilidad en los años setenta, impulsaron el activismo feminista a la par con demandas sociales generales en Sonora. Hemos buscado siempre cohesionarnos con otras mujeres en temas coyunturales específicos, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio (OCNF). Hemos logrado que nos respeten, hemos logrado consolidarnos como una fuente confiable de información desde la ciudadanía, hemos logrado

que los organismos internacionales nos escuchen y nos den el lugar de contrapeso en relación con los informes oficiales de los Estados parte, en este caso México. Hemos logrado también estar en cuanto informe, iniciativa de ley o protocolo que se haya publicado en este país como la única red ciudadana con trabajo sistemático de documentación de la violencia feminicida por casi diez años. Hoy, el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio, del cual soy integrante, es tomado como fuente por tesis-tas, investigadores, documentalistas, periodistas de investigación, y hasta funcionarias y funcionarios de gobierno que de pronto hacen referencia a nosotras, reconociendo que ellos mismos no cuentan con información confiable acerca de feminicidio en México.

Sin duda uno de los momentos más trascendentales, por lo que significó para la consolidación como una organización confiable en la producción de datos, fue cuando impulsamos la tipificación del feminicidio en el Código Penal de cada una de las entidades en donde contamos con integrantes del Observatorio. Ese fue un proceso que duró aproximadamente cuatro años en el país, y dos en Sonora.

De agosto de 2011, cuando mencionamos por primera vez en una rueda de prensa en Hermosillo la necesidad de incluirlo en el Código Penal, a noviembre de 2013, cuando por unanimidad se aprobó en la Sexagésima Legislatura local la reforma para incluir como un delito autónomo al feminicidio, hay un abismo de diferencia. Ridículas, locas, exageradas e ignorantes son algunos de los calificativos con los que somos obsequiadas las promotoras cuando vamos más adelante del pensamiento, a menudo obtuso, inculcado por años en algunas de las escuelas de derecho de las universidades. Pero si a eso se agrega que algunos de los detractores de las reformas planteadas como necesarias por las organizaciones de la sociedad civil, son titulares de los poderes o de las instancias de procuración de justicia, pues el resultado es una aparente opinión docta que nos aplasta mediáticamente como mujeres necias que acusamos a los feminicidas sin razón.

Todo aquello que argumentaban Jill Radford y Diana Russell para demostrar que el delito de homicidio no alcanzaba a describir todo lo que

les hacen a las mujeres antes, durante y después de privarlas de la vida, pasaba desapercibido para quienes estaban en contra de la tipificación del feminicidio. Esa fue justamente nuestra lucha: convencer, explicar, cabildear, investigar, escribir, documentar, buscar el consenso, ofrecer datos contundentes.

Pero no somos la única agrupación de mujeres y organizaciones que estamos en la lucha diaria por la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Existen otras redes nacionales, que algunas activistas cruzamos como otro de nuestros espacios de incidencia. Una muy importante es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), espacio desde el cual también se han tenido importantes logros de incidencia en defensa de una vida libre de violencia contra las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esa es una de nuestras fortalezas para seguir en la batalla diaria, con el respaldo nacional y regional.

Y en Sonora hemos podido trasladar esa confiabilidad hacia nuestro ámbito de influencia. Haciendo red con otras mujeres y organizaciones hemos podido emprender acciones de incidencia tanto en legislaciones específicas como en políticas públicas. No solo eso, hemos podido penetrar a organismos sindicales y gremiales de productores de la región para incidir en la toma de decisiones para corregir prácticas anquilosadas e históricamente acríticas sobre el machismo que las caracteriza. Un ejemplo es el de los medios de comunicación, donde recientemente pudimos influir como mujeres de la sociedad civil para que sancionaran a un conductor muy reconocido y de gran trayectoria en Sonora. Él fue finalmente despedido por hacer comentarios misóginos y feminicidas contra una maestra que participó en un concurso de baile de playa y cuya grabación en video se viralizó en redes sociales, lo cual fue considerado suficiente por sus patrones en Ciudad Obregón para despedirla. El conductor afirmó que él “no solo la correría, sino que la mandaría matar”. Para esa incidencia nos agrupamos en una red local a la que llamamos Observatorio Feminista Clara Zetkin.

Justo a partir de esa incidencia se generó también la estrategia comunicacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la

Televisión (STIRT), mismo que sancionó al conductor temporalmente para que no pudiera utilizar ningún micrófono de radio o televisora comercial en tanto no cumpliera con ciertos requerimientos. Disculpa pública y el compromiso de no repetición eran obligados. Pero lo que sucedió después fue lo mejor. Sabemos que existen manuales de lenguaje no sexista, pero el STIRT tomó la decisión de crear el suyo propio, para implementarlo en los medios y que sus miembros, así como los *freelancers* que requieran hablar frente a micrófono, deban acatarlo. Pues bien, nos permitieron formar parte del proceso hacia la elaboración de un manual mínimo que pretende avanzar hacia un producto más completo.

Estamos trabajando ya un decálogo sobre “lenguaje incluyente, no sexista y libre de violencia”, del cual ya se presentó la primera propuesta. Cuando este quede terminado, sería de aplicación no nada más para Sonora, sino para todo el país. Esa manera de aplicar la experiencia que hemos acumulado por años es una forma de construir la paz para las mujeres, pues con estas acciones se atempera el odio permitido e instrumentado por varios medios.

Pero hay otros sectores de decisión que nos han incluido en sus procesos hacia mejores prácticas. Los ganaderos de Sonora son un sector que, aunque no lo pareciera, tienen su cuota de poder tanto en la economía como en la vida política del estado. Sonora es una entidad ligada e identificada con las actividades agropecuarias, por lo que las y los ganaderos son un factor importante en la construcción de cultura. Y son ellos quienes organizan la fiesta ganadera más importante del año. Y con ello se viene también la pléyade de artistas, llamados hoy “regionales”, que han dado en tomar como sus temas la violencia contra las mujeres, normalizándola y cantándole a la violencia misma, como una forma de describir lo bien que se sienten los protagonistas de las canciones violentando a las mujeres, incluso llegando al feminicidio. Con los ganaderos también estamos ya coordinadas, y hemos sido invitadas a participar con nuestras consideraciones en las decisiones sobre los elencos que se presenten en el palenque de la Expo Gan, y con ello no censurar, sino estimular a los artistas para que de forma creativa se

salgan del estereotipo del machismo, el sexismo y la misoginia que caracteriza a la música grupera.

Para entender la relevancia de estas acciones es importante anotar que Sonora es uno de los 15 estados en donde se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por la gravedad de la violencia feminicida. Particularmente se solicitó en mayo de 2015 para el municipio de Cajeme, ubicado al sur de la entidad. Y es que en 2014 el contexto generalizado de violencia social y un ascendente *sicariato* hicieron lo que Florinda Riquer llama el “jalón” de las mujeres hacia el remolino de la violencia.

Y no precisamente como protagonistas perpetradoras, sino como víctimas de violencia en general y feminicida en particular. Es así que durante ese año Cajeme destacó por ser el territorio en donde más mujeres fueron asesinadas en Sonora (16% de los casos se concretaron ahí). Dieciséis víctimas habían muerto privadas de la vida por sus esposos, por sus exparejas, por alguien cercano y también por desconocidos. Su asesinato fue perpetrado por una serie de agresores y motivos que forman parte de una especie de limbo, cuando de delitos significativos o de los llamados de “alto impacto” se trata. Y es que el feminicidio no es visto con la misma importancia que el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, o incluso el homicidio, pero de hombres, que se pelean cuerpo a cuerpo, arma con arma, entre iguales, mientras que a ellas las agreden por ser mujeres.

En ese proceso logramos que nuestra información sustentara en forma significativa la pertinencia de declarar la AVGM. No obstante, a lo largo de la investigación se fueron solventando las doce recomendaciones sobre AVGM en Cajeme y Sonora. Y si bien no somos quienes pedimos la Alerta para Sonora, pues se pidió exclusivamente para el municipio de Cajeme por asociaciones locales, sí logramos que se comprenda que sin las organizaciones que documentamos desde tiempo atrás la violencia feminicida, las decisiones no están bien motivadas. Por ello, hemos sido incorporadas también al proceso de rendición de informes en torno a los compromisos adquiridos por el gobierno del estado.

Por si fuera poco, es nuestra proyección nacional la que hace que las personas asesoras que han ido acompañando el cumplimiento de cada

una de las conclusiones, recomienden en repetidas ocasiones que nos incorporen. Y es que no somos muchas las organizaciones que nos declaramos promotoras de derechos humanos. Mucho menos las que nos asumimos como defensoras de derechos humanos de las mujeres.

Es por ello que tenemos desafíos para enlazar las luchas. Las feministas defendemos, entre otros, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Pero algo que nos ha caracterizado es vincular nuestra lucha con la de otras organizaciones que impulsan el ejercicio de otros derechos humanos. Un medio ambiente limpio, el derecho a la educación, a la libertad de expresión, los derechos humanos laborales; no a los presos políticos y de conciencia, no a la tortura; por la diversidad sexual, por un sistema económico sustentable y nacionalista, son algunos de ellos.

Pero regresando a la relevancia del activismo; cuando las mujeres del noroeste son asesinadas, usualmente sucede en el contexto familiar, doméstico, cotidiano, en donde creían estar seguras. El lugar principal donde las encuentran es en su propio domicilio, su casa, una escuela o una cuartería si se trata de una jornalera agrícola migrante. En el exterior o interior, pero en el territorio que constituye su hogar. Algunas veces aparecen enterradas en su propio patio. Y ahí estamos nosotras para documentar sus muertes.

Algunas de las variables de los feminicidios documentadas por el OCNF están relacionadas con la víctima, otras con el agresor y otras, muy importantes, con el contexto en el que ocurrió el feminicidio. En todo caso, los actos violentos se refieren a todas aquellas acciones que hicieron sufrir a la víctima y no necesariamente solo los que le produjeron la muerte. La violencia contra la mujer tiene el fin de humillarla, sobajarla, lastimarla, mas no siempre privarla de la vida, aunque en el caso del feminicidio a menudo estas contribuyen a la muerte de la mujer.

Estas agresiones infligidas a las mujeres en Sonora antes, durante y después de privarlas de la vida en el año 2015 se distribuyeron porcentualmente de la siguiente forma: herida de arma de fuego, 33.9%; acuchillada/macheteada, 23.2%; golpes, 21.4%; asfixiada/estrangulada, 14.2%.

Es importante aclarar que algunas de ellas presentan combinaciones de estas, convirtiendo su cuerpo en un repositorio de crueldad y odio.

En cuanto a la relación del agresor con la víctima, en ese mismo periodo documentamos que en 19.6% de los casos el responsable fue el esposo o expareja; 21.3%, conocidos o familiares; 41.6% sin especificar. El lugar del hallazgo tiene una preeminencia: el domicilio de la víctima, pues constituye 58.9% de los casos.

Los motivos son difíciles de establecer, ya que en algunos de los casos había antecedentes de violencia intrafamiliar, por lo que el feminicidio fue el corolario de un continuo de agresiones. Según registro de la autoridad judicial, 37.5% de los feminicidios se produjeron después de una discusión entre víctima y agresor, pero 44.6% se mantienen sin especificar. Los demás se distribuyen por otras motivaciones.

A pesar de que en 2016 se advierte una tendencia a la baja en la incidencia de feminicidio, en lo que va del año han sido asesinadas 18 mujeres en diversos municipios de Sonora —la gran mayoría mujeres menores de 31 años—.

En el negro recuento de los años que llevamos documentando casos de feminicidio en México y, entre otros estados, Sonora, podemos alcanzar a establecer los siguientes datos que nos preocupan y nos han ocupado durante años:

444 feminicidios documentados de 2008 a 2015

462 feminicidios a junio de 2016

62 feminicidios en total durante el año 2015

59 asesinatos de mujeres en 2009, superado en 2015
con 62 en total

15 feminicidios en Hermosillo durante 2015, municipio
con más alto índice

10 feminicidios en Cajeme durante 2015, teniendo la segunda
posición

8 feminicidios en Nogales durante 2015, en la tercera posición

17 feminicidios durante enero-marzo de 2015

- 6 feminicidios durante enero-marzo de 2016
- 7 feminicidios solo en abril de 2016
- 18 feminicidios de enero a junio de 2016
- 29 feminicidios de enero a junio de 2015 (30 al término de junio de 2015)

Ante este panorama que parece continuar con la misma tendencia, necesitamos reforzar el trabajo que nos permite sistematizar la información que nos ayude a incidir en la transformación de la manera de percibir la violencia contra las mujeres, tanto en operadores de justicia como en la sociedad en general. Requerimos más visibilidad, necesitamos que los mecanismos legales de participación ciudadana sean más precisos. Esto es porque, aunque tenemos capacidad para autoorganizarnos y llegar a las cúpulas que deciden, la realidad es que cuando las propuestas de solución se hacen mediante esos mecanismos formales, con los que no contamos ahora, las resoluciones son vinculantes para cambios puntuales.

Las organizaciones sociales necesitamos unirnos y comprender que las luchas no están aisladas, tienen un denominador común. Requerimos libertad, autonomía y herramientas claras de participación ciudadana vinculantes. Como organizaciones de mujeres, urge que documentemos nuestra historia. Hacen falta más documentos en video, películas, libros, fotografía, videoconferencias, blogs, *apps* y páginas web en las que las mujeres podamos dejar testimonio de nuestras luchas, de nuestros avances en el ejercicio de derechos, de cómo estamos viviendo la resistencia al cambio por medio de los micromachismos sutiles que diariamente nos frenan y buscan dificultar el camino para la real igualdad de géneros, y por lo cual tenemos todavía que seguir luchando.

Queremos que ninguna mujer pierda la vida por machismo o misoginia. Aspiramos a que las leyes se puedan aplicar. De otra forma son solamente simulaciones para contabilizar iniciativas presentadas y aprobadas. Muy en especial, las mujeres debemos tener la certeza de que las leyes que tutelan y protegen nuestros derechos están apegadas a la Constitución.

Necesitamos cambios efectivos. Ya no queremos que cuando nos pregunten “¿de qué murió?” tengamos que contestar: “Murió de ser mujer”.



FERNANDO OCEGUEDA, EL RASTREADOR

Galia García Palafox

Cuarenta y ocho horas después de recibir una amenaza, Fernando Ocegueda lo contaba sin aspaviento: “Me llamaron y me dijeron ‘afuera de tu casa hay dos camionetas. Están checándote. Si no dejas de moverle a ese caso, te vamos a matar’”. Después de la llamada salió a la calle, vio dos camionetas en la esquina, regresó a casa y durmió sin sobresaltos.

Hace mucho que Fernando Ocegueda dejó de tener miedo. Dos días después de la amenaza, aún no sabía de qué caso le hablaban. Sus compañeros buscaban en los archivos. Él creía que ni siquiera se trataba de un asunto en el que su asociación trabajara, quien lo llamó se había equivocado. Está acostumbrado a las equivocaciones. Es probable que la razón por la que empezó a buscar cuerpos, huesos, dientes de desaparecidos en Tijuana, Baja California, haya sido eso, la equivocación de un comando armado.

Diez años atrás, en 2007, su hijo Fernando fue “levantado” de su casa. Unos 20 hombres entraron y se lo llevaron. El padre hizo lo que tenía que hacer, lo que sabía que se debía hacer: ir al Ministerio Público, hablar a los amigos de su hijo, levantar una denuncia, llamar a familiares, esperar 72 horas, buscar a su hijo, ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguir esperando, seguir preguntando, seguir esperando.

Ocegueda no esperó sentado. Indagó por su cuenta, se acercó a quien pudiera saber de alguien que pudiera saber algo. Así se enteró de que había policías en la nómina de la delincuencia, que las 72 horas que la autoridad le hizo esperar son horas cruciales, que nadie haría nada si él no lo hacía. Armó su propia red de investigación y la información empezó a llegar a

raudales: pistas, rumores, testigos de oídas, cualquier cosa servía. Se enteró también de que no era el único padre buscando un hijo desaparecido, que había cientos. Los conoció y con ellos empezó a hacer manifestaciones, protestas, plantones en pleno calor bajacaliforniano. “Soportando en la noche mucho frío, en el día mucho calor. Treinta días, con eso logramos que nos dieran una fiscalía especializada que no resolvió los problemas, porque era una simulación del gobierno para podernos quitar de ahí y decir que iban a trabajar”, cuenta.

Se dio cuenta de que para los padres y madres de desaparecidos no había más que trabas, que la autoridad estatal no hacía su trabajo, que no atendía las recomendaciones de derechos humanos, que no entregaba a los familiares las investigaciones y, cuando lo hacía, el expediente era una hoja con tres datos inútiles, que a estos desaparecidos no los buscaba nadie.

*

El 9 de enero de 2009, Ocegueda se enteró de la detención de Santiago Meza, un albañil miembro del Cártel de los Arellano Félix que declaró haber desintegrado en ácido 300 cuerpos. A Meza la Procuraduría General de la República (PGR) se lo llevó a la Ciudad de México y para Ocegueda ahí se habría acabado la historia si a su casa no hubiera llegado por correo la averiguación previa de Meza, “el Pozolero”, con todos sus testimonios.

Nos convertimos en unos investigadores con las averiguaciones que en su momento se podían haber hecho por la procuraduría. Fuimos y encontramos el predio de Loma Bonita, ahí encontramos 60, 70 cuerpos desechos en ácido. Nosotros la localizamos, la encontramos, le hablamos a la autoridad federal, a la subprocuraduría contra la delincuencia organizada, fueron los peritos, geólogos, arqueólogos, caninos y todo mundo fue, un ejército.

En Loma Bonita se encontraron con cuatro o cinco fosas pequeñas. Ocegueda tiene claro el método: “hoyos, cuerpos, hoyos; escarbaban,

echaban y tapaban. En el predio había una casa donde aún estaban los utensilios con que deshacían los cuerpos”.

Un año después encontraron La Gallera, otro predio de “el Pozolero”. Ocegueda llegó al lugar, levantó un pedazo de cemento, metió una varilla: “olía a muerte, a cuerpo putrefacto”.

Cuando los expertos llegaron encontraron una fosa de cemento de tres metros de profundidad por tres de largo y 16,500 litros de emulsión orgánica: una sustancia acuosa principalmente compuesta de grasa humana, pedazos de carne y cabellos. Había también trozos de dientes, anillos, aparatos de ortodoncia y huesos, cientos. El trabajo

que tuvieron que hacer para separar la masa orgánica de los huesos en busca de algún rastro de ADN parecía de ciencia ficción. “En el día se sacaban dos, tres bolsas, se embalaban y se los llevaban a refrigeradores”, cuenta Ocegueda.

“El Pozolero” no habría sido más que otro personaje de leyenda para la historia *narca* del siglo XXI si Ocegueda y su grupo no le hubieran puesto cara y locación al terror, si no hubieran conectado la

infamia de un destripador con la tragedia de madres y padres. Lo que Ocegueda encontraba no eran huesos descompuestos, eran personas, tenían que serlo. Cada diente, cada amalgama, cada resto humano macerado, por pequeño que fuera, era una posibilidad para alguna madre en busca de su hijo.

Ante los cientos de huesos y la materia orgánica que tenían, Ocegueda pidió un banco de ADN. Unas mil personas se hicieron las pruebas. Un par de años después llegó la información: había siete positivos, pero las muestras estaban en tal descomposición que se guardaron, a la espera de que la ciencia avance.

Desde los hallazgos de “el Pozolero”, Ocegueda y otros miembros de la asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California han repetido una y otra vez el proceso de búsqueda, cada vez de manera más sistemática, más experta. En su escritorio hay 280 expedientes. Dice que

Los ministerios públicos federales y estatales fueron rebasados ante el exponencial aumento de las denuncias.

están más completos que los de las procuradurías, que en su agenda de contactos hay buenos y malos; saben de tierras que han sido removidas, de antropología forense, usan drones, hacen visitas a las penitenciarías para hablar con delincuentes que les den pistas. Cuando el expediente está armado y ubicado el predio donde podría haber fosas clandestinas, llama a las autoridades federales para hacer la búsqueda. Ocegueda es la avanzada ciudadana. Los recibe con la mitad del trabajo hecho. “Rascando encontraremos a los desaparecidos, o me desaparecen a mí, pero hay que rascarle”, dice.

Fernando Ocegueda saca cuentas: unas 30 búsquedas, cada una de cinco días, cada día tres o cuatro predios.

—¿Cuánto es eso?, pregunta

—Más de 500.

—No, yo calculo que llevamos 350.

En diez años, 24 casos resueltos. A él le parecen pocos. Ninguno es el de su hijo Fernando. La explicación extraoficial más creíble para él es que los que lo levantaron iban por un vecino, que fue una equivocación de las que ha visto muchas. Su prioridad no es encontrar culpables, es encontrar a su hijo, a los hijos de otros.





Foto Elizabeth Rosales

< Fernando Ocegueda Flores

UNIDOS POR LOS DESAPARECIDOS DE BAJA CALIFORNIA

Fernando Ocegueda Flores

Escribo con el entusiasmo, la fuerza y la decisión que me ha dado vivir la violencia que ha cambiado mi vida. Mi hijo fue secuestrado el 10 de febrero de 2007. No ha regresado. El día que sucedió acudí al Ministerio Público, pero se trataba de la Unidad de Investigación de Delitos Contra Robo de Vehículos, ya que tuve la mala suerte de que la infamia de la violencia me atacara en fin de semana. No logré nada ese día. ¿Por qué? Porque la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro no atiende sábados y domingos, como si los secuestros no sucedieran todos los días, al igual que el robo de autos. Tuve que sufrir dos largos días sin información para poder presentar la denuncia donde se tenía que hacer. No tuve que esperar más de seis horas, como normalmente la gente lo hace, porque conocía a una persona en el Ministerio Público al que acudí.

“Se fue con la novia”. “Al rato aparece”. “Está de rebelde”. “Anda de vago”. Así nos dicen a muchos cuando vamos a reportar una desaparición. No logré nada. No pude esperar y tomé la decisión de localizarlo por mi propia cuenta. Tenía que moverme, hacer algo. Se hicieron cartones, los fui colocando a lo largo de la ciudad. Facebook no era aún tan útil para este tipo de situaciones, de lo contrario también ahí hubiera gritado si alguien sabía o podía ayudarme a encontrar a mi hijo. La búsqueda fue un proceso largo, en el que la depresión no desaparece ni un instante. Todos los días acudía al MP y al Servicio Médico Forense (Semefo). Tal vez pueda

encontrar o saber algo. Así fui conociendo gente en la misma situación que la mía, y, al irnos conociendo cada vez mejor, decidimos unir nuestras esperanzas e impulsos por encontrar a nuestros familiares.

De esta forma comenzó a formarse la organización de Unidos por los Desaparecidos en Baja California. Empezamos con un plantón de 30 días en Mexicali para forzar a las autoridades a que nos dieran la atención que merecía nuestra situación. Logramos la intervención de algunos agentes que tuvieron un actuar superficial, para nada comprometido. Logramos que se creara una fiscalía especializada para atender las desapariciones, pero se trató solo de un calmante para el dolor y no de una cura, puesto que en esta no se hacía ni sucedía nada.

Las autoridades no arrancaban y nosotros tratábamos de acelerar el ritmo que llevábamos. A principios de 2008 iniciamos búsquedas de campo, con aquello que tuviéramos y supiéramos. Estábamos mal preparados para hacer este trabajo, pero no importó, las ganas nos volvían expertos. De 2007 a 2009 fueron años de mucho activismo. Luego hubo un suceso que trajo estrepitosamente la atención al estado de Baja California: la captura de Santiago Meza “el Pozolero”, culpable de haber desintegrado 300 cuerpos en ácido por encargo de diferentes grupos delictivos. Con esto se hizo el circo en Baja California y teníamos que aprovechar la atracción que provocaba el papel del “Pozolero” para hacernos presentes.

Las declaraciones de Meza nos dieron indicios de los lugares en donde podríamos encontrar fosas, en las que probablemente se encontraban los restos de nuestros familiares desaparecidos. Santiago mencionaba varios lugares a los que no acudían las autoridades. A finales de 2009 llegó a mi buzón la declaración de Santiago Meza. Así dimos con Loma Bonita, a partir de esfuerzos y trabajos ciudadanos. Contactamos a las autoridades para comentarles que habíamos encontrado los predios de Loma Bonita que estaban en relación con Santiago Meza.

Después de dos meses encontramos una fosa de tres metros por tres metros donde había 270 cuerpos deshechos en ácido. Mi hijo y los familiares desaparecidos de mis compañeros y compañeras podían estar ahí en esa especie de plastilina de material orgánico. Teníamos que saber.

Teníamos que investigar y estar seguros de tener algo de ellos y terminar con el lúgubre sentimiento de no saber dónde están.

Se compraron palas de lo más rustico que pueda haber, hechas en madera para poder sacar lo que pudiéramos y encontrar algo de nuestros familiares. Dientes, huesos, tornillos quirúrgicos y 16,000 litros de fusión orgánica era lo que teníamos para investigar si ahí se encontraban. Todo se llevó a la Ciudad de México para hacer un análisis de ADN y ver si se podían establecer relaciones entre las muestras y el banco de ADN que se hizo de las familias de desaparecidos.

Desde entonces, el trabajo de la organización se ha centrado en procurar que las personas que viven la violencia de una desaparición no tengan tantos obstáculos al presentar las demandas. Nos enfocamos en que las personas no tengan que pelear un combate extra a la terrible batalla que significa tener un familiar desaparecido, tratando de que la autoridad los auxilie. Para lograrlo hacemos acompañamientos durante los procesos de denuncia, para que se atienda a las personas de la mejor forma posible, ya que, de ir completamente solos, no reciben el mismo trato. Los acompañamientos y el asesoramiento se llevan a cabo en el Poder Judicial del estado, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el Ministerio Público estatal. Vamos a la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público federal, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Fiscalía de Víctimas de la PGR y con los medios de comunicación. Actualmente, hemos cooperado en 60 averiguaciones previas en el ámbito federal.

Unidos por los Desaparecidos de Baja California es una sociedad civil, la cual logramos conformar en un momento en el que las actas constitutivas eran gratuitas. Nos hemos mantenido a partir de patrocinios de empresarios que están dentro de la misma asociación y que han vivido la misma tormenta. Tenemos actualmente 288 personas inscritas, de las cuales solo 40 son miembros activos de la asociación. Hace poco decidimos romper con el gobierno del estado, puesto que nuestras reuniones daban círculos y no se obtenían resultados. ¿Para qué seguir gastando tiempo valioso en reuniones sin sentido, sin resultados, sin compromisos?

No obstante, por otra parte, logramos coordinarnos en cierto grado con la Procuraduría General de Justicia. La subprocuraduría llega a Tijuana periódicamente a emprender búsquedas de fosas a partir de denuncias ciudadanas anónimas que nosotros recibimos en la organización. Nosotros recolectamos denuncias ciudadanas y pasamos un informe a la subprocuraduría sobre las zonas específicas que deben revisarse cuando tenemos un acumulado de alrededor de 15 casos o lugares que inspeccionar. Para hacer este trabajo, en conjunto con la subprocuraduría, tenemos dos drones que nos ayudan a la identificación de los terrenos y que han sido útiles para encontrar varias fosas.

Resumiendo, en nuestro trabajo en Unidos por los Desaparecidos de Baja California nos encargamos de llevar a cabo acompañamientos, buscar fosas y desaparecidos, brindar atención a las demandas anónimas de la sociedad, analizar e inspeccionar terrenos, trabajar con el Congreso del estado para facilitarnos el trabajo, presionar a las autoridades vía los medios de comunicación y hacer peticiones que partan de los problemas que percibimos y de los que ahora hablaré.

Sobre los problemas que enfrenta nuestra organización al efectuar estas labores tenemos el largo tiempo del proceso para obtener una orden de cateo que nos permita revisar los terrenos que las denuncias ciudadanas anónimas nos indican como posibles regiones de fosas. Esto es, sobre todo, cuando se trabaja con la subprocuraduría y luego de que les pasamos los informes de las denuncias recolectadas. Sin embargo, hemos podido superar este obstáculo casi 99% de las veces en que ha aparecido, simplemente hablando con los propietarios o encargados del terreno y solicitando su autorización para llevar a cabo nuestro trabajo. Esto representa sin duda una ventaja de trabajar conjuntamente con los agentes de la subprocuraduría, ya que dentro de su forma de trabajo no cabría la posibilidad de dialogar con propietarios o encargados para obtener una autorización. El proceso de investigación se detendría indeterminadamente hasta la obtención o denegación de la orden de cateo, dejando en el aire o abandonada la posibilidad de encontrar los restos de desaparecidos y conservar la memoria de las familias afectadas por esta violencia. No

obstante, con nuestro apoyo es posible agregar esta posibilidad de diálogo y surcar los impedimentos que puedan aparecer con el proceso de la orden de cateo. La gente que hemos encontrado ha sido benévola, y nos ha permitido hacer nuestro trabajo. A ellos extendiendo mi reconocimiento y les agradezco.

Por otra parte, vale la pena mencionar que muchas de las familias que hemos apoyado en la organización son objeto de estigmas y apatía por parte de las autoridades de procuración de justicia y del gobierno. Nosotros nos topamos con estas dificultades, puesto que el estigma y la apatía disminuyen la calidad con que son tratadas las familias víctimas de delitos o de violaciones a sus derechos humanos.

Sumado a esto, dentro de nuestra organización también surgen inconvenientes. Muchos de nuestros miembros dejan de ser personas activas en las labores porque caen en la desesperación que produce la impunidad y el desinterés de las autoridades. Muchos de nuestros miembros ya no creen en nadie, ni quieren dar más una mínima pisca de su confianza a ningún funcionario o político; están completamente fastidiados. Muchos miembros se han atormentado más por nuestros fracasos y se han cansado de intentar. La comunicación con varios de ellos ocurre cuando se trata de algún cumpleaños o cuando hay algún descubrimiento importante que tenga que ver con algún familiar desaparecido. Simplemente se han divorciado de la labor de la organización. Si hubiera que apuntar a uno de los problemas internos de Unidos por los Desaparecidos en Baja California, sería esta pérdida de esperanza y el fastidio por parte de algunos de sus miembros.

Respecto a las grandes propuestas que hemos presentado, ya hemos sugerido ampliar o estandarizar el sistema CODIS o Sistema de Índice Combinado de ADN, que donó el FBI a México desde el año 2009. Este sistema está compuesto por una base de datos de ADN que nos podría ayudar a identificar de una manera mucho más sencilla muchísimos de los cuerpos que se han encontrado en distintos lugares, como en las fosas. Al estandarizar este sistema en toda la Federación, no me cabe la menor duda, podríamos ir un paso adelante del crimen organizado, teniendo no

solo el registro de ADN de víctimas, sino de personas detenidas, lo cual ayudaría a resolver muchos acontecimientos criminales en los que estén implicadas.

Pero volviendo al tema de desaparecidos, CODIS evitaría muchos deplorables sucesos en torno a la entrega de cuerpos de víctimas a sus familiares, pues ha sucedido que familias reciben el cuerpo que no corresponde a su familiar y las autoridades se percatan de ello tiempo después. Es terrible haber realizado las ceremonias religiosas y actos que conlleva la muerte de un ser amado, y enterarte de que el cuerpo al que brindaste las atenciones, al que despediste, al que honraste con los recuerdos no correspondía a los verdaderos restos de tu familiar debido a un error en la identificación por parte de las autoridades. Es inadmisibles hacer pasar a las familias por otra dura experiencia a causa de una equivocación, además del infame suceso de desaparición. Vale la pena cuestionarse cuántos cuerpos que se han entregado a familiares en verdad han correspondido al familiar desaparecido.

Por estos sucesos y por las facilidades que implicaría tener una base de datos de ADN mucho más grande, que abarque más gente, hemos propuesto la expansión del sistema CODIS. Así podremos traer luz a un proceso de identificación que nos parece oscuro; para que no se entregue ningún cuerpo hasta estar completamente seguros de la identidad de la persona de la que se trata. Sobre este punto me gustaría añadir que existió una mecánica o método que nos permitió encontrar a entre 26 y 28 personas. Se trató de una colección de fotografías que hizo el Semefo, a la cual se podía acceder en su sitio web para que las familias pudieran identificar, por medio de ellas, los cuerpos de sus familiares en caso de que hubieran sido encontrados.

De esta forma se evitaba que las familias con desaparecidos tuvieran que presentarse día tras día en las instalaciones del Semefo para preguntar y tratar de identificar a sus seres amados entre los cuerpos que son llevados a diario a esta instancia. Por desgracia, este mecanismo se suspendió, con el argumento de que el hecho de subir fotos de fallecidos y ofrecerlas en una especie de catálogo daba una pésima imagen. En

efecto, por una cuestión estética se desechó algo que funcionó, lo cual para mí no es un argumento en lo más mínimo convincente. Me parece preferible que las familias, y en especial las madres, no tengan que acudir a un lugar tan duro, difícil y agotador como las morgues del Semefo. Es un sufrimiento extra que agregamos a su dolor. Para mí, esto es una forma de revictimizar a las víctimas al añadirles más sufrimientos, más dificultades, más experiencias nocivas para su salud emocional, como entrar a las morgues día con día, semana tras semana, a intentar encontrar a un familiar, o a varios, entre los cuerpos.

Con la misma intención, en 2009 propusimos la creación de un Instituto Estatal de Ciencia Forense. Pero no se logró que se atendiera esta petición, por lo que ahora proponemos que se cree un Instituto Nacional de Ciencia Forense, el cual pueda dictar, con base en estudios y métodos científicos, el protocolo para tratar con fosas, la realización de las búsquedas y el proceso de identificación de ADN; además del sistema CODIS nacional. Una institución de este tipo podría llevar al país a posicionarse como uno de los más desarrollados en ciencia forense, como el caso del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck en Austria.

Por otra parte, consideramos que la Ley General de Víctimas debe ser armonizada en toda la República. Si bien se trata de una Ley General que deben atender todos los niveles de gobierno, la promulgación de leyes locales de víctimas puede volver más claras y amplias las formas de atender los daños que causan los delitos y las violaciones a derechos humanos. Creemos que esta integración debe completarse lo más pronto posible y, por lo tanto, me gustaría exhortar a los Congresos locales de las entidades que aún no han promulgado una ley en esta materia a que brinden a sus poblaciones esta normatividad, que tanto necesita nuestro país en todas sus regiones.

Además, proponemos que los ministerios públicos mejoren radicalmente su trato hacia las personas, ya que su servicio y la forma en que las reciben los funcionarios que ahí laboran son del todo deplorables. No hay una sola expresión de profesionalismo, madurez, seriedad, prudencia o sensatez por parte de los funcionarios encargados de recibir a las perso-

nas, que por el simple hecho de acudir ahí se encuentran en problemas. Al contrario, en estos lugares reinan la burla, el desinterés, la guasa, la impersonalidad, el sarcasmo y la apatía. Resulta la peor combinación para recibir a una persona con esperanza de conseguir justicia y apoyo, y de hacer valer la ley. Debemos tomarnos en serio la función tan fundamental que desempeñan los ministerios públicos en nuestro país en la procuración de justicia y persecución del delito. Es una institución clave que necesita buenos funcionarios. No podemos permitir que los trabajadores de estos lugares se mofen de las adversidades de la población y que sean ajenos a la demanda de justicia. ¿Qué clase de profesional responde a la desaparición de un hijo con “de seguro se fue con la novia”?

Este tipo de comentarios o respuestas a los infortunios de la población es una absoluta falta de respeto del funcionario hacia el ciudadano, al puesto que desempeña y a nuestras instituciones. En consecuencia, hemos propuesto que el personal que labora en los ministerios públicos sea reevaluado y, en dado caso, remplazado por personas profesionales y capacitadas en cuestiones psicológicas y emocionales.

Asimismo, una cosa que planteamos y hemos logrado, es la reducción de la presunción de muerte a los dos años de no haber podido encontrar a la o las personas ausentes. Antes se tenían que esperar hasta seis años para poder suponer legalmente la muerte de la persona desaparecida. Esto se logró gracias a las negociaciones con el Congreso de Baja California y a nuestro constante activismo, que al final de cuentas también está dirigido a sensibilizar a los jóvenes sobre la situación de violencia que se tiene en México, y en mejorar las formas para combatirla.

Durante el tiempo que estuve buscando a mi hijo me sentí envuelto por la coyuntura en la que me encontraba. Me dejé llevar por las ganas que me motivaban a saber dónde estaba y por el ímpetu de las demás personas en juntar nuestras esperanzas para lograr algo en conjunto: ubicar a nuestros seres amados. Fue la forma en que ocurrieron las cosas lo que me llevó a consolidar esta organización, Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Mis compañeros y yo nos vimos abandonados por las autoridades. Nos sentíamos solos. Yo que me dejé llevar por mis ganas de

encontrar y saber de mi hijo, no sé de dónde vino el valor de hacer todo lo que he hecho. Vino solo, tal vez, pero lo he tenido desde siempre, sin haber perdido ni un poco en ningún momento.

A pesar de que me llegaron amenazas de muerte y tuve que dejar mi casa por un momento, no perdí el valor y seguí trabajando. Poco tiempo después regresé a mi hogar, ya que nunca me quise ir, porque tenía, y tal vez aún tengo, la esperanza de que mi hijo esté de regreso en nuestra casa. Por eso no quería, ni quiero, estar en ningún otro lugar en el posible momento en que él esté de vuelta.

Todo esto me ha mantenido ocupado. A veces pienso que me ha ayudado a no volverme loco. Lograr ayudar a las personas, poder entenderlas y guiarlas por un camino fangoso, espinoso y agotador entre diferentes autoridades e instancias, me calma, me ayuda, me hace bien. Todo esto me ha servido como terapia, me ha aliviado muchísimo al mismo tiempo que ha ayudado a los demás.

El coraje y la fuerza nos lleva a luchar, a movilizarnos, a proponer unas cosas, a lograr otras, a ayudarnos a enfrentar y vencer la violencia, a desenmascararla, y castigarla, a evitarla y evitársela a los demás, a tratar de detenerla y prevenirla. Nos lleva a denunciar las ineficiencias de nuestras instituciones para encararla, y a proponer remedios para someterla. Por esto no dejemos que el activismo se ahogue en la desesperación que produce la impunidad. ¡Sigamos a flote! ¡Trabajando en esto! Esta es ya nuestra vida y estamos seguros de que estamos construyendo algo valiosísimo con ella. Estamos asfixiando a la violencia en este país, porque no debemos dejar que ella nos sofoque.



ESCUCHAR

Alexandra Délano Alonso

The New School for Social Research

Quiero expresar mi más profundo respeto y reconocimiento a los luchadores sociales, que son quienes han llevado la lucha incansable en el terreno, han alzado la voz para que la sociedad conozca lo que está sucediendo en todo el país, y para que el gobierno y la sociedad asumamos una responsabilidad.

La lucha responde a una necesidad imperante de encontrar respuestas, de crear los espacios que faltan para que se dignifique a las víctimas, para que se creen protocolos, leyes, infraestructura institucional para responder a quienes llevan años y hasta décadas esperando que haya justicia; para que las víctimas que se siguen sumando no enfrenten esta misma situación en la que son vistos como delincuentes, y en la que sus familias no son reconocidas. Su reclamo es tanto una visión del presente como de un futuro en el que nadie más tenga que vivir el dolor que ellos llevan marcado. Su lucha es un llamado para recuperar los espacios que hemos perdido, los espacios que han cedido al miedo y al horror de la violencia, espacios desde donde se pueden imaginar y crear respuestas para reconstruir el tejido social, recuperar una visión de comunidad, hilar otro presente, otros futuros.

Escuchar a los afectados y a las víctimas es un primer paso para construir esa paz de múltiples significados. Lo dijo Javier Sicilia en su discurso en el Zócalo capitalino el 17 de abril de 2011:

Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y *escuchar*, que deben nombrar a todos nuestros muertos —a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro—; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esa infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando.

¿Cómo creamos esos mecanismos para escuchar las voces de la comunidad organizada y de los individuos, con dignidad, con empatía, con acciones? ¿Quién los tiene que escuchar y cuál es el mensaje? ¿Qué hay que escuchar y cómo escucharlo? ¿Cómo logramos que los diálogos que se dan no sean una simulación sino un espacio constante para re-imaginar y reconstruir?

Carlos Fong lamenta que hasta ahora no hayamos logrado construir un movimiento nacional por la paz, a pesar de la gran convocatoria que tuvo el movimiento encabezado por Sicilia y los familiares de víctimas en 2011. Pero lo que nos demuestran los testimonios recogidos en este libro es que a pesar de los límites de esa movilización nacional se han construido desde hace tiempo movimientos y soluciones desde el ámbito local. Para entender estas acciones, para apoyarlas e impulsar otras, se nos habla de la importancia de prestar atención al imaginario ciudadano: escuchar para entender cuáles son sus percepciones, sus emociones, en quién confían, cómo trabajan para buscar soluciones. La paz no significa lo mismo en todos lados.

¿Cómo escuchar? El trabajo de Javier Llausás en Sinaloa nos demuestra la importancia de recuperar una democracia participativa en la que la

comunidad decida. Su visión también refleja la urgencia del momento que vivimos y la necesidad de trabajar soluciones ahora y no perdernos en el debate: hay que ser prácticos. También nos demuestra que las soluciones tienen que venir de alianzas multisectoriales; hay que unir las piezas de un rompecabezas en el que participan todos los niveles de gobierno, empresarios, académicos, luchadores sociales, periodistas, medios de comunicación, y ciudadanos de a pie.

Al hablar de la violencia —de las violencias— nos enfocamos en sus múltiples causas, económicas, sociales y políticas, en sus orígenes, su presente, y su persistencia. ¿En qué momento hablar de paz y de reconciliación si la violencia continúa, si se manifiesta de tantas formas? La temporalidad de las respuestas y soluciones que se han planteado responde a la urgencia de ver que se suman cada día más personas a las cifras de más de 100,000 muertos, 28,000 desaparecidos y 300,000 desplazados; pero también un horizonte más largo que busca soluciones estructurales. Los luchadores sociales y las familias de las víctimas que no ceden al cansancio de caminar y al dolor de repetir su historia una y otra vez, dejándonos claro que no podemos esperar, que tenemos que escuchar y responder ahora y después, desde todos los frentes posibles.

No podemos esperar a que se terminen las violencias. Miles de familiares siguen enfrentando abusos, discriminación, promesas incumplidas. Tenemos que hablar del duelo que viven.

ciliación si la violencia continúa, si se manifiesta de tantas formas? La temporalidad de las respuestas y soluciones que se han planteado responde a la urgencia de ver que se suman cada día más personas a las cifras de más de 100,000 muertos, 28,000 desaparecidos y 300,000 desplazados; pero también un horizonte más largo que busca soluciones estructurales. Los luchadores sociales y las familias de las víctimas que no ceden al cansancio de caminar y al dolor de repetir su historia una y otra vez, dejándonos claro que no podemos esperar, que tenemos que escuchar y responder ahora y después, desde todos los frentes posibles.

Las vidas de los familiares de cientos de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y exiliados han cambiado de manera fundamental. Sus planes, su futuro, están en pausa. Están en la lucha pero también en el limbo de no saber dónde está un familiar desaparecido, en el dolor permanente que provoca la falta de justicia por un feminicidio, un homicidio, o la búsqueda incompleta de un desaparecido. La vida se detiene. Y para construir eso que se ha llamado la cultura y la economía de la paz tenemos que reparar ese daño inconmensurable que toca de forma directa a las familias incompletas, pero que también nos toca a todos como comunidad. No podemos esperar a que se terminen las violencias.

Miles de familiares siguen enfrentando abusos, discriminación, promesas incumplidas. Tenemos que hablar del duelo que viven y del duelo en el que debemos ser partícipes como sociedad. Escuchar a los familiares, llorar a esos muertos que son nuestros, es parte del proceso de entender cómo se han ido desgarrando los hilos que nos atan como comunidad. Escuchar nos permite construir la solidaridad como un lazo permanente que ata a la comunidad, como lo describe Rossana Reguillo; ese lazo que nos permita reconstruir el tejido social.

Hay esfuerzos muy concretos para avanzar en proyectos de reparación, reconstrucción, reconciliación y recuperación del espacio público. Salir a marchar, sentarse en la plaza a bordar, renombrar una calle, pintar un mural, resignificar un terreno o un parque para hacerlo un lugar de duelo, un lugar de llegada para las familias, y un lugar de tregua para todos. Espacios de memoria como los que describe Fernando Ocegueda en Tijuana nos permiten escuchar y entender lo que sucedió ahí, recordarlo, hacer duelo, y también entender por qué sigue sucediendo. En los terrenos en los que disolvía cuerpos “el Pozolero”, espacios que las familias buscan recuperar para dignificar la memoria de las víctimas, es evidente la pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de solidaridad entre víctimas y comunidades, y la presencia constante, vigilante, amenazante del crimen organizado. Es ahí donde aprendemos a escuchar, a ver, y a crear espacios en donde los diálogos no se apaguen. Espacios donde los jóvenes encuentren otras posibilidades, espacios en donde se encuentren comunidades. Que no sea nada más en la eterna sala de espera del Ministerio Público donde se conozcan los que comparten el dolor y la urgencia de hacer algo.

Si escuchamos, si atravesamos ese dolor —como lo han hecho quienes siguen luchando contra la impunidad y la corrupción— podemos identificar los caminos que va trazando la construcción de la paz positiva, como

Hay esfuerzos muy concretos para avanzar en proyectos de reparación, reconstrucción, reconciliación y recuperación del espacio público.

le llama Llausás. Son cambios graduales, pero pasos al fin, que necesitan voluntad del gobierno, pero sobre todo de la sociedad. Recursos y presencia para recuperar espacios: el parque, la playa, el pasto que se ha secado; cambios en el discurso de algunos medios de comunicación que reproducen violencias, como los que han logrado Silvia Núñez y muchas otras mujeres; órdenes de cateo para reforzar los esfuerzos de ciudadanía forense; protocolos de tipificación del delito, de búsqueda y recuperación de restos en los que la responsabilidad de proporcionar evidencia y datos no recaiga solo en los más afectados, quienes han tenido que aprender lenguajes y actividades que no tendrían por qué haber aprendido.

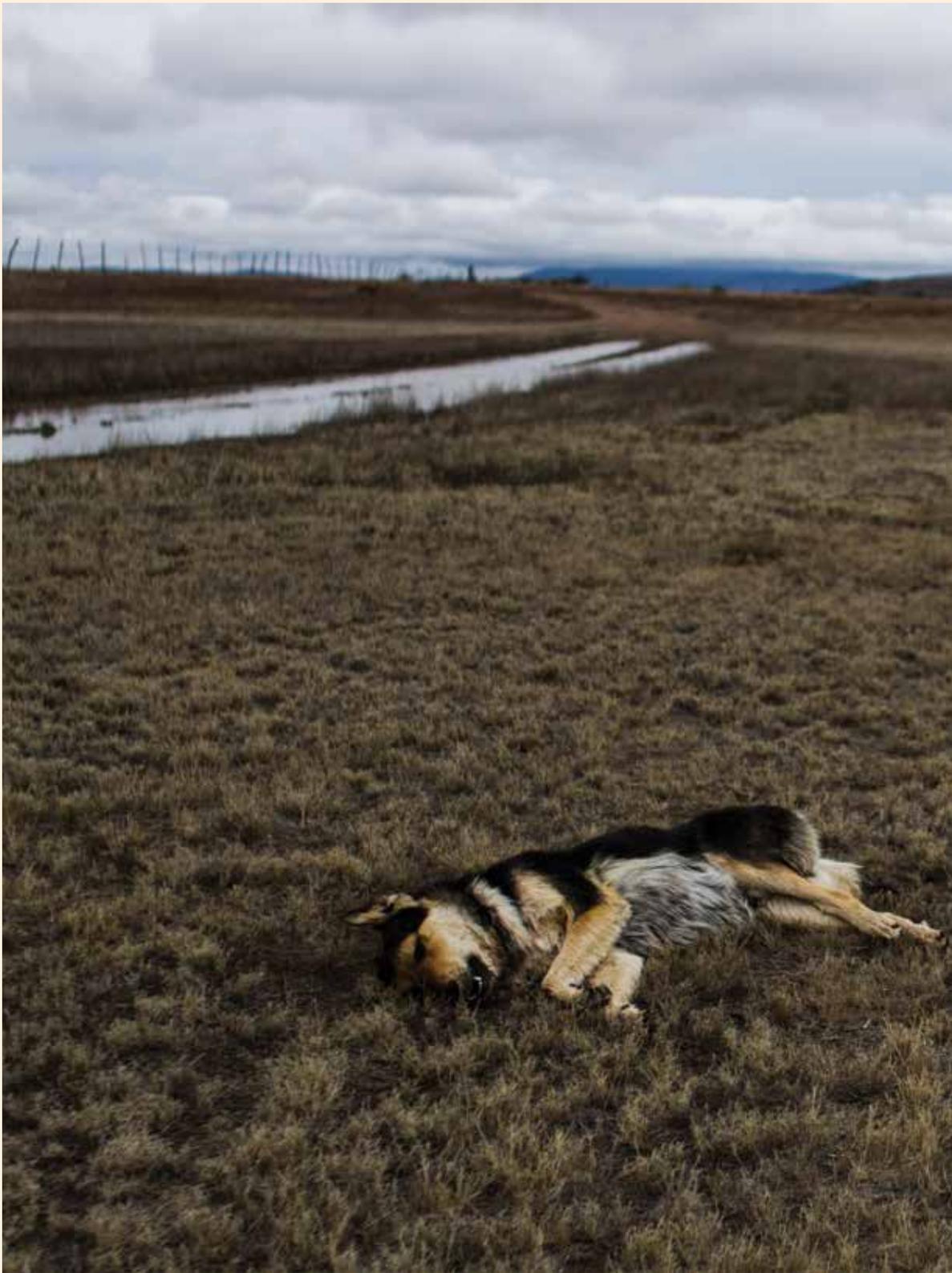
Los familiares no tienen por qué ser quienes compren palas y saquen los restos humanos disueltos en ácido de una fosa, quienes arriesguen la vida para ir a excavar buscando restos óseos en los cerros; quienes se acostumbren a recibir amenazas de muerte cuando salen a las calles a buscar respuestas; pero lo hacen porque la autoridad no responde, y si lo hace, muchas veces lo hace mal o tarda demasiado. Hemos perdido la confianza en las instituciones del Estado y, aun así, hay que pensar en los diferentes componentes del Estado e identificar los ejemplos del trabajo que se ha logrado entre sociedad, gobierno e instituciones en algunos lugares. Es desde ahí, desde estos ejemplos de tenacidad, de creatividad y de comunidad, en donde hay esperanza, en donde se le enseña y se le exige al gobierno, a las instituciones del Estado y a la sociedad cómo escucharnos, cómo darle significado a esa paz que anhelamos.

**PAZ Y
JUSTICIA
EN EL
SUR**



Ensayo fotográfico por **Mauricio Palos**























ABEL BARRERA: LA LUCHA DE LA MONTAÑA

Témoris Grecko

Abel Barrera Hernández es un hombre de la región guerrerense de La Montaña. Pero entiende las formas de la ciudad. Está conectado íntimamente al mundo indígena. Y sabe utilizar los resortes del México mestizo. Al tiempo en que comprende y explica los recursos defensivos que los campesinos pobres se han construido por fuera del Estado, persiste en su decisión de utilizar a plenitud, en beneficio de los excluidos, los canales abiertos por el sistema.

Fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pocos luchadores sociales en ambientes tan polarizados logran conservar, como él, a base de esfuerzo y de congruencia, el respeto de los que están de un lado y el de los del otro. Para funcionarios y beneficiarios del estatus quo, una inclinación de Abel Barrera a su favor representaría un baño de algo de lo que les queda poco o nada: legitimidad. Para quienes han tomado las armas en defensa de su gente, un rompimiento de Abel con los mecanismos y vías institucionales facilitaría el de muchos otros.

Él ha optado por representar las urgencias del pueblo por las rutas legales —hasta donde puedan ser eficaces— y por darle voz a la crítica cruda y directa de aquellos abusados y despojados rutinariamente, y empujados a esos rincones encerrados donde uno tiene que decidir si quiere morir de hambre o morir peleando.

La resistencia no es causa sino consecuencia, me explicó en una entrevista, y “la colusión que hay entre crimen y cuerpos de seguridad del

Estado y de la Federación, esta crueldad, es precisamente parte de esta herencia de impunidad que vivimos en Guerrero”.

LA TRAGEDIA SE CONDENSA

Por la voz que les da Abel a los suyos transitan palabras claras con las que nada que deba decirse queda, en aras de las buenas maneras de la hipocresía política, sin decir. Nadie puede afirmar que no entendió el mensaje.

Sin embargo, se trata de una voz cálida, mesurada y afable. Colocado en un punto alto y en medio, visible entre tantas facciones violentas que se están enfrentando, uno imaginaría que sus medidas de seguridad son correspondientes al riesgo. Lo suyo es recibir al desconocido que se le acerca, obsequiar la sonrisa y ponerse a la escucha.

El antropólogo Barrera Hernández nació en 1960 en Tlapa de Comonfort, ciudad y mercado de La Montaña; esta región adolorida que concentra los municipios más pobres de México, como Cochoapa el Grande y Alcozauca. La zona es, también, uno de los núcleos históricos de actividad rebelde frente a los invasores aztecas, españoles y franceses; ante la opresión de sucesivos gobiernos nacionales, de caciques, empresas mineras y bandas de narcotraficantes.

Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada al lado de la antigua pirámide de Cuicuilco —construida hace 1,600 años al sur de lo que hoy es la Ciudad de México.

En 1994 retornó a Tlapa, en un momento que se sentía como partea-guas histórico: en los Altos de Chiapas, a seiscientos cincuenta kilómetros al oriente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le daba forma y máscara al gran reclamo indígena por cinco siglos de despojo y marginación, desde el inicio de la conquista europea de América. En su centro mismo el sistema parecía deshacerse en rivalidades y magnicidios políticos. En Guerrero, el Consejo 500 Años de Resistencia Indígena elevaba de nuevo el grito que había sido acallado a sangre, balas, torturas y vuelos de

Guerrero ha vivido un clima de violencia que ha postrado a la entidad y ha acentuado los problemas de pobreza y desigualdad social.

la muerte por el Estado mexicano con la Guerra Sucia, conducida por los caciques de Huitzoco de los Figueroa 20 años atrás.

“El cielo y el infierno están en este país”, sostiene Abel Barrera cuando describe las condiciones de su entidad. “Un infierno al que me refiero por la pobreza, por la violencia, por la corrupción, por la impunidad. En Guerrero se condensa la tragedia de este México violento”.

LA LUZ INCANDESCENTE

En esos días unos tomaban las calles y los pueblos, para no abandonarlos más; otros preparaban el resurgimiento de la guerrilla; Abel y los suyos optaron por formar un comité de defensa de los derechos humanos: lo llamaron Tlachinollan, que en náhuatl significa ‘Lugar de los campos quemados’, y fue el nombre del reino que en 1321 formaron los habitantes, miembros de los pueblos me’phaa, nahua y na savi, cuando se rehusaron a seguir pagándoles tributos a los señores del Altiplano.

En 1996, Tlachinollan obtuvo uno de sus primeros éxitos con la liberación del maestro Magencio Abad Zeferino y de su hijo, quienes habían sido detenidos ilegalmente por militares y torturados para obligarlos a inculparse como guerrilleros.

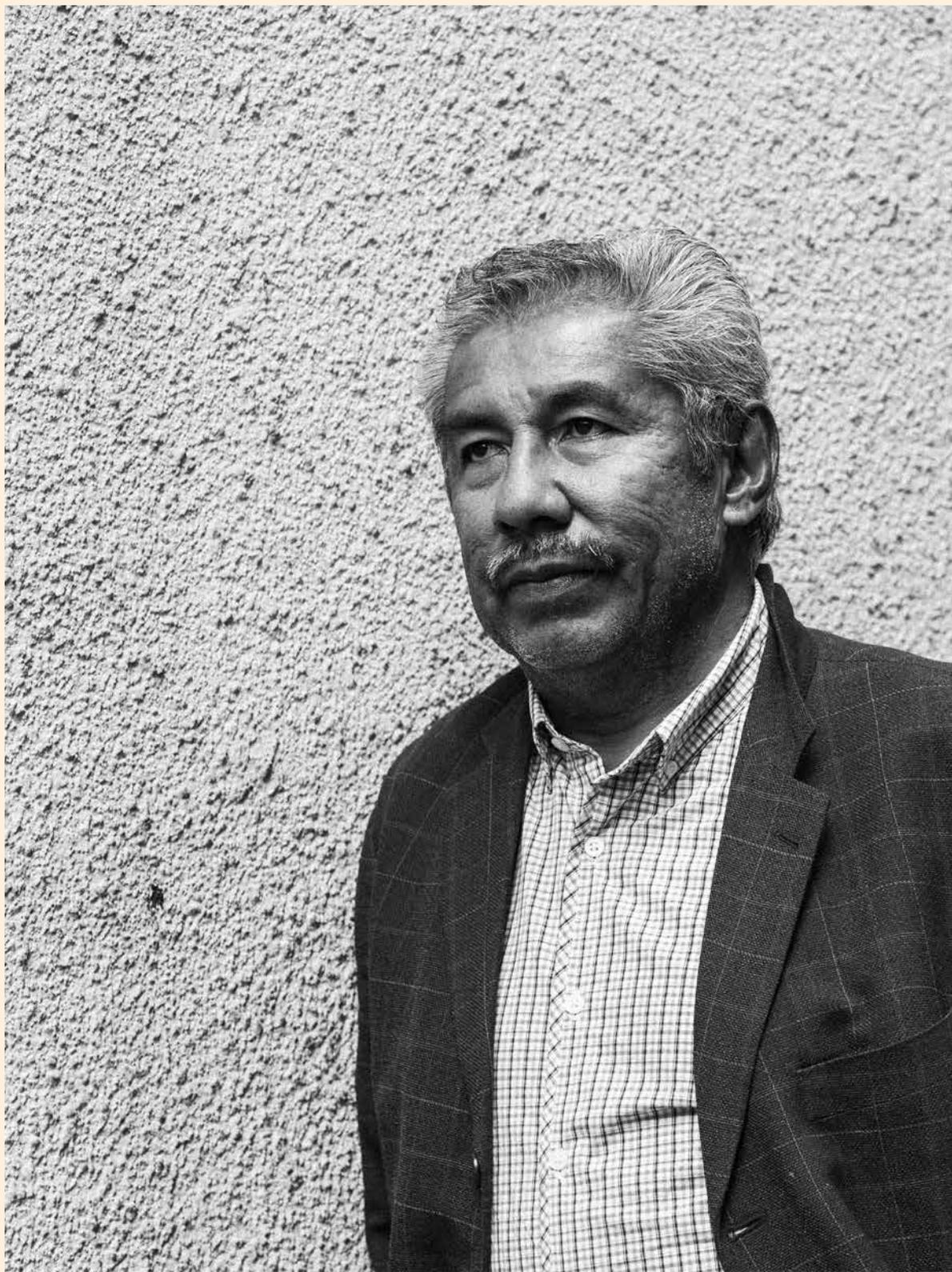
El trabajo sistemático y paciente trajo nuevos avances en diversas áreas, en especial con la defensa de dos jóvenes indígenas que fueron violadas por soldados en casos distintos: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; ambas causas, tras un largo recorrido legal, resultaron en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, promulgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y 2010. Como en otros países, explica Abel Barrera, la violencia sexual contra las mujeres se utiliza como “un arma de desmovilización” contra las comunidades organizadas.

Desde 2014, Tlachinollan ha representado legalmente y ha acompañado a los padres y las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron llevados a la desaparición forzada por policías y criminales, bajo la vigilancia del 27º Batallón del ejército.

El trabajo de este centro y su director ha obtenido numerosos premios,

como el Nicolás Bravo (2001), el de Instituciones Creativas y Eficaces de la Fundación MacArthur (2007), el de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (2011) y el de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (2016).

“Fuimos avanzando en medio de las tinieblas de la violencia”, recordó al recibir el premio “Ondas de Esperanza” del Centro Robert F. Kennedy, en 2014; “Sin embargo, nunca nos separamos de esa luz incandescente que guía a los sabios y sabias de las comunidades indígenas. La fuerza indómita de los hombres y mujeres de La Montaña es la que nos ha guiado por dos décadas. Ellos y ellas, a pesar del sufrimiento y de los tratos discriminatorios, se abren paso contra el muro de la impunidad y la corrupción”.



< Abel Barrera

Foto Diego Berruecos

MÉXICO VIOLENTO: LA REALIDAD DE LA PAZ INESTABLE EN GUERRERO

Abel Barrera

El último decenio ha sido uno de los más desgarradores para el país respecto al tema de la violencia, en particular la relacionada con el crimen organizado. Las desapariciones, los homicidios a sangre fría y la propagación de una cultura de miedo a lo largo del territorio nacional sobrepasaron las capacidades de los gobiernos locales para hacer frente a una ola violenta que llenó al país de muertos y desaparecidos. A partir de 2007, la tasa de homicidios comenzó a crecer de manera rápida y alcanzó un registro de 2,638 en el año 2012, frente a los 764 contabilizados en 2007. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el tema dominante fue la guerra en contra del narcotráfico y los altos índices de violencia que hicieron pensar en calificar al Estado mexicano como fallido. Si bien no es acertado afirmarlo, sí podemos decir que hubo regiones del país dominadas por el crimen, donde la ausencia del Estado fue detonante de la organización comunitaria a favor de la paz.

Dentro de esas regiones que han sido azotadas por la violencia está Guerrero, un estado al que la historia nacional ha mantenido en el atraso social, la pobreza y la marginación económica. Guerrero es un caldo de cultivo propicio para la proliferación de actividades delictivas en completa impunidad ya por omisión, ya por corrupción de los gobiernos. La historia de la violencia en la región ha sido persistente. Desde finales de los años sesenta y mediados del decenio de los ochenta, la época conocida como

Guerra Sucia marcó el inicio de un problema sistemático en la región guerrerense. Los aparatos de procuración y administración de justicia, así como la militarización del territorio estatal en contra de la insurgencia ciudadana y los movimientos sociales sublevados, fueron las herramientas con las que el mismo gobierno propagó incertidumbre, miedo e impunidad.

Quizá sea importante recordar que el Estado utilizó la violencia en Guerrero para someter a los campesinos que se oponían a la deforestación excesiva en la zona de Atoyac, por ejemplo. La guerrilla e insurgencia han sido estigmatizadas ahora como “rebeldes sin causa” que ponían en posiciones de inestabilidad al estado y en peligro a los pobladores. Fue así que se dio comienzo a un intenso periodo de acoso y violación de garantías judiciales y derechos humanos, en el que los militares tenían la consigna de localizar, hostigar, capturar o exterminar a quienes se considerara enemigos. Los datos sobre la Guerra Sucia muestran al menos 480 víctimas, de las cuales 219 fueron desaparecidas en el municipio de Atoyac, siete en Coyuca de Benítez y otras tres en Chilpancingo, Coyuca de Catalán y Tecpan de Galeana, donde los hechos señalan al ejército como el principal responsable de estos actos. Uno de los casos paradigmáticos de estas desapariciones costó al Estado mexicano una sentencia que cambió el modelo de derechos humanos en el país. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado mexicano era responsable de la violación a la libertad personal, la integridad personal y el derecho a la vida en el caso Rosendo Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos. Además, dispuso una serie de recomendaciones en materia de reforma legal para adecuar el sistema de justicia y protección de derechos humanos a estándares internacionales; de ahí se deriva en buena medida la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el Estado mexicano, y que Guerrero vive día con día, es la lucha en contra de los grupos criminales que además de las operaciones delictivas que llevan a cabo en la entidad como narcotráfico, plagio y extorsión, también han secuestrado las instituciones democráticas encargadas de la protección de

derechos y administración de justicia. Los gobiernos locales son rehenes de los cárteles de la droga o están coludidos de alguna manera en la protección de los delincuentes. Aunado a lo anterior, México vive una crisis de confianza en las instituciones. Así lo demuestra el pésimo trabajo de investigación y comunicación del gobierno de la República en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. A pesar de la inversión de recursos y personal, tanto nacional cuanto internacional, la llamada “verdad histórica” fue cuestionada por mexicanos y la comunidad internacional por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que la CIDH envió para coadyuvar en las investigaciones del caso. El GIEI desmintió los dichos de la Procuraduría General de la República (PGR), que daba por concluida la investigación aludiendo a que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula. A partir de entonces comenzó la tensión entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI y la CIDH.

La escalada de violencia en el estado es producto de la persistente incapacidad de las autoridades para hacer frente a los liderazgos de corte caciquil y grupos del crimen organizado que han operado allí desde hace decenios. Caciques como Rogaciano Alba en Petatlán han sido tanto parte de los grupos criminales como cabezas políticas de partidos políticos y hasta presidentes municipales. El secuestro de las instituciones democráticas ha sido uno de los pasos más importantes de la delincuencia para institucionalizar la violencia hacia los guerrerenses; y esta no ha sido una situación de origen reciente. La posible complicidad de la policía municipal de Iguala en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es apenas otro de los resultados de viejas prácticas que han persistido en el estado con la venia de las autoridades, sea por omisión, sea por participación activa en colaboración con el crimen.

El Índice de Paz México, elaborado por el Institute for Economics & Peace, muestra un panorama de las condiciones de paz en el país. Los hallazgos que revela el informe tienen el objetivo de entender y encontrar tendencias en temas de seguridad, teniendo en consideración las cifras disponibles de delitos. Si seguimos los resultados de este informe, solo

tomando dos años —2014 y 2015—, podemos decir que hay tendencias positivas en cuanto al estado de paz de nuestro país. No obstante, es indispensable tener claro cuáles han sido las acciones que ayudan a mejorar en el tema de seguridad y combate a la violencia, saber cuáles han sido los problemas a los que nos enfrentamos y conocer las dimensiones de la situación.

Guerrero ha sido considerado como el estado menos pacífico del país en nueve años consecutivos de los doce en que se ha hecho la medición. De acuerdo con las mediciones del Índice de Paz México, la tasa de homicidios en Guerrero es la más alta de todas las entidades federativas. En 2011, la tasa de homicidios fue de 63.2%, mientras que para 2014 la tasa tuvo un diferencial de -30.4% para quedar en 44%. Pareciera que la violencia en el estado ha llegado a su clímax y la paz ha tenido mejoras considerables, aunque aún está lejos de las cifras de 2003. No obstante, Acapulco y Chilpancingo son consideradas dos de las zonas metropolitanas de la República con mayor índice de violencia. Por ejemplo, durante el periodo 2011-2012 Acapulco registró el promedio más alto de homicidios de las zonas metropolitanas del país. Durante 2013 esta cifra se incrementó ocho veces, para llegar a un promedio de 900 homicidios al año.

Los medios de comunicación reportan también la difícil situación que vive el puerto de Acapulco y el estado de Guerrero en general. Pese a que las cifras se ajustan positivamente, reduciéndose en más o menos 1% la percepción de la violencia, el clima de inseguridad en el estado persiste en ser alarmante, tan es así que el impacto económico en la entidad ha tenido un sensible declive. Las empresas han abandonado el estado en busca de mejores condiciones de inversión y seguridad de su capital: Coca Cola, Volkswagen, SEAT se han retirado de Guerrero, provocando pérdidas económicas y desempleo. En abril de 2015 el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpizar, declaró que 1,300 compañías habían cerrado desde el día en que sucedieron los hechos que terminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa.

El estado de los derechos humanos en nuestro país es preocupante. El discurso de las autoridades versa en torno al compromiso de proteger y respetar los derechos humanos, pero la realidad es diametralmente contraria. Lo que ocurrió en Ayotzinapa no fue una cuestión aislada; las fosas clandestinas están presentes a lo largo del país y focalizadas en estados como Guerrero o Veracruz. Ante ello, la actuación del Estado ha sido débil y susceptible de caer en uso excesivo de la fuerza y en violentar los derechos civiles. Ello ha sido el resultado de que el ejército esté en las calles desempeñando tareas de orden civil, pues los mandos policiacos son incompetentes, corruptos o actúan en complicidad con los propios delincuentes.

Para hacer las cosas peores, la mayoría de los delitos en México no se denuncian. Entre otras cosas, hay desconfianza hacia las autoridades encargadas de la administración de justicia, miedo a represalias o intimidación. Los problemas están señalados: homicidios, violencia generalizada y corrupción de las autoridades. Si le añadimos los problemas sociales y económicos de una de las regiones más pobres del país, entonces encontraremos serias anomías sociales que cuestan no solo recursos económicos o elecciones: nos cuestan en vidas humanas también.

En Guerrero la justicia no es para todos. Los abusos constantes que sufre la población indígena desde la Guerra Sucia los orilló a buscar la justicia y defensa de sus comunidades, por sus propias vías, intentando llenar el vacío que deja el Estado. Así, en 1995 se formó la Policía Comunitaria por organizaciones de productores y comunidades integradas, debido a que no había respuesta a sus denuncias de robos, asesinatos y violaciones en los poblados que conducen a San Luis Acatlán. Para su formación se basaron en sistemas de cargos comunitarios, instituciones y sistemas normativos que los rigen desde hace siglos.

Ante la ausencia de un Estado, que cuando aparece lo hace para reprimir, las comunidades indígenas de La Montaña cuentan con cuatro instituciones que ordenan, a grandes rasgos, su interacción social: asamblea, comisario, Comisariado y policías. La primera toma decisiones trascendentales para la vida comunitaria, mientras la segunda ejecuta acuerdos

de la asamblea y administra justicia. El Comisariado hace lo mismo, pero en el ámbito agrario, y la policía se encarga de brindar seguridad. Esta organización convive de manera delicada con los gobiernos estatal y federal, quienes respetan el arreglo, siempre y cuando no atente contra sus intereses.

En el año 2000 se aprobó el Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducción (CRAC), de La Montaña y Costa Chica de Guerrero en una Asamblea Regional que se planteó la creación de una jurisdicción indígena. Es un sistema conformado por las tres actividades fundamentales de la seguridad pública: prevención del delito, procuración y administración de justicia y reinserción social de transgresores. El sistema está claramente establecido en el Artículo 3 del reglamento, detallando todas las instancias, delitos y penas. El proceso busca la imparcialidad, independencia, accesibilidad y gratuidad; respeta los derechos humanos y logra atender necesidades de muchas personas abandonadas por el sistema judicial.

A 20 años de existencia, la CRAC-PC ha demostrado ser un sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria eficaz. Se revirtieron los índices de la delincuencia en la región en 90%. Con la organización de los pueblos y pocos recursos económicos, la CRAC resolvió el problema de seguridad en cerca de 120 pueblos integrados a su sistema de justicia. Lo que el Estado no ha logrado en varias décadas, la CRAC lo resolvió en tres años.

Es indispensable notar y respetar la legalidad y legitimidad de la institución de policías comunitarias en Guerrero. El marco jurídico que protege y reconoce los derechos de los pueblos indígenas es resultado reciente de la organización de los pueblos en exigencia del respeto a sus derechos. En los años noventa emergieron las organizaciones indígenas como sujeto social con identidad propia. El sistema de seguridad y justicia comunitaria se concibe como expresión del ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación y parte fundamental de sus sistemas normativos. Estos sistemas determinan la forma de organización política, económica, social y de resolución de conflictos dentro de su territorio. Se encuentran integrados por principios, normas, instituciones y procedimientos que

sirven como base para el fortalecimiento de la vida comunitaria, sin que, necesariamente, estén reconocidos por el Estado mexicano.

En este sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, reconocen el derecho específico de los pueblos indígenas a utilizar sus sistemas normativos para la regulación de su vida y la solución de conflictos internos. Este reconocimiento se da en el marco de la diversidad y el ejercicio de la libre determinación.

Con sus limitantes, el mandamiento constitucional reconoce los principales derechos de los pueblos indígenas y expresa una armonización legislativa con el Convenio 169 de la OIT. En algunos aspectos avanza y en otros no. Por ejemplo, la Constitución federal reconoce expresamente como válida para todos los efectos legales a la CRAC-PC. Todos los mecanismos universales y regionales, en mayor o menor medida, establecen que los pueblos indígenas son identidades herederas de culturas que habitaron el territorio antes de la colonización, que conservan sistemas normativos e instituciones propias, y que en un Estado democrático debe respetarse la pluriculturalidad.

Entender el sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC como un elemento e institución que forma parte de los sistemas normativos de los pueblos de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, es reconocer la existencia de esta forma de impartir justicia y brindar seguridad desde antes de la creación del Estado-nación, así como la legitimidad con la que cuenta dicho sistema. Esto es lo que hace que el sistema creado por los pueblos tenga vigencia y eficacia, sin que dependa del reconocimiento del Estado.

El arribo a la presidencia de un gobierno priista parece haber truncado el progreso de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, debido a que la CRAC-PC siempre ha amenazado al gobierno federal. La justicia comunitaria evidenció la ineficacia de un sistema de justicia elitista e inepto, e implicó una ruptura del monopolio de violencia que ejerce el

Estado. La seguridad, justicia y reeducación comunitaria son un proyecto político que plantea un cisma con el Estado y cuestiona al modelo económico actual, debido a su control sobre el territorio y los recursos naturales. Con el paso de los años quedó claro que la CRAC-PC no se proponía otros fines más que la seguridad, justicia y reeducación comunitarias; en consecuencia, al gobierno no le quedó opción y toleró su presencia.

Por ello, ante la crisis del sistema de justicia se debe convocar a la reflexión. Se requiere de un espacio de análisis y de propuestas que transformen la organización y que mantengan su esencia de sistema de seguridad, justicia y reeducación. Existen grandes tareas pendientes: defender el territorio ante la amenaza de empresas mineras, fortalecer sistemas de cargos y reeducación, impugnar cambios legislativos que mutilan derechos de pueblos indígenas, defender presos de la CRAC, entre otras. Las respuestas solo pueden venir de quienes han defendido por siglos los sistemas normativos de sus pueblos.

Guerrero ha vivido, y vive, un clima de violencia que ha postrado a la entidad y ha acentuado los problemas de pobreza y desigualdad social. Los gobiernos han sido irresponsables en su actuar y han respondido con políticas ineficientes que lo más que han hecho es consolidar la deplorable situación de los derechos humanos en la región. La militarización de Guerrero, desde los años sesenta, es un síntoma que refleja la incapacidad de la autoridad para responder a los problemas de los guerrerenses. A pesar de lo anterior, podemos decir que las comunidades y los ciudadanos se han venido organizando para hacer frente a la violencia y combatir la impunidad. Los logros han sido significativos. La cultura de la paz y la lucha por superar la ola de violencia es consistente y brinda esperanza al estado.



EL PADRE ALEJANDRO SOLALINDE: LA LIBERTAD Y LA REBELDÍA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

María Consuelo Mejía

Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay
quienes luchan muchos años, y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los
imprescindibles.

Bertolt Brecht

El padre Alejandro Solalinde ha dedicado su vida a la lucha por la justicia y a la defensa de los derechos humanos, en particular los de la población migrante; ha defendido igualmente a las víctimas de la desigualdad y la violencia en México. Con ello ha propagado el ejemplo de Jesús y ha anunciado el reino de Dios en la tierra. Su voz profética se oye en todas partes, dentro y fuera del país. Sin miedo a represalias, así como denuncia las violaciones a los derechos humanos que asolan a México, se pronuncia contra la corrupción y la impunidad que corroen al sistema político mexicano y su colusión con el crimen organizado. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2017. Muy merecido será que lo reciba.

Al padre Solalinde intentaron acallarlo con amenazas de muerte. En una ocasión lo obligaron a salir del país. El 27 de marzo pasado recibió por Twitter otra amenaza más y su respuesta fue la misma. Dijo: “¡No me

callarán, haré escuchar la voz de los que menos tienen, de los olvidados, con más fuerza!”. Pese al acoso constante, no disminuye la intensidad de su labor, aunque se haya visto obligado a aceptar la vigilancia permanente de un grupo de guardaespaldas que protegen su integridad física y su vida. ¡Quienes lo admiramos y compartimos su misión tenemos que cuidarlo!

Conocí al padre Solalinde en una ceremonia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuando se le confirió a Marta Lamas el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación 2011, distinción que él mismo había recibido en 2007. Me le acerqué con prudencia, cuidando de no afectar su imagen por la cercanía con las feministas por el derecho a decidir. No era necesario. Me sorprendió su acogida a la defensa de los derechos de las mujeres, su manera de ejemplificar nuestras causas comunes con la vida de Jesús. Se me reveló un sacerdote comprometido, sin pretensiones, que no dejaba de lado la crítica a las jerarquías y la apelación al mensaje cristiano. Emiliano Ruiz Parra, en su libro *Ovejas Negras* opina que “nunca será consagrado obispo porque dice lo que piensa de su madre Iglesia: que no es fiel a Jesús sino al poder y al dinero; que es misógina y trata con la punta del pie a los laicos y a las mujeres, y que no es la representante exclusiva de Cristo en la Tierra” (p. 90).

Tenemos que ayudarnos unos a otros, cobijarnos. No vale la pena superarse uno sin las comunidades.

Volví a ver al padre Solalinde en 2014, cuando en el Museo Memoria y Tolerancia expusieron su labor al frente del albergue Hermanos en el Camino. Había seguido su lucha en los medios y leído la extraordinaria biografía de Ruiz Parra, que demuestra que en esta época es posible ser ministro de la Iglesia católica a la manera de Jesús. Se me reveló el padre Solalinde que rechaza los dogmas, que considera que la libertad y la rebeldía le han permitido ser feliz. Ratifiqué sus palabras en la entrevista que concedió a *Playboy* (diciembre de 2012), en la que afirma: “Dios avaló mi camino de búsqueda y no me pongo como el paradigma que todos deben seguir, ¡para nada! Porque entonces me hago dogma y la vida no es dogma. La vida es fresca y se va construyendo, no hay por qué ajustarse

a los cartabones de otros. Contra eso me rebelé... Mi mayor rebeldía fue dejar el riel y buscar mi propio camino, ser iglesia a mi manera”.

Multifacético y convencido de que la integralidad es una virtud, el padre Solalinde se muestra tal cual es. No esconde sus valores, no necesita esconderlos, ni sus aspiraciones ni sus sueños; es transparente, congruente, generoso. Definitivamente desea la justicia para las personas más desprotegidas. Da la vida por ellas, porque tiene fe y esperanza; sabe que cumple la misión que le fue encomendada por Dios. Nunca dejará de trabajar por construir un mundo nuevo, un mundo en el que las relaciones humanas sean amorosas, respetuosas, de apoyo y solidaridad; un mundo en el que, como él mismo dice, “todas y todos seamos iguales en dignidad, aunque seamos diferentes en muchas otras cosas”.



Foto Alex Dorsfman

OAXACA: ENTRE EL REINO DE DIOS Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA

Alejandro Solalinde

Nos estamos destruyendo. En México, actualmente, vivimos una etapa de relaciones rotas, envenenadas por intereses mezquinos, económicos y políticos, ausentes de Dios y también de humanidad. En unos cuantos años hemos pasado de ser hermanos o connacionales a ser amenazas los unos para los otros. Tenemos desconfianza del prójimo. Tenemos miedo del otro.

La etapa actual de violencia generalizada está causando insensibilidad entre nosotros y nosotras. Nos hemos acostumbrado a la represión, los homicidios, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones. Ahora nos parecen muy normales los niveles de violencia que tenemos en México. Pero no lo son.

Nos hemos vuelto un peligro para nosotros mismos. Agentes de violencia pasiva, activa, leve o grave. Y nos tenemos que preguntar: ¿qué estamos sembrando en los niños y niñas, en los y las jóvenes, para que las personas se puedan transformar en esas armas contra sus semejantes? ¿Por qué si El Creador nos hizo para ser compañía y para ayudarnos, ahora nos estamos agrediendo? En lugar de protegernos, de cuidarnos unos a otros, desconfiamos y tomamos distancia.

¿De dónde viene tanta violencia? ¿Cómo dejamos, de un día a otro, nuestra hermandad, nuestra solidaridad y nuestra empatía? ¿Cómo pasamos de ser hermanos a convertirnos en enemigos? ¿En qué momento se convirtieron mis hermanos en un arma contra mí? De nuevo, ¿de dónde tanta violencia?

Las causas de la violencia en México son muchas y muy diversas. En estas líneas hablaré sobre la violencia en Oaxaca, aunque también esgrimiré algunas reflexiones en torno a la violencia y la paz en México. Terminaré mi ensayo con una buena noticia para todos. Les hablaré sobre una posible forma de resolver la violencia. Parece que entre tanta mala noticia es posible vislumbrar una esperanza o un camino distinto que nos permita retomar el rumbo y volver a ser una comunidad en paz.

Pero empecemos por Oaxaca. En primer lugar, es fundamental señalar que dicho estado es uno de los más pobres del país. Además, se trata de una región con un alto porcentaje de población indígena. Oaxaca es un lugar olvidado por muchos gobernantes y explotado por diversas empresas trasnacionales, en especial compañías mineras. Se trata de un espacio donde la impunidad, la represión y la criminalización de la protesta social se han vuelto fenómenos comunes, normales, pero no por ello menos lamentables. Y esto va intensificándose porque cada día hay más motivos de descontento.

Los indígenas y campesinos de Oaxaca están olvidados. Viven en la pobreza extrema. La pobreza y el olvido son resultado de un sistema neoliberal capitalista que solo acelera los procesos de desigualdad social. El capitalismo provoca fenómenos como el de Oaxaca, en el que millones de personas se conforman con sobrevivir mientras unos cuantos acumulan y acumulan riqueza. Hemos construido un sistema de relaciones interpersonales en el que lo más importante es el poder y el dinero.

En Oaxaca una de las causas de la violencia es económica. Diversos intereses trasnacionales se han encargado de saquear minerales oaxaqueños y de deforestar los bosques. Las empresas no han sido detenidas en su abuso porque han sabido cómo y a quién comprar dentro de los gobiernos estatal y federal. Las corporaciones internacionales en esta entidad compran autoridades para obtener permisos de explotación, a pesar de no cumplir con los protocolos necesarios.

Las trasnacionales, en su afán de acumular riqueza, han logrado que las comunidades se confronten y se dividan. Las empresas están conscientes de que lo mejor para ellas es precisamente que el pueblo esté disperso,

dividido y enfrentado. Y esta estrategia económica, poco combatida por las instituciones encargadas de defender al pueblo oaxaqueño, es una de las causas de la violencia en el estado.

No es justo que en un México tan rico, con tantos recursos naturales, se siga concentrado de manera exorbitante la riqueza. Es increíble que teniendo un México tan rico, tengamos tantos millones de pobres. ¡Generamos un millón de pobres al año!

La violencia se relaciona, sin lugar a dudas, con la desigualdad, y vaya que Oaxaca es una región desigual con mucha gente pobre, olvidada y marginada. Oaxaca ha sido saqueada, deforestada y contaminada por las empresas trasnacionales. Y a cambio estas no han dejado sino pobreza, desigualdad y destrucción ecológica en la región.

Pero las corporaciones no son culpables de toda la violencia en Oaxaca o en México. La violencia de nuestro país también es ancestral, histórica, cargada de diversos eventos que, como mexicanos, todavía no hemos asimilado. Desde la época precolombina, pasando por la Colonia, el México independiente, la Revolución y el México posrevolucionario, debemos reconocer que no hemos aprendido a formar ciudadanía, civilizada y en paz.

El ciudadano mexicano ha sido alienado desde siempre, manejable. Las instituciones, a lo largo de toda la historia de México, no lograron formar personas conscientes, ilustradas, maduras. Es complicado que con un pasado así no se presenten fenómenos de violencia generalizada. No hemos aprendido a ser ciudadanos y eso se pone de manifiesto cuando nos enfrentamos entre nosotros en vez de ayudarnos, hacernos compañía y unir fuerzas para construir el país que queremos.

Además, las personas morales —es decir, las instituciones— han fracasado en su intento por construir la paz. Los gobiernos, en parte por la corrupción y en parte por la ineficacia, han dejado de evitar los fenómenos violentos. Así, la violencia en Oaxaca, y en todo el país, debe comprenderse también en su dimensión cultural. Ya estamos teniendo una cultura en la que la violencia se ha vuelto común; esta ya es parte de nuestras costumbres.

Como puede observarse, Oaxaca se ha convertido en un espacio donde la violencia es recurrente y generalizada. Y aún más grave: parecería que

dicho fenómeno de violencia tiene sus orígenes en la historia y la cultura mismas. Tenemos una violencia relacional permitida que, además, estamos transmitiendo. Estamos sufriendo un sistema de relaciones violentas.

Hemos generado un sistema de destrucción en el que poco a poco dejamos de lado a Dios. También nos hemos olvidado de construir valores humanos y espirituales profundos. En este mundo capitalista parecería que solo son importantes falsos valores como el dinero y el poder. Las luchas interminables por alcanzar una mayor riqueza y ascender en la esfera del poder también son una causa de la violencia desmedida y generalizada que se vive en nuestro país, con una desigualdad a la alza.

¿Qué podemos hacer ante una situación tan complicada? ¿Cuál puede ser el camino a seguir para detener esta dinámica que únicamente ha golpeado y lastimado familias enteras? ¿Qué acciones se pueden emprender para evitar que día a día cientos de jóvenes en todo el país sean asesinados o vean frustradas sus aspiraciones de una mejor vida?

Tal vez la respuesta para encontrar la paz ya nos fue dada hace dos mil años. En aquella época, un joven llamado Jesús de Nazaret hizo las cosas muy bien. Él presentó un proyecto a la humanidad que consistía, precisamente, en construir un sistema de relaciones interpersonales basadas en la confianza, el amor por el prójimo y el respeto por los demás. Jesús, hace dos mil años, le trajo al mundo una buena noticia. Nos enseñó que, si queremos, podemos construir el Reino de Dios en este mundo terrenal. Pero, ¿qué es el Reino de Dios? Es, en primera instancia, un sistema mediante el que las personas (físicas, morales, divinas o humanas) se interrelacionan y conviven en armonía, mediante un diálogo constructivo.

Cuando hablamos del proyecto de Jesús, del Reino de Dios, estamos hablando de una reconfiguración de las relaciones interpersonales. Primero, con Dios, reconociendo que Dios es el Padre y Madre de todas y de todos, independientemente del nombre que le pongamos. Después, es fundamental reconocer que todas y todos somos hermanos, nada más. Nadie tiene que estar por encima de los demás. Somos iguales en dignidad, aunque seamos diferentes en muchas otras cosas que constituyen nuestra original individualidad.

Para consolidar el Reino de Dios y así evitar fenómenos de violencia, nos dice Jesús, es muy importante someter al Poder y al Dinero. En el Reino de Dios nadie debe acumular bienes materiales innecesarios, nadie es propietario de lo que hay en la Tierra. Debemos reconocer que Dios es el único propietario. Nosotros solo estamos de paso en este lugar; solamente somos usuarios y administradores de este espacio y de los bienes que nos presta.

La ley del Reino de Dios prohíbe la acumulación de bienes. Reunir demasiadas cosas en una persona es prueba de que hemos sido malos administradores. Es tiempo de entender que no sirve de nada acumular riqueza. Debemos recordar que, al final, cuando llega el día de nuestra muerte, todo nuestro capital no sirve de nada. ¡Todo se queda!

Las relaciones interpersonales del Reino de Dios suponen interlocutores. Hay que conocer con quién nos vamos a relacionar. ¿Quién es Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Qué tipo de ser humano nos consideramos? ¿Qué concepto tengo de las demás personas? ¿Cuál es mi opinión de las instituciones que, al final, son personas morales? ¿Cuál debe ser la función de esas instituciones en el Reino de Dios?

Las instituciones en este nuevo sistema deberán tener un rol fundamental, pues servirán para satisfacer las necesidades del bien común. Pero ¿a quién le pertenecen las instituciones? A nadie. Si yo considero que las instituciones deben servir al bien común, entonces no pueden ser propiedad de nadie individualmente; nadie puede manipularlas o usarlas a su antojo, sino que son medios de bien social, colectivo.

Las instituciones son indispensables, pero quien las maneja a veces puede utilizarlas para beneficiarse en perjuicio de todos los demás. Sin instituciones limpias, es decir, incorruptibles, difícilmente podremos consolidar el Reino de Dios aquí en la Tierra y reducir los índices de la violencia.

Pero las personas morales no deben servir nada más para ayudar al bien de todos y de todas. Además, las instituciones deben cumplir un rol de mediadores, de interlocutores. Es fundamental que el Estado privilegie el diálogo en cualquier conflicto. Se debe procurar el diálogo para resolver cualquier tipo de dificultad que surja en el Reino de Dios. Diálogo, es muy importante,

supone un esfuerzo de acercarnos, de escucharnos, de entendernos, de confiar en nosotros mismos para que de verdad tengamos frutos de paz.

Ese diálogo, en mi opinión, es el que faltó entre el gobierno federal y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la aprobación y aplicación de la reforma educativa. La falta de diálogo entre las partes llevó a que la controversia se volviera cada vez más complicada de resolver. Cuando no hay diálogo, entonces empieza la rigidez en las posiciones, comienzan las rupturas, la confrontación y, después, hay más violencia.

Lamentablemente, la ausencia de interlocución entre las partes, en gran medida generada por una cerrazón del gobierno federal, llevó a los trágicos hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. Ahí, por lo menos seis personas perdieron la vida y cien resultaron heridas. Es una tristeza lo ocurrido en esta población, sobre todo porque las seis personas que murieron eran jóvenes. Una vez más vemos cómo la violencia ataca sobre todo a los jóvenes. En México, actualmente siete de cada diez homicidios son de jóvenes.

La reforma educativa no se discutió lo suficiente con los maestros ni con la academia. El diálogo nunca se dio. El día que se aprobó la reforma educativa había gente del magisterio protestando y pidiendo un diálogo con los senadores. Ese diálogo nunca se dio. El Senado estaba acordonado, amurallado. Los legisladores se escondieron en el recinto y no quisieron discutir con los maestros. La reforma educativa se aprobó al vapor por los tres partidos del pacto por México: PRI, PAN, PRD. Lo mismo ocurrió con la reforma energética.

Evidentemente, ante la ausencia de diálogo, es normal que surjan movimientos sociales de protesta como el que encabeza la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Es lamentable, por cierto, que el gobierno federal esté tratando de desarticular el movimiento magisterial de la CNTE por medio de las armas, o acaso lo intente con otros métodos como ofrecer dinero. Por más que lo niegue ahí están las pruebas. Por más que lo nieguen, ahí está Nochixtlán.

La solución al problema con la CNTE es el diálogo. El diálogo es acuerdo, encuentro. Si hay buena voluntad, se tendrá el diálogo. No se puede seguir

imponiendo una ley a sangre y fuego. ¿Por qué hay que enviar miles de gendarmes cada vez que un maestro va hacer una evaluación? ¿Por qué imponer una reforma con más violencia? ¿Por qué usar armas para evaluar a los docentes? ¿Por qué intentar estrategias para disolver estructuras de resistencia del movimiento magisterial?

Es necesario para el bien de México solucionar el problema de la violencia, en todas sus posibles manifestaciones. Las propuestas de paz son muy importantes. Las víctimas —todo México ya es una víctima— tienen que ser las que nos ayuden a construir la paz. Debemos construir una armonía social duradera. Es momento de reencontrarnos con la concordia y la conciliación.

Para acabar con la violencia tenemos que reeducar y reeducarnos en las relaciones con los valores humanos y espirituales, privilegiar el diálogo como una ruta de paz en una escucha amorosa, desprejuiciada, construir la confianza, volver a ser comunidad. Nos estamos volviendo individuales. No nos reconocemos como familia.

Tenemos que ayudarnos unos a otros, cobijarnos. No vale la pena superarse uno sin las comunidades. Es tiempo de volver a poner en el centro de todo a lo social por encima de lo individual. Primero está el bien común y después el bien individual. Es momento de construir el Reino de Dios. Es momento de creer, de esperanzarnos, de pensar en verdad que otro México es posible. Los derechos humanos son la ruta a seguir en la práctica. Vivimos en un país que reconoce los derechos humanos en el papel, pero falta practicarlos hasta volverlos cultura.

El estado de Oaxaca es rico en culturas, en recursos naturales, en lugares hermosos, comida y tiene gente maravillosa; sin embargo, es una de las tres entidades más rezagadas y empobrecidas de la República. Sus gobernantes han robado lo que han querido sin entender la urgencia de brindar atención a la justicia, la superación de la pobreza y sobre todo a la paz. El pueblo oaxaqueño posee una enorme capacidad artística y musical, es místico, muy espiritual. Casi cada gobernador ha dejado deudas y una ola de represión. ¿Cuándo será el tiempo de paz para este pueblo de Oaxaca?



EL PADRE SEGURA

Emiliano Ruiz Parra

En el Antiguo Testamento se llamaba profetas a los hombres que eran la voz de su tribu: los que hablaban por todos aquellos que debían callar a riesgo de perder la vida. El sacerdote José Luis Segura Barragán, expárroco de La Ruana, Michoacán, ha asumido la peligrosa tarea de ser la voz de un pueblo oprimido por el crimen organizado y la *narcopolítica*.

El padre Segura dice una verdad incómoda. Su voz denuncia por igual a los capos de los cárteles que a gobernadores, senadores, alcaldes y aun a los enviados presidenciales, quienes han tratado de someter a los valerosos michoacanos a un régimen de terror y explotación.

El 24 de febrero de 2013 hubo un levantamiento armado en México. Las autodefensas de Michoacán se rebelaron contra Los Caballeros Templarios, contra otros cárteles de la droga y, sobre todo, contra un gobierno que trabajaba para la delincuencia organizada. A la cabeza de esa pirámide delictiva no estaban solamente capos como Nazario Moreno, “el Chayo” o Servando Gómez, “la Tuta”, sino el mismo secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, quien luego sería gobernador interino y que hoy, gracias a las autodefensas, está en la cárcel.

Jugándose la vida, las autodefensas expulsaron a Los Caballeros Templarios de Michoacán. Se habían cansado de que los secuestraran y mutilaran; de que raptaran a las mujeres, las violaran y a veces las mataran; de que les cobraran elevadas extorsiones por la comercialización del limón y el aguacate, y de que los despojaran de sus casas y sus ranchos.

Las autodefensas de Michoacán fue quizá el movimiento más popular del México del siglo XXI. Miles de jóvenes se alistaron en sus filas para liberarse de un estado de humillación y sometimiento. Ahí donde avanzaban las autodefensas se terminaban los asesinatos, las extorsiones y las violaciones sexuales.

Durante el levantamiento, en los meses de más intensos combates, el padre Segura se dedicó a llevar alimentos a los pobladores de uno de los bastiones de La Ruana. Los Caballeros Templarios habían sitiado el lugar y querían derrotarlo a base de hambre. José Luis Segura rompía el cerco, transportaba comida y personas perseguidas. Ofrecía un ministerio de vida no nada más para el espíritu, también para el cuerpo.

El padre Segura asumía esa tarea siguiendo el testimonio del entonces obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, quien escribió dos cartas pastorales, una en octubre de 2013 y otra más en enero de 2014. En esas epístolas, monseñor Patiño denunció que Michoacán era un estado fallido cuyas autoridades se habían vendido al crimen organizado.

En su carta de octubre de 2013, Patiño acusaba que ahí donde había presencia de las fuerzas federales en Michoacán no se había capturado a un solo miembro de la delincuencia organizada, no paraban las extorsiones ni se rescataba a las personas secuestradas por los criminales.

El obispo Patiño hacía esta denuncia porque el levantamiento de las autodefensas provocó una rápida intervención del presidente Peña Nieto, quien nombró a Alfredo Castillo Cervantes su comisionado en Michoacán, con mando de fuerzas federales. En teoría, Castillo iba a combatir a los Templarios. Sin embargo, su verdadera tarea, de acuerdo con el padre Segura, consistía en acabar con las autodefensas. Y la cumplió: a Templarios y otros criminales supuestamente “arrepentidos” los puso al mando de las autodefensas, los uniformó, los nombró policías rurales y les concedió pueblos y territorios.

José Luis Segura Barragán se decidió a acompañar a su feligresía en el sufrimiento, a buscar la verdad y la justicia.

“Castillo fue quitando a los buenos y poniendo a los malos”, dice el padre Segura. A los autodefensas limpios (así los llama Segura) los metió a la cárcel, como al doctor José Manuel Mireles, o promovió su debilitamiento, como a Hipólito Mora. En su lugar puso a personas como Luis Antonio Torres, “el Americano”, y otros sujetos de oscuros orígenes. En enero de 2014, el obispo Miguel Patiño denunció esta estrategia en su segunda carta pastoral: “El pueblo exige que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque en lugar [de] perseguir criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos. ¿No han comprendido que estamos en un estado de necesidad?”.

A casi cuatro años del levantamiento de las autodefensas, en enero de 2017, el padre Segura atestigua que “Los Caballeros Templarios están regresando”. Han cambiado de nombre, han renovado a sus cabecillas, han renunciado a ciertas prácticas como la violación sexual, pero han vuelto a secuestrar, asesinar, extorsionar y someter a las poblaciones de la región de Apatzingán. La diferencia ahora es que ya no existen las autodefensas para plantarles cara. Del lado del gobierno tampoco hay muchos cambios. El ahora gobernador Silvano Aureoles “es un nuevo Alfredo Castillo”, de acuerdo con el padre Segura.

Por medio de la denuncia de José Luis Segura Barragán queda claro que uno de los legados de Peña Nieto será el acoso, hasta el punto de la destrucción, de los movimientos sociales que se levantaron contra el dominio del crimen organizado. Ocurrió con las autodefensas de Michoacán y también con las policías comunitarias de Guerrero. Tres de los dirigentes más importantes de esas policías, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, están ahora en la cárcel.

El sacerdote José Luis Segura Barragán ha pagado un precio por su denuncia. Los últimos dos años que pasó en La Ruana debió soportar el acoso de la delincuencia organizada. Cada noche acudía algún pistolero iba a disparar a las puertas de su casa mientras el cura intentaba conciliar el sueño. Por su seguridad, el nuevo obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio, sucesor de monseñor Patiño, optó por asignarle una parroquia distinta en mayo de 2016.

Por esas fechas el padre Segura cumplía 25 años de sacerdocio católico, un ministerio que sigue asumiendo con valentía y entereza. Durante este cuarto de siglo, José Luis Segura Barragán ha sido un pastor que ha peregrinado entre sus feligreses: campesinos, jornaleros, amas de casa; un cura de aldea a quien la vida puso debajo de un régimen de expolio y terror, y que después atestiguó y acompañó el caminar de un pueblo que se sublevaba contra la opresión. Finalmente, el padre Segura ha visto y denunciado el regreso gradual de la narcopolítica.

En todas y cada una de esas circunstancias inesperadas, el padre Segura no se limitó a ser un burócrata de parroquia o un mero administrador de los sacramentos. José Luis Segura Barragán se decidió a acompañar a su feligresía en el sufrimiento, a buscar la verdad y la justicia y —a costa de su tranquilidad— a asumir el profético papel de ser la voz de la tribu.



Foto: Diego Berruecos

LA PAZ EN MICHOACÁN SE LLAMA JUSTICIA

José Luis Segura Barragán

La paz y la justicia en el país han colapsado. Desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015 más de 150,000 personas fueron asesinadas y miles más han desaparecido. No ha habido progresos en la política de control de drogas que justifiquen su permanencia tal como la conocemos y existen datos que demuestran que la estrategia de seguridad del gobierno fracasó. Tan solo en Michoacán aumentó la tasa de prevalencia delictiva de 15,000 en 2010, a 21,000 en 2014. Además, la persecución de grupos criminales por parte de las fuerzas estatales ha derivado en la multiplicación de grupos que cometen crímenes cada vez más desgarradores contra la sociedad. Mientras tanto, continúa la complicidad de estos grupos con el ejército, la Policía Federal, y los gobiernos locales. Esta situación se ha vuelto evidente en el estado de Michoacán, donde los más desprotegidos están en peligro de muerte.

La condición de pobreza es un tipo de violencia que representa una de las mayores dificultades para alcanzar la justicia y, finalmente, la paz. Además de las carencias materiales, las personas se encuentran entre dos fuegos: por un lado, el de los grupos criminales, quienes en un proceso de acumulación de tierras expulsan o asesinan a los campesinos honestos que representan un obstáculo para la comisión de sus delitos; por el otro, la complicidad de los gobernantes y las fuerzas estatales del orden con los criminales, lo cual desacredita los canales formales para conseguir justicia y reparación de daños a las víctimas.

Frente a este escenario, el 24 de febrero de 2013, en Michoacán una parte de la población tuvo una respuesta contundente. Fue entonces que sucedió un levantamiento armado de las “autodefensas” que cimbró al país. La insurgencia para instaurar un sistema de justicia efectivo dado el fracaso de las instituciones ocurrió en varios municipios. Inicialmente en Tepalcatepec y Buenavista, y en la tenencia de esta última, Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana. Los dirigentes declararon que recurrieron a las armas debido a los crímenes y abusos por parte del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, con la complicidad de diversos funcionarios del gobierno de esa entidad federativa. Así, se mantuvo un estado de sitio que duró varios meses.

La organización de los michoacanos para autodefenderse implicó la llegada de un comisionado especial designado por el presidente Enrique Peña Nieto, el señor Alfredo Castillo, quien estuvo a cargo de dirigir la estrategia para restablecer la seguridad en la región. No obstante, la presencia de las fuerzas federales (Policía Federal, ejército y marina de México) para devolver la paz a Michoacán fue catastrófica, pues ni la figura de Castillo ni las acciones militares contuvieron a los criminales. En su presencia se extorsionaba, se cobraban cuotas, se secuestraba y se levantaba a personas. Tal era la crisis social, que el obispo emérito de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, se pronunció en un llamado de auxilio al gobierno y a la sociedad que emitió el 15 de enero de 2014. El texto se tituló: “Hagamos de Michoacán un estado de derecho”. En la carta pastoral se narran algunos hechos que no han cambiado:

El Estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de marihuana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más im-

portantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, 'venta de seguridad' (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión. [...] El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque *en* lugar de perseguir a los criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos. ¿No han comprendido que nos encontramos en un 'Estado de necesidad'?

A pesar de la existencia de pruebas sobre la relación entre las autoridades y los traficantes de drogas, algunos miembros de las fuerzas rurales de autodefensa apostaron por la vía institucional. Ellos suscribieron un acuerdo con el gobierno para registrar sus armas e incorporarse oficialmente a las fuerzas de seguridad locales. El resultado ha sido adverso y la mayoría de las personas que hicieron este pacto se consideran traicionadas.

Los grupos de autodefensa tienen una conformación e intereses diversos. Entre los hombres que formaron parte de este movimiento hay casos ejemplares de honradez y entrega al servicio de su comunidad, y estas personas han constituido liderazgos sólidos en sus comunidades. Sin embargo, estos hombres quedaron desamparados y expuestos ante el regreso aún más violento de los criminales. Al día de hoy varios líderes han sido asesinados o encarcelados, otros más se encuentran amenazados, lo que los orilla al destierro y a formar parte de los desplazados del país.

Este tipo de acciones se suman a otras más graves que han resultado en tragedias. Una de ellas fue la matanza de niños, mujeres, hombres y ancianos campesinos limoneros de La Ruana, ocurrida el 10 de abril de 2013 en Cuatro Caminos, Nueva Italia. Los jornaleros acudieron a un evento simbólico, el aniversario luctuoso del defensor revolucionario de la tierra y sus trabajadores: Emiliano Zapata. En el evento pretendían hacer llegar demandas de protección a su trabajo ante los ataques de Los Caballeros Templarios, que habían quemado empacadoras de limón y cerrado las rutas para comercializar sus productos. Luego de enfrentar el rechazo de Jesús Reyna, representante del gobierno del estado, los

campesinos y sus familias fueron emboscados cuando iban de regreso a su comunidad. El asesinato fue atribuido al mismo grupo que los acosaba. Tres años después de esta masacre no ha habido justicia.

Otro crimen en el que estuvo implicado el gobierno sucedió el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, cuando la Policía Federal cometió asesinatos extrajudiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos integró un expediente que recoge el testimonio de un testigo que narró el ataque de los servidores públicos hacia 16 civiles desarmados, dejándolos sin auxilio, abandonándonos a la muerte al margen de la carretera (lo que resultó en siete fallecimientos). Este crimen también sigue impune.

Los crímenes que se cometen nos obligan a buscar alternativas y acuerdos para que los responsables de este estado de muerte rindan cuentas ante la sociedad y enfrenten procesos de justicia judicial. Las matanzas de 2013 y 2015 son casos extremos en el cúmulo de agravios cotidianos que colocan a la violencia como eje central de nuestras relaciones. No podremos construir comunidades pacíficas sin la ayuda de las instituciones y de gobernantes que den prueba de honestidad y que estén decididos a trabajar con los habitantes de la localidad.

Los hechos violentos y la colusión del crimen con el gobierno desataron un proceso inédito de transformación en el que cuestionamos la legitimidad y la permanencia de las instituciones de gobierno y del clero tal como las conocemos. En medio de la violencia estamos obligados a construir acciones que nos den certidumbre y esperanza.

En ese sentido, la emergencia social también ha llevado a tender lazos de solidaridad ante la adversidad. Un grupo de sacerdotes de Apatzingán, Tepalcatepec, Nueva Italia, Aguililla, conformó “La Pastoral social” que ayudó a introducir alimentos, medicinas, ropa, víveres para la población. Esta organización repartió 300 despensas cada mes a las familias más desprotegidas durante el año más cruento de la violencia. Posteriormente se instalaron comedores, así como una biblioteca y un dispensario médico. La organización pastoral inició un censo sobre la población que ayuda a localizar personas enfermas y en situación de miseria, conocer sus necesidades y asistirlos.

Los retos para mantener un liderazgo social en vías de restablecer la paz tienen que ver con el desarrollo de acciones honestas, condición indispensable para la creación de una base de apoyo social que nos permita vivir en comunidad. Con base en la experiencia del trabajo hecho a lo largo de estos años de guerra en La Ruana, y actualmente en la presa del Rosario, creo que es posible ayudar sin lucrar, emprender actividades alejadas de la corrupción, del crimen y de la ilegalidad. Se pueden defender los derechos humanos y la vida misma de las personas sin atender compromisos con grupos de poder legales o ilegales que coarten nuestra libertad de decisión. Nuestra base social permitirá imaginar acciones concretas que enfrenten las situaciones de violencia. Pero para ello es condición necesaria romper el miedo y manifestar la inconformidad ante las ofensas de los criminales.

Otro reto tiene que ver con la rigidez de las instituciones eclesiásticas ante la realidad concreta que sufren las personas en la región. La falta de apoyo de algunos miembros de la Iglesia ha provocado el aislamiento de los esfuerzos por mantener la paz en zonas críticas, así como el abandono de las comunidades. Esta situación ha llevado a la desprotección de los sacerdotes, muchos de los cuales han sido asesinados por denunciar los atropellos de las organizaciones criminales y el gobierno. También se ha debilitado la figura moral del sacerdote, quien es capaz de reunir a la comunidad en torno a principios de misericordia y solidaridad. En ese sentido, los miembros de la Iglesia deberían transformar la dinámica actual al eliminar las “misas especiales” y llevar a cabo obras sociales.

La asistencia que damos en las condiciones de guerra que vivimos requiere acciones urgentes e inmediatas para salvar la vida de las personas que viven perseguidas y amenazadas de muerte, aunque esto represente a la vez la pérdida de su mayor y único sustento, para convertirse en desterrados errantes en busca de paz. Para seguir trabajando en este sentido es necesario tejer redes de solidaridad, nacionales e internacionales, que permitan salidas seguras a las familias que se encuentren sufriendo el acoso de grupos armados. Es necesaria la comunicación entre organizaciones de la sociedad civil y religiosas, particularmente de aquellas que

se encarguen de albergar y atender a víctimas de la violencia derivada del narcotráfico.

Los trabajos que hemos llevado a cabo con la sociedad civil se han visto reflejados en la integración de las mesas de seguridad y justicia de Apatzingán en las que participan activistas, funcionarios y asociaciones civiles, entre otros. Las reuniones preparatorias son itinerantes por motivos de seguridad, pero existe el antecedente de su funcionamiento en la reunión del 31 de marzo de 2015 con la presencia del secretario de Gobernación, miembros del gabinete de seguridad del gobierno federal, y los miembros locales de la mesa. Desde entonces han continuado los trabajos de discusión para generar estrategias con la participación de la sociedad.

La mesa de seguridad y justicia de Apatzingán trabaja en conjunto con otras mesas ciudadanas en distintos municipios. La agenda común incluye los siguientes temas: mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, transparencia en la aplicación de los fondos públicos para la seguridad, la profesionalización y dignificación de la policía, el correcto funcionamiento de todas las instancias de justicia (procuración y administración), y prácticas de prevención del delito en las comunidades. Reconocemos que la mejor medida de prevención es el acceso a fuentes de trabajo, en especial en zonas donde los jóvenes son reclutados o forzados a participar en la cadena productiva del mercado ilícito de drogas.

Debemos mantener la memoria de los agravios para exigir una justa reparación de daños. Las ofensas en las comunidades más desprotegidas y el abandono amenaza con ahogar la realidad; por eso pensamos que, para salir de la violencia, hay que hablar de ella. Hay que nombrarla y hay que enfrentarla rompiendo el miedo y el silencio. Romper el miedo para volver a unir a la comunidad mediante acciones concretas. En esta labor es urgente que los medios de comunicación difundan las situaciones de violencia que se viven de manera cotidiana en Michoacán. Se requiere investigar y dar a conocer datos acerca de las actividades económicas del crimen organizado en la región, para encontrar las alternativas con base en razonamientos fundamentados.

Nuestro trabajo para restablecer la paz sucede en un contexto de acoso por parte de los grupos criminales. Diariamente presenciamos asesinatos inenarrables, desapariciones forzadas, tortura, ataques armados, acoso, violación. Nos han despojado de la tierra, de nuestras casas, de la tranquilidad, de la certidumbre. Nos están privando de lo más preciado: de la vida. Pero no nos han quitado la dignidad ni la esperanza, creemos en los principios de honestidad y solidaridad que han dado resultados y que contrastan con el desamparo de las autoridades institucionales.

Para acceder a la justicia por medio de las instituciones requerimos que se llame a rendir cuentas a los funcionarios responsables de la estrategia de seguridad en Michoacán, quienes deben responder por el estado en que nos encontramos. Además, se debe impartir justicia por los crímenes cometidos en nuestra región, especialmente en los casos de las matanzas de 2013 y 2015.

Dentro del contexto de guerra actual hemos presenciado la aparición de movimientos de ayuda a las víctimas, compuestos por personas solidarias que se han forjado como figuras de autoridad basadas en la ética de la honestidad y en la moral de la caridad. Este florecimiento nos da confianza para continuar defendiendo la alegría, la fraternidad, el amor, el respeto a la vida, la libertad y el trabajo digno. Nos conduce a creer que en Michoacán la paz se llama justicia.



RECOBRAR LA CONFIANZA

Fernando Nieto Morales

El Colegio de México

En México se confía poco. Las cifras se han señalado antes, pero vale la pena repetirlas aquí. De acuerdo con un estudio complementario al Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México que llevamos a cabo Fernanda Somuano y yo (“Ciudadanía en México, ¿ciudadanía activa?”, INE, 2016), por un lado, los mexicanos confían mucho en sus familiares (66% de los entrevistados dijo confiar mucho), pero 77% opina que no se puede confiar en la mayoría de las personas. También planteamos un experimento mental: “Si usted perdiera su cartera o bolsa con 500 pesos, ¿sería probable o improbable que se la devolvieran si la encontrara una persona específica?”. Así, por ejemplo, si la cartera en cuestión fuese encontrada por un miembro de la familia, 90% de los entrevistados estimó que era algo probable o muy probable que esta fuese recuperada. En cambio, 33% opinó que era algo probable o muy probable recuperarla si fuese encontrada por un vecino, y tan solo 16% pensó que sería algo o muy probable si fuese hallada por un policía.

En claro contraste con la gran confianza que los mexicanos sienten por sus familias, la confianza en los demás y particularmente en las instituciones y organizaciones del Estado es bajísima. Por ejemplo, en el mismo estudio, solo 7 de cada 100 dijeron confiar mucho en el gobierno federal; 4 de 100, en la policía, y apenas 2 de cada 100 dijeron confiar mucho en los partidos políticos o en los diputados. A la inversa, 54 de cada 100 dijeron

no confiar nada en los partidos o en los diputados. Aproximadamente 41% dijo no confiar nada en la policía, 32% en el gobierno federal y 28% en los jueces.

A la luz del descrédito de la clase política del país, los magros resultados en política económica y, acaso más importante, las aterradoras cifras de violaciones a derechos humanos, ineficacia en materia de seguridad pública y la patente corrupción de cuerpos policiacos, jueces, partidos políticos y otras instituciones, puede ser que este patrón de desconfianza no sea una sorpresa. Pero el asunto, amén de no causar mucho estupor estos días, no deja de ser gravísimo.

El problema de la confianza pública (es decir, la confianza en personas u organizacionales con quienes no compartimos vínculos inmediatos, como es el caso de la policía o los jueces) ha ocupado cientos de páginas y a un ejército de científicos y pensadores sociales. Émile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, por ejemplo, pensaba que una sociedad compuesta por gran número de individuos desorganizados y desconfiados, a quienes un Estado hipertrofiado se veía forzado a reprimir y contener era una “monstruosidad sociológica” (*La división del trabajo social*, 1893). Con esto, Durkheim quería decir que sociedades con baja solidaridad —para usar el término durkheimiano— pronto se enfrentan a serios problemas. En particular, cuando el Estado y las instituciones públicas inspiran poca confianza y, por ende, se convierten en entidades lejanas, parciales e intermitentes, los mecanismos institucionales de regulación que favorecen la cooperación social tienden a ser poco eficaces. Esto es, ante la desconfianza se erosionan las estructuras que vinculan a los individuos con la comunidad, y la brecha que separa la esfera de lo privado (y, por tanto, de los intereses privados y de grupo) de la esfera de lo público (de aquello que nos concierne a todos por ser de utilidad y acceso comunes) se ensancha irremisiblemente.

La desconfianza surge cuando existe la sospecha de que la violación de la confianza en un episodio se repetirá en otras ocasiones en el futuro.

La confianza pública es, pues, importante. Lo es para la eficacia y eficiencia de los servicios, las políticas públicas, la participación política y todo tipo de transacciones entre ciudadanos y organizaciones del Estado. En este sentido y sin entrar demasiado en complejidades conceptuales, la confianza pública se puede entender como el grado de certeza que tienen las personas de que otros se comportarán predeciblemente, en una manera que no sea oportunista, ni motivada (únicamente) por el interés privado y que, en cambio, refleje normas y principios colectivos (legalidad, honestidad, generosidad, etcétera). La confianza pública, por tanto, refiere a una doble expectativa: que las personas son capaces de tomar decisiones y que estas decisiones tienen en cuenta el bienestar de otras personas. Violar estas expectativas reduce la confianza y eventualmente genera desconfianza. La desconfianza, como dice Lynne G. Zucker, surge cuando existe la sospecha de que la violación de la confianza en un episodio se repetirá en otras ocasiones en el futuro. Una vez, por ejemplo, que los individuos sospechan que los jueces son parciales y ven su sospecha confirmada, es razonable esperar que terminen desconfiando de los tribunales.

Llegados a este punto es importante hacer dos anotaciones. Primero, que la falta de confianza pública tiene efectos perniciosos para los ciudadanos mismos. Para empezar, la falta de confianza incrementa la necesidad de formalización y control, lo que, a su vez, incrementa el costo de las transacciones (por ejemplo, al hacer más complejo el actuar del gobierno y su control). Es posible que muchos de los enredos y abusos que suceden en la interacción con el Estado pudieran evitarse si estuviésemos dispuestos a reducir los controles que hemos impuesto sobre el mismo. Claramente estos controles son producto de la desconfianza —una desconfianza, en el caso de México, confirmada por una miscelánea bien conocida de violaciones, injusticias, casos de corrupción e incompetencia—.

Segundo, el problema de la confianza privada o particularizada (en oposición a la confianza pública) es que no necesariamente contribuye a construir lo que los teóricos llaman “capital social”. Este se refiere a la capacidad de cooperación que surge de la prevalencia de confianza en

una sociedad. El capital social se construye por medio de mecanismos que producen lo que usualmente llamamos buena voluntad, disposición o camaradería. Es decir, el capital social implica vínculos que permiten que los miembros de una sociedad cooperen entre ellos voluntaria y sostenidamente. El capital social reduce el conflicto y hace viables las formas democráticas de participación y vinculación con el Estado. La confianza pública consolidada en capital social permite construir redes e instituciones sociales complejas. De ahí que la desconfianza nos cueste en seguridad, bienestar, satisfacción y desarrollo.

La “crisis de confianza” en la que ya llevamos varios años no ha pasado desapercibida para nuestras autoridades y representantes. Basta una breve revisión para advertir que el tema y, sobre todo, el imperativo de “recuperar la confianza pública”, se repite una y otra vez en discursos e iniciativas. ¿Por qué no han sido efectivos hasta ahora los exhortos y acciones diseñadas para recuperar la confianza? Sospecho que hay al menos dos explicaciones. La primera, más obvia, es que los esfuerzos por recobrar la confianza han sido opacados por el mal desempeño del Estado mexicano en distintos frentes. Para decirlo claramente, es difícil recobrar la confianza del público cuando la realidad da razones para lo contrario: casi 30,000 desaparecidos, más de 150,000 muertos relacionados con la guerra contra las drogas en sus primeros diez años, más de 26,000 feminicidios en 14 años, varios gobernadores y funcionarios corruptos que se encuentran prófugos e impunes, y un largo etcétera.

La segunda razón, no menos importante, es que los grandes esfuerzos por recobrar la confianza se han caracterizado hasta ahora por haber sido principalmente reformas jurídicas. Me explico: el supuesto de la mayoría de los esfuerzos parece asirse del cambio en las reglas y en el argumento de que, si cambiamos las reglas, los problemas se solucionarán y, así, podremos recuperar la confianza. El inconveniente de esta cadena de supuestos es que descansa, a su vez, sobre la idea de que el cambio en las reglas formales que rigen a una sociedad (cosas como las constituciones o las leyes) es eficaz por sí mismo para generar confianza. El asunto es que la eficacia de las leyes también depende de la confianza pública.

Esto es, hay una tesis circular que se derrota a sí misma: para ganar confianza del público tenemos que cambiar las leyes, pero para que ese cambio sea efectivo tenemos que contar con la confianza del público. ¿Quiere decir esto que los cambios jurídicos son fútiles? No necesariamente, pero sí quiere decir que son, a menudo, insuficientes.

Reconquistar la confianza en un país como México es, sin duda, una tarea de extraordinaria complejidad. Pero no por ello vale claudicar.

¿Cómo, entonces, recuperamos la confianza pública? En términos generales, sabemos que existen al menos tres mecanismos que “producen” confianza: la creación de confianza mediante las características de las personas, por medio de la historia de interacciones y de las instituciones (cf. Thomas, “Maintaining and Restoring Public Trust...”). Cada uno de estos mecanismos tiene su lógica, pero todos, en principio, habrían de reducir la desconfianza y aumentar la confianza.

El primero se refiere a la creación de confianza por vía de las características de las personas; es decir, aspectos como el sexo, la edad, la orientación sexual, el origen étnico o la afiliación política. Estas características sirven como indicadores de comunidad. La idea es que personas con características afines tienden a confiar más entre sí que personas con características disímiles. El problema es que el tipo de confianza que surge de este proceso no necesariamente genera el capital social que requieren sociedades grandes, complejas y diversas como la nuestra.

El segundo mecanismo —más prometedor— se refiere a la confianza que surge de la historia de intercambios entre personas y organizaciones. En este caso, la naturaleza de la interacción entre individuos tiende a generar expectativas que, con el tiempo, permiten transitar del mero interés privado a un marco que favorece la cooperación. O sea, se genera confianza. La idea es que los intercambios que tienen las personas con el Estado, por ejemplo, no solo tienen valor utilitario (por ejemplo, al obtener una licencia, un permiso o un apoyo gubernamental), sino que además tienen valor relacional. La forma en que uno percibe sus interacciones con el gobierno tiene efectos sobre las expectativas respecto al futuro. Si las

interacciones de uno con la policía se caracterizan por la incompetencia y la coerción, es muy probable que futuras interacciones sean valoradas con recelo. Por el contrario, si la historia de interacciones con la policía se caracteriza por la aptitud y la eficacia, es posible que se genere y mantenga la confianza.

Finalmente, el tercer mecanismo se refiere a la confianza que surge de la adopción y el sostén de instituciones sociales. Este último mecanismo está vinculado con la adopción de leyes, pero se refiere sobre todo a su aplicación y cumplimiento. También se refiere a procesos que hacen más imparciales a las instituciones y que, por ende, generan la expectativa de predictibilidad y probidad. La idea es que a medida que las sociedades se hacen más complejas y diversas, la confianza pública es difícil de lograr a partir de características individuales o de intercambios entre personas específicas. De ahí que para generar confianza las sociedades establecen "reglas del juego". En la medida en que las interacciones sociales reflejan estas reglas en el sentido de que las reglas se cumplen, es que las sociedades generan mayor confianza pública. Así, por ejemplo, los funcionarios generan confianza porque existe una expectativa social de que su comportamiento está regido por reglas y normas profesionales que garantizan, entre otras cosas, su buen desempeño.

Mi punto al referirme a estos mecanismos es doble. Por un lado, me parece obvio que generar confianza pública es una tarea compleja y que, a la luz de lo que sabemos de ella, depende de esfuerzos en múltiples frentes que involucran ya no nada más al Estado: también a los ciudadanos, la academia, los medios y la organización de la sociedad civil. El cambio jurídico es inefectivo si no se acompaña de cumplimiento. Por otro lado, es importante recalcar que la confianza puede (re)construirse. El punto no es menor. Ante el panorama desolador de la violencia, mezquindad e ineptitud, es importante insistir en que sí existen mecanismos a los que podemos recurrir para producir y mantener confianza pública. Varios de los ejemplos en este libro son ilustraciones de ello.

Reconquistar la confianza en un país como México es, sin duda, una tarea de extraordinaria complejidad. Pero no por ello vale claudicar. Ante

los enormes costos sociales, económicos y políticos de la desconfianza, acaso hay algo peor que las iniciativas incompletas: la complicidad con el estatus quo y la falta de voluntad.

**PAZ Y
MEMORIA
EN EL
NORESTE**



Ensayo fotográfico por **Eunice Adorno**





















JORGE

Lolita Bosch

Jorge Verástegui es una buena persona, me consta. Y espera del mundo lo mejor. Y esto que podría parecer una afirmación sin importancia, en su caso es fundamental tenerlo siempre presente. Busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en Coahuila en 2009. Y como reacción, me dijo hace tiempo, “nos hemos aventado al vacío, pero la recompensa más grande que podemos tener es la satisfacción de que nuestras acciones ayudaron a alguien”. Ser una buena persona en un contexto así no es solo una frase para comenzar este texto, ni toda la admiración que le profeso, sino una lección constante para quienes, como él, trabajan de manera infatigable por la paz de México. Aunque él, lamentablemente, se vio orillado a comenzar siendo muy joven. Cuando el 24 de enero de 2009 su hermano Antonio Verástegui González desapareció con su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Regresaban del rezo de un rosario en un rancho de Parras de la Fuente, Coahuila, cuando los detuvieron unas personas que vestían chalecos de la Agencia Federal de Investigación. Antonio tenía entonces 50 años; su hijo, 18. La policía les dijo a sus familiares que probablemente se trataba de una confusión y que pronto regresarían, pero desde entonces la familia de Jorge no ha sabido nada más de ellos.

Jorge le prometió a su mamá, la señora Guadalupe González Escobar, que se abocaría a la búsqueda que ella no podía hacer por cuestiones de salud. Con esa promesa asumió la responsabilidad ante su familia. Pero

se comprometió por segunda vez cuando comenzó a reunirse con otros familiares de personas desaparecidas y conformaron el grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) para exigir la inmediata búsqueda de los desaparecidos. “Ese momento”, me dijo Jorge, “puedo decir que fue crucial porque asumí la apuesta por una búsqueda colectiva”. Y eso lo cambió todo. Los familiares de los desaparecidos no solo siguieron con sus búsquedas personales, sino que denunciaron, una y otra vez, que las autoridades no estaban haciendo nada. Jorge estaba por cumplir 19 años y ya había entendido que todos tenían que hablar por todos, decir que no eran dos personas las que estaban desaparecidas de su grupo, sino muchas más. Y en enero de 2010 se puso por primera vez enfrente de todos los medios de comunicación del estado para denunciar. No tuvo tiempo de tener miedo, me ha contado varias veces. La necesidad era más fuerte y había llegado el momento de actuar.

Jorge no tuvo tiempo de tener miedo. La necesidad era más fuerte y había llegado el momento de actuar.

Desde entonces su vida cambió por completo. Pasó de atender durante todo un año su caso y establecer líneas de investigación muy claras a una apuesta mucho mayor: la denuncia de una problemática generalizada. Y así, casi sin darse cuenta, fue cómo se convirtió en defensor de derechos humanos. Apenas habla de la desaparición de sus familiares, le cuesta que la vida privada de su familia deba convertirse una y otra vez en un asunto público. Pero los lleva cargando, y carga también tanto, tanto amor, una honestidad tan contagiosa, una sensibilidad tan expuesta que a Jorge es inevitable quererlo. Su dignidad, su perseverancia y su empatía son uno de esos pequeños oasis que parece que se mantienen a salvo en medio de la tragedia. Aunque esa extraña tranquilidad que desprende es una manera de hacerse cargo del dolor —constante—, de la pérdida. No deja de preguntarse por qué el gobierno los ha dejado tan solos, y encuentra respuestas que luego deshace para cuestionarse de nuevo. “México —me dice— históricamente es un país que procura impunidad. Tenemos una sociedad que lamentablemente siempre justifica la violencia, que cree

que lo que le ocurre a una víctima, de entrada, es culpa de la víctima porque estaba en el lugar equivocado o porque a la mejor andaba en algo". Un lugar equivocado, como si eso fuera posible. O previsible... Cuando sale de México insiste en que la imagen que se tiene en el exterior no existe. "México siente mucho dolor y tiene mucha sed de justicia", insiste una y otra vez. Aunque puntualiza, con una sabiduría vieja que yo creo que le es propia, "y hasta eso entrecomillado, porque yo no conozco un caso de desapariciones donde puedas decir 'aquí se hizo justicia'". Tiene razón. A los familiares de los desaparecidos nunca se les va a hacer justicia. Nada alcanza. Pero la fuerza de Jorge, y la de tantas personas que trabajan como él o con él, está en su tenacidad, en el amor con el que buscan y en el modo como levantan la voz. "Para saber lo que ocurre hay que escuchar a las víctimas directamente, sin intermediarios, porque las víctimas son la voz de la realidad. Porque nadie puede comprender este dolor sin haberlo vivido". Y con todo, no trata de equilibrar dolores, no juzga. Sino que nos pide que escuchemos a los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas uno a uno. Y cuenta, con una precisión que ha ido incorporando con el tiempo, cuáles son los vínculos entre el gobierno y los grupos organizados en Coahuila, pero también en otros lugares del norte como Tamaulipas o Nuevo León. Jorge ha aprendido. En estos años ha aprendido mucho. Y ahora escucharlo es hacer un recorrido crítico y minucioso de lo que está ocurriendo en México. Jorge sabe bien de lo que habla y es una buena persona. Dos hechos extraordinarios que debemos preservar como una humanidad sagrada.





Foto Diego Berruecos

< Jorge Verástegui

ACCIONES CIUDADANAS FRENTE A LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN COAHUILA

Jorge Verástegui

Coahuila tiene una población de 2,748,391 habitantes y es la entidad federativa territorialmente más grande de la región noreste de México. Del total de su población, 63.08% se concentra en los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Al igual que Tamaulipas y Nuevo León, Coahuila se vio afectada por la errónea política de seguridad que implementó la administración encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, en lo que se ha denominado “la guerra contra el narco”. La estrategia se basó en un discurso de combate a los grupos que se dedicaban al tráfico de drogas, pero no tuvo en cuenta la diversidad de actividades comerciales en las que estaban incursionando los transformados cárteles de las drogas, ni el estrecho vínculo que estos tenían con los diversos niveles de gobierno.

En Coahuila el trasiego de drogas era controlado por tres cárteles de drogas concentrados principalmente en la región de La Laguna. Estos grupos de narcotráfico eran el Cartel del Golfo (CDG), el Cartel de Sinaloa (hasta 2000) y el Cartel de Juárez. A partir de 2006, comenzó a tener presencia del brazo armado del CDG, Los Zetas, mismos que en 2010 se independizaron del CDG.

Los Zetas comenzaron a tener un control territorial completo de Coahuila, donde implementaron nuevos métodos de control de la población e iniciaron la diversificación de sus actividades criminales. Con su

presencia también se fueron desdibujando las viejas prácticas de los grupos de narcotraficantes de respetar a la familia y a toda aquella persona que no tuviera relación con el negocio del narcotráfico.

Entre las nuevas prácticas que comenzaron a incorporar Los Zetas se encontraban la extorsión en diversas categorías, el secuestro y el cobro de piso como las más lucrativas y comunes. Sus actividades se caracterizaron por tener un sello de violencia extrema acompañada de una exhibición pública de la misma.

En 2008 empezó a registrarse una práctica que, si bien estaba comúnmente asociada a ajustes de cuentas entre grupos de narcotraficantes, se expandió a otros grupos sociales: el “levantón”. Esta era una práctica que se efectuaba dentro de las organizaciones criminales y consistía en la privación ilegal de la libertad por haber incumplido algún “pacto”. El levantón solo tenía dos resultados: el primero era recibir una golpiza, y el segundo era ser asesinado. En los dos casos el cuerpo de la persona era entregado.

Conforme pasaron los meses y se fue identificando a las víctimas, se logró determinar que la práctica del levantón había mutado a algo diferente. En algunos casos las víctimas no tenían ninguna relación con los grupos de la delincuencia organizada. La mutación se dio no solo en el cambio de las víctimas, sino también en el perpetrador, integrando de forma más activa a agentes del estado, principalmente a las policías municipales.

Con esta acción se comenzó a perpetrar un delito asociado a represiones contra activistas políticos: la desaparición forzada de personas. Un mecanismo poco utilizado en Coahuila, pero instaurado en México desde finales de la década de los sesenta. Se puede decir que en Coahuila se llegó a un momento en el que Los Zetas y los poderes públicos ahí radicados se fusionaron.

Ante la crisis de seguridad y frente a la violencia exacerbada, en 2009 algunas personas comenzaron a acercarse al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Este grupo, integrado por las familias de 21 personas desaparecidas dio origen al primer grupo organizado de familiares de personas desaparecidas en Coahuila.

Para mayo de 2010, ese grupo se había autodenominado Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y comenzaba a construir un modelo organizativo particular y a definir una agenda política respecto a las desapariciones de personas que ocurrían en Coahuila. Dentro del proceso de formación de FUUNDEC se crearon tres grandes espacios que, a lo largo del tiempo, se fueron definiendo como los espacios referenciales de trabajo del movimiento. El espacio de revisión de casos, la audiencia general con el gobernador del estado y las mesas de trabajo.

La revisión de los casos tiene como antecedente la primera acción conjunta que se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2009, que consistió en una reunión con el secretario general de Gobierno y el fiscal general del estado. La audiencia con el gobernador encuentra su origen en la reunión desarrollada con Humberto Moreira el 23 de septiembre de 2010. La finalidad de esas reuniones era generar precisión para obtener una búsqueda efectiva. Estas acciones sentaron las bases para establecer un modelo que años más tarde replicarían otros colectivos de familiares de personas desaparecidas.

A pesar del populismo de Humberto Moreira Valdés, se tuvieron que organizar manifestaciones para conseguir una reunión con él. Esa reunión produjo un cambio en la dinámica para la revisión de los casos, pues Moreira Valdés pidió estar presente en las mismas. Este modelo solo se sostuvo en tres ocasiones (septiembre-noviembre), ya que Moreira Valdés dejó el cargo para buscar la presidencia de su partido (el PRI) sin atender nunca los señalamientos contra su fiscal general. El modelo se volvió a modificar durante el gobierno interino de Jorge Torres López, con quien se tuvieron reuniones plenarios, pero este no participó en las revisiones de casos.

La llegada de Rubén Ignacio Moreira Valdés al gobierno de Coahuila estuvo acompañada de un gran discurso en materia de derechos humanos y particularmente sobre personas desaparecidas; con crítica aparente hacia la administración de su hermano y sumándose a las voces críticas a su gobierno.

El modelo se transformó nuevamente y se incorporó el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), que se convertiría en la instancia mediadora entre el

gobierno de Coahuila y FUUNDEC. Al igual que con Humberto Moreira, con Rubén Moreira se efectuó un ejercicio de revisión de casos para que el gobernador conociera el estado de los mismos, así como el nivel de trabajo de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

En junio de 2013 se acordó trabajar en tres ejes: búsqueda e investigación, armonización legislativa y atención a familias de personas desaparecidas. Con excepción de la búsqueda e investigación, el resto de los ejes tuvieron resultados favorables. Para 2016, el espacio se dividió en el grupo de búsqueda e investigación con un subgrupo forense, el grupo de campañas y visibilización, y el grupo de atención humanitaria a familiares de personas desaparecidas.

Las acciones en respuesta a la desaparición de personas provienen principalmente de los familiares de las víctimas. No es un proceso que se cree por decreto, y mucho menos que se desarrolle en armonía, pero sin duda se convierte en un espacio transformador.

La desaparición de una persona —entendida como la privación forzada de la libertad— genera en sus seres queridos un proceso de afectación de tal grado que se presentan cambios anímicos, psicológicos, económicos, sociales, entre otros. Esos cambios vienen seguidos de un sentimiento de venganza y culpa que, conforme pasa el tiempo y si son abordados de forma adecuada, se puede cambiar. Buscar una satisfacción por un agravio o daño recibido es quizá lo más normal frente a una situación como la desaparición de una persona. El deseo de que la persona responsable “pague” por sus acciones, si es canalizado de forma adecuada, puede ser el factor más importante en la transformación de una víctima.

Crear un espacio de encuentro y organización entre familiares de personas desaparecidas se convirtió en el mejor de los aciertos en la búsqueda, pues fue el factor determinante para crear un cambio en los individuos y en la política pública del estado de Coahuila.

La organización ayudó a los familiares a sobrellevar el dolor de la desaparición y entender la complejidad de la situación, así como a articularse

para dar una respuesta efectiva. Dicho espacio se convirtió en una fuente de energía y en el único lugar donde los familiares se sintieron entendidos.

Discutir con iguales, con otras personas que hablan en el mismo idioma del dolor y que se expresan a gritos en silencio, generó un empoderamiento en los familiares de las personas desaparecidas. Les permitió tener la fuerza de presentarse, decir quiénes son y quién es su familiar desaparecido, cuándo desapareció y qué no se ha hecho para encontrarle.

Ese empoderamiento trajo consigo todos los espacios que se han comentado al inicio. Logró romper en parte esa costumbre de pedirle ayuda al Estado y pasó a exigirle al Estado que cumpla con su trabajo y, en cierta medida, a asumir la tarea de este. Convirtió muchas de las ideas en políticas públicas. Pero, sobre todo, convirtió a víctimas en sujetos sociales y de derecho.

En Coahuila, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se tienen registradas 1,686 personas como no localizadas (marzo de 2016). El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas refiere que Coahuila concentra 5.21% nacional del total de personas desaparecidas (mayo de 2016).

Las cifras son un campo en el que entidades federativas como Coahuila o Nuevo León, por decir algunas, han logrado jugar efectivamente, al utilizar la definición de persona desaparecida que regula el derecho internacional humanitario y no el de derechos humanos o el penal. Eso ha generado declaraciones triunfalistas, como la de tener un índice de efectividad de más de 90% en la localización de personas desaparecidas cuando en la realidad no se supera el 3 por ciento.

Aunque desde 2012 se tipificó el delito de desaparición forzada y se creó el de desaparición por particulares (2014), hasta mayo de 2016 solo se tenían registrados dos procesos penales por el delito de desaparición forzada de personas. La impunidad se hace presente no solamente en la ausencia de búsqueda, sino en la sanción a los responsables.

Coahuila se ha convertido en el referente cuando se habla de personas desaparecidas, tanto en las prácticas de desaparición como en las respuestas y los modelos que se han implementado para combatir esta práctica. Se podría decir que al ser el estado pionero en la organización de

familiares de personas desaparecidas del periodo reciente, es un estado en el que parecería que se han dado pasos importantes hacia la justicia y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.

Habría que sobrentender que con ese supuesto acercamiento a la justicia se logró vencer el ejercicio histórico y criminal de la impunidad; que los responsables, materiales e intelectuales, se encuentran bajo proceso; y, sobre todo, que las víctimas sometidas a desaparición fueron localizadas. Pero hoy en Coahuila la impunidad persiste. No se sabe cuántas personas están en calidad de desaparecidas como resultado de la comisión de un delito. Se desconoce cuántas personas han sido en verdad localizadas. Y los responsables continúan en libertad, gozando de impunidad bajo la protección del estado.

No es posible tener una expectativa de justicia cuando existen grandes lazos, personales y políticos, entre quienes detentan el poder. La persistencia de la impunidad se explica en la medida en que los encargados de combatirla son los mismos que perpetúan o permiten que se perpetúen las desapariciones.

Al inicio de su administración, Rubén Moreira dijo: “Hoy vengo a decirles que yo también tengo un sueño, el de encontrar a los desaparecidos en Coahuila”. Las personas desaparecidas en la administración de su hermano fueron la bandera con la cual intentó obtener legitimidad. Su gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno de discursos, muchos de los cuales incluso han logrado que las propuestas ciudadanas se conviertan en política pública, pero ninguno en resultados reales. Lo único que logró fue administrar el problema y limpiar casos emblemáticos, como el caso Allende o el del Centro de Rehabilitación Social de Piedras Negras.

La impunidad persistirá mientras el círculo de protección que existe en Coahuila no sea combatido. Terminará cuando las personas desaparecidas sean encontradas y cuando los servidores públicos involucrados o que tuvieron alguna responsabilidad en las desapariciones, sean procesados. Mientras tanto, todo quedará en discursos.



A TU VUELTA

“Sentirás las promesas que te hice de cuidarte siempre y te preguntarán ¿por qué después de tanto tiempo?”.

—Carta de Lourdes Huerta a su hijo Kristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto de 2010 cuando salió a trabajar repartiendo chocolates de Villa Juárez, Nuevo León, rumbo a Piedras Negras, Coahuila. En casa lo esperaban su mamá y su pareja, embarazada de su primer hijo.

Lourdes:

Desde la última llamada telefónica que tuvimos he pensado en el día que Kristian, el más joven de tus hijos, volverá a casa. Te imagino de madrugada cuando todos dormimos, sentada frente a la computadora, con la puerta de casa abierta tras de ti para que él pueda entrar y sepa que lo has esperado. ¿Cómo se verá tu muchacho, que tenía 24 años cuando se lo llevaron? ¿Y cómo él te verá de nuevo?

Quisiera por un momento, Lourdes, imaginar tu vida antes del 12 de octubre de 2010, cuando Kristian salió de casa a repartir chocolates —necesitaba ahorrar para el nacimiento de su primer hijo— y se despidió de ti con una promesa: “será el último viaje, mamá”. Compartir en una mesa la charla, escuchar tu carcajada estruendosa, salir a bailar después de tu trabajo. Estabas contenta en la empresa de medicamentos a la que llegaste como distribuidora y en menos de dos años te convertiste en gerente. Imaginarte con esos tacones y trajes sastres con los que llegabas a las

primeras diligencias de la búsqueda de tu hijo, para cambiarlos después por los jeans, playeras, tenis o botas que usas ahora. Es tan inasible la vida... justo aprendías a ser tú después de la muerte del padre de tus tres hijos, con una distancia amorosa de ellos, quienes trazaban ya su propio camino. Justo construías tu carrera profesional que se acabó de un día a otro. Me equivoco: no se acabó, ahora te reinventas en tu nueva actividad de sustento económico-material, a bordo de una camioneta en la que llevas y traes a niños de la escuela.

Me gustaría ver tu sonrisa, no importa que para ti ahora sea solo una mueca. Me gustaría escucharte hablar una y otra vez de Kristian, no importa que sea tu único tema de conversación. Me gustaría escucharte hablar de tu nieto Kristian Farid, a quien le reiterarás que su padre lo esperaba y lo amaba con todo el corazón, que no lo abandonó, que unas personas se lo llevaron, y con él se cayó la vida entera de ustedes. Me sumaría a maldecir a Dios, no importa que digan que esto no es trabajo de él. Ni siquiera a Dios se le puede tener miedo cuando lo que hay es una ausencia habitándolo todo.

Me gustaría para entonces dejarte, Lourdes, en esa soledad que aprendiste a hacer tuya y a convertirla en el espacio que te lo devuelve. Donde miras sus fotos sobre tu buró junto a sus carritos de cuando niño. Ahí donde no debes explicar nada, ni a tus compañeros, amigos o parientes, ni siquiera a tus hijos, que pese a todo el amor que te dan, no entienden que la vida no sigue, no para ti. La vida se suspendió ese día cuando una punzada alteró el latir de tu corazón y te anunció que algo malo le había sucedido.

Es así como nos ha funcionado: primero escuchamos y luego orientamos a la gente, en el lenguaje que ellos hablan.

El día que se cumplieron dos años de la desaparición de Kristian le organicé una misa. Le dije a Dios 'te lo entrego en tus manos para que lo cuides'. Así pude asimilar que mi Kristian ya no estaba. No está. Es muy difícil aceptarlo. Fue una manera de decir que lo estoy reteniendo conmigo y él no puede estar tranquilo porque sabe que estoy sufriendo. Entonces... liberarlo de lo que yo sentía como mamá.

En esa soledad donde puedas soltar también el dolor de otros que junto a ti buscan, quitarlo de tu espalda y entonces poder decir que no puedes más dar consuelo. Que no quieres ser fuerte ni solidaria. Que no vas a ser buena abuela, ni madre, ni amiga. Que solo quieres prepararte tu cena y estar sola y esperar la madrugada con la puerta abierta y el recuerdo como una botella echada al mar.

Y verte volver de esa soledad, más tuya y decidida. Porque tú, Lourdes, haces que las cosas ocurran. Como aquel día que bordaste el primer pañuelo para Kristian con todos los colores del mundo sin importar las reglas de las bordadoras: el color verde es para los desaparecidos. O aquel otro en que decidiste dejar la organización de derechos humanos que calculaba, controlaba, decidía tu dolor por Kristian, y convocar a varias compañeras a dejarla contigo; o la tarde que llegaste al quiosco con Letty Hidalgo, tu compañera de dolor y de lucha, a pesar de tu enfermedad. Quisiera ver aquellas tardes que juntas pensaron y construyeron el andamiaje de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León porque esta búsqueda ya no es solo por Kristian, sino por todos los que nos faltan. Tras los pasos de tu hijo, Lourdes, nos has ayudado a encontrar un país extraviado y has trazado un camino que nos acerca a un lugar más humano y compasivo. Porque la tuya ha sido, también, una búsqueda de nuestra memoria y justicia.

¿Cómo te encontrará Kristian? Te pregunté en esa llamada telefónica. Kristian encontrará a su madre triste, acabada. Esa mujer que había en mí se murió —me dijiste—. Pero tú, Lourdes, no creo que te dejes morir.

Hay cosas que no vuelven, Lourdes. Y cuando Kristian regrese no volverá a ver a la mujer que fuiste. Encontrará, como lo dijo Letty Hidalgo, a una mujer más fuerte y con el amor más grande del mundo para él.

—Daniela Rea

P. D. Quiero darles las gracias a Letty Hidalgo y a Cordelia Rizzo por compartirme unas palabras sobre ti, Lulú, que me ayudaron a escribir esta carta.

Lourdes Huerta >



Foto Futuro Moncada



MI EXPERIENCIA

Lourdes Huerta

El 12 de agosto de 2010, en medio del escenario de violencia que se vive en todo el país, mi hijo desapareció. De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, la cifra de desaparecidos en Nuevo León podría ascender hasta los 10,000 casos. Uno de esos es mi hijo. A raíz de este hecho es que comencé, acompañada de algunos amigos, mi lucha por la paz. Y esta lucha apenas empieza porque hay mucho trabajo por delante. La violencia entró con fuerza en Nuevo León y aún sigue ahí, en muchos lados, todos los días.

Desde hace poco más de seis años he estado luchando contra la violencia y la indiferencia del gobierno. Lo hago desde mi trabajo en el transporte escolar. Este me permite estar en contacto con niños y aprovecharlo para transmitirles valores de paz y respeto, así como generar un espacio de confianza. Mi objetivo principal es evitar cualquier expresión de violencia, sembrar la noción de paz y fortalecerla día a día.

Poco a poco he visto que los niños aprenden a confiar. Ellos vienen y me cuentan sus problemas. Pienso que si fomentamos en los niños los valores de la paz y del respeto a tiempo es mucho más probable que ellos aprendan a rechazar la violencia y dejen de verla con normalidad. Sí, la violencia se aprende a rechazarla, y por eso me refiero a resistir y condenar todas sus caras: desde la pelea de jalones entre muchachitos hasta la violencia de las armas y la de la desaparición y la incertidumbre. La idea es

poner un punto final a la violencia desde temprana edad. De otra manera, el problema no solo se mantiene, sino que empeora sin remedio.

Desde mi perspectiva, es urgente que el gobierno otorgue los recursos necesarios para la creación y distribución de información hacia la población. El principal problema que enfrentamos en nuestra batalla por la paz es la indiferencia del gobierno y de las burocracias. A la gente hay que orientarla. Falta mucha orientación y falta también que el gobierno hable el idioma de la gente. De esta forma, y con la ayuda de los especialistas, es posible que todos empiecen a conocer sus derechos, así como nuevas formas de resolver sus problemas por medio del diálogo y de la paz, tanto en zonas del campo como en las grandes ciudades y sus cercanías. De hecho, es allí, en las afueras de las ciudades, donde mayor indiferencia veo. Y el problema es que precisamente es en las grandes zonas conurbadas en donde más carencias hay, lo que dificulta el diálogo, la atención de las demandas y la transmisión del mensaje de paz. En todo caso, el secreto es escuchar y luego hablar. Es así como nos ha funcionado: primero escuchamos y luego orientamos a la gente, en el lenguaje que ellos hablan.

Mi trabajo me ha permitido seguir adelante desde la desaparición de mi hijo. Ver que mis niños aprenden a hacer las cosas de modo diferente me llena de alegría y esperanza. Mis energías las aplico al fomento del respeto en el transporte escolar; trato de hacer presión para la capacitación de maestros y alumnos en las escuelas; participo en juntas vecinales; me opongo a la violencia contra las mujeres y las niñas; participo y busco que expertos nos impartan cursos y hasta terapias. Todo es parte de un pequeño esfuerzo para crear un cambio en la gente, empezando por los niños.

Soy consciente de que la construcción de paz es una labor que nos concierne a todos. El trabajo individual es poco efectivo si no se unen energías. Reconozco que a veces se cometen errores, pero es necesaria la participación tanto del gobierno como de los ciudadanos en su conjunto para corregir las fallas. Eso es importante: no se trata solamente del gobierno, los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte. De ahí la invitación que siempre hago para lograr el involucramiento de

todos los vecinos: desde el más humilde y sencillo, hasta el más profesionalista, e incluso el mismo presidente de la República. Involucrarse es una acción fundamental para pensar en soluciones que respondan a las problemáticas que enfrentamos todos los días. Involucrarme es lo que me ha permitido salir adelante desde la desaparición de Kristian Karim Flores Huerta, mi hijo.



RAYMUNDO RAMOS, EL RESISTENTE

Óscar Balderas

Raymundo Ramos es el último que queda.

Hace 20 años había decenas de hombres y mujeres con su mismo trabajo, pero la guerra acabó con ellos. Les sucedió lo que a la mayoría de los habitantes de esa costra árida llamada Tamaulipas: unos fueron asesinados, otros desplazados y el resto silenciados. Pero Raymundo no. Él, en sus propias palabras, es el último defensor de derechos humanos que está al frente y en medio de la resistencia en un estado donde, oficialmente, cada ocho horas aparece un cadáver.

Si alguien le preguntara por qué es el único activista en todo el estado que intercede por sus vecinos cuando hay abusos de militares, Raymundo —45 años, de rostro redondo y mirada afilada— hará una pausa y hablará del caso que más lo ha marcado: el de Martín y Bryan Almanza en 2010. Aquellos dos niños, de cinco y nueve años, fueron asesinados cuando su familia se dirigía a vacacionar a la playa de Matamoros, al norte de la entidad. La versión de los soldados fue que los hermanos murieron por esquirlas de granada, que estallaron cuando el auto familiar quedó atrapado en el fuego cruzado entre uniformados y sicarios. Pero la mamá, superviviente de la balacera, quería probar que el ejército mentía y su mejor carta para enfrentarlos era Raymundo, el titular del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo.

En cuanto el activista vio las fotografías del supuesto enfrentamiento y los primeros reportes oficiales, supo que los militares encubrían un

crimen. Usó la experiencia que acumuló en su juventud como reportero policiaco en el diario local *El Mañana*, y sus entonces 13 años como defensor de derechos humanos para desmentir al poder. La militarización en Tamaulipas, que había comenzado en el año 2000 con el expresidente Vicente Fox, y que arreció en el 2006 con la guerra contra el narco que desató el exmandatario Felipe Calderón, le había afinado la nariz para buscar las pistas correctas en expedientes de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Así que el sabueso diligente y dirigente se volcó con urgencia a desenterrar la verdad.

Raymundo hizo lo que suele hacer cuando alguien pide ayuda: va al lugar de los hechos, conversa con los testigos, consigue partes oficiales, habla con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sus peritos trabajen codo a codo con él. Después de meses de búsqueda, consiguió la evidencia que necesitaba para comprobar que, al menos, cuatro militares habían disparado con alevosía contra los niños. Que a Martín le habían dado dos disparos y a Bryan tres, casi a quemarropa. Y que la razón era tan incomprensible como confundir a la familia Almanza, todos desarmados, con delincuentes.

Así es como el activista exhibe al sistema. Él, huérfano de padre desde los seis años, hijo de una madre que no sabía leer ni escribir y que tuvo seis hijos, un licenciado en Ciencias de la Comunicación que pagó sus estudios con el salario mínimo que ganaba en una maquiladora, y así logró que tres procuradurías —la de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional— admitieran que protegieron a soldados infanticidas, que trabajaron para encubrirlos y que debían a las víctimas la reparación del daño.

Raymundo consiguió un pedazo de justicia para Martín y Bryan, como lo consiguió para Carlos N., su primer caso como activista, un joven de 16 años a quien agentes de Nuevo Laredo asesinaron en los separos de la policía municipal y quisieron hacerlo pasar por suicidio. Como lo hizo

Así que, por ahora, él seguirá atravesando Tamaulipas en su vieja camioneta. El último defensor de derechos humanos que queda.

para Neiser Cámara, el joven de 25 años a quien mataron los marinos en esa misma ciudad. Como lo ha hecho para cientos, tal vez miles —ya perdí la cuenta, dirá— desde 1997, cuando inició la vocación que lo ha llevado a ser reconocido por influyentes organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Pero nadie que luche con tanta fuerza está libre de enemigos. Y los de Raymundo son poderosos. Lo han amenazado de casi todas las formas posibles para que deje su trabajo. Esas intimidaciones, asegura, provienen de las fuerzas armadas, ya sean soldados o marinos, que ven su activismo como un estorbo. A pesar de ello, no han podido moverlo de Nuevo Laredo ni le abollan la esperanza de un Tamaulipas en paz. Sus protegidos dirán que haría falta un batallón de la longitud del Río Bravo para ahogar sus convicciones.

Sin embargo, a mediados de febrero de 2017, algo había en la voz de Raymundo. En redes sociales, se había soltado una campaña de odio en su contra y él sospechaba, de nuevo, que estaba orquestada por el ejército. “Estoy preocupado —contará— por mí, pero sobre todo por mi esposa y mis cuatro hijos”. Pese a todo, no está dispuesto a dejar el estado, ni siquiera porque el 16º Regimiento de Caballería, el presunto centro de las amenazas, está a menos de 15 minutos a pie de sus oficinas en la peligrosa colonia La Joya.

Así es esto de estar al frente y en medio de la resistencia, afirmará Raymundo. “Alguien debe quedarse a defender los derechos humanos; si me voy, quién sabe si alguien hará este trabajo”. Así que, por ahora, él seguirá atravesando Tamaulipas en su vieja camioneta, sin escoltas que lo protejan, cuidando que el ejército no abuse de su poder.

Seguirá siendo ese Raymundo al que la guerra no ha logrado doblar. El último defensor de derechos humanos que queda.





Foto: **Diego Berruecos**

< Raymundo Ramos

TAMAULIPAS

Raymundo Ramos

El pasado 5 de junio de 2016, poco después del mediodía, acudí con mi esposa y dos hijos a votar en una de las 587 casillas instaladas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una noche anterior había pronóstico de lluvias y tormentas, pero finalmente no llovió ni una gota.

Una semana antes las deficiencias que caracterizaban al estado de Tamaulipas en materia de secuestros y desaparición de personas habían quedado atrás con el “rescate” de un conocido futbolista (Alan Pulido) en menos de 24 horas. El gobernador en persona, medio despeinado, acompañado de su gabinete de seguridad pública, presentó al futbolista ante los medios de comunicación “sano y salvo, para que vean que está bien”. Se trató, dijo, de un “operativo de inteligencia”, de una colaboración estrecha entre las autoridades de Tamaulipas y el gobierno federal. Ahora todos sabemos que, en realidad, fue parte de una estrategia maquinada por mentes perversas para influir entre los ciudadanos y posicionar al PRI en las preferencias electorales.

Pero no les funcionó, como tampoco funcionó la guerra sucia en plena campaña electoral en Tamaulipas orquestada desde los más altos niveles de poder político en México, y cuyo autor principal sería el exsenador Manlio Fabio Beltrones.

Mientras me entregaban las tres boletas electorales pensaba en mis familiares, amigos, compañeros de profesión y vecinos que hoy se encuentran desaparecidos o murieron víctimas de una guerra que lleva en

Tamaulipas exactamente 15 años. Ya suman 20,000 víctimas y miles de damnificados, principalmente nuestras niñas y nuestros niños.

Tamaulipas, como bien se sabe, no se reconoce como estado fallido, a pesar de que reúne todas las características de ingobernabilidad. Desde el año 2010 ocupamos los primeros lugares en secuestros, desaparición de personas, homicidios dolosos, extorsiones y agresiones a periodistas. Por ejemplo, en el año 2014 se dieron a conocer cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que permitían conocer una de las realidades más terribles originadas por la violencia. De un total de 22,322 personas registradas como desaparecidas hasta diciembre de 2013, Tamaulipas ocupaba el primer lugar con 4,875 casos, muy por encima de otros estados como Jalisco, con 2,113 o el Estado de México, con 1,554.

Los años de mayor violencia que vivimos en Tamaulipas fueron de 2003 a 2013. Diez años de barbarie, masacres, secuestros y desapariciones cometidos no solamente por integrantes del crimen organizado, sino también por elementos de las fuerzas federales y, por supuesto, de la "Policía Estatal Acreditada". Pero la violencia tuvo un origen político: la descomposición del régimen priista combinada con la incertidumbre de dos sexenios panistas, atemorizados por una sociedad cada vez más exigente y organizada.

En el año 2000, cuando en todo el país se pensaba que México había transitado a la democracia, luego de la victoria de Vicente Fox contra el priismo tradicional dictatorial; en realidad, se trataba de una liberación de demonios que desplazaron a los caciques tradicionales y regionales para crear grupos o células del crimen organizado hasta conformar grandes cárteles que se atrevieron a retar al Estado mexicano.

Los caciques de antes inicialmente cobraban cuotas sindicales, pero luego comenzaron a vender protección institucional a vendedores de alcohol y cigarros extranjeros, traficantes de ropa, vehículos y aparatos eléctricos, ladrones de poca monta. El crimen organizado eventualmente los desplazó y comenzó a vender protección para cometer secuestros, extorsiones, y controlar la venta de drogas, la prostitución, el tráfico de personas y el tráfico de mercancías extranjeras. Y una de estas señales de cambio, en apariencia inofensiva, fue la apertura de las fronteras al tráfico de armas.

En tiempos de Ernesto Zedillo los semáforos fiscales instalados en los puentes internacionales mandaban a revisión a ocho de cada diez vehículos que ingresaban a nuestro país, procedentes de Estados Unidos. Con Vicente Fox la cantidad se invirtió: a ocho vehículos les tocaban luz verde en el semáforo fiscal y solamente se revisaban dos. La justificación del nuevo mandatario era eliminar la corrupción en las aduanas que lastimaban la economía de nuestros hermanos paisanos y de los habitantes fronterizos. Los responsables de la corrupción jamás fueron sancionados.

Sin embargo, esta apertura de las aduanas aumentó el tráfico hormiga y de gran escala de armas de fuego que comenzaron a llegar a estados con grandes conflictos sociales como Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Veracruz, y ni qué decir de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Jalisco. Cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al crimen organizado y sacó al ejército a las calles aquella mañana del 11 de diciembre del año 2006, más de la mitad del país estaba armado, principalmente los cárteles del narcotráfico. El baño de sangre en el país apenas comenzaba. Al terminar su sexenio, las cifras oficiales hablaban de más de 120,000 personas fallecidas y cuando menos 20,000 desaparecidos.

Aquí, en memoria de esas víctimas correspondientes al estado de Tamaulipas, quiero escribir de algunas de ellas porque siguen presentes en nuestros corazones y en nuestras oraciones.

Roberto Mora García, director de un periódico en Nuevo Laredo, asesinado en marzo de 2004 con 26 puñaladas. Fue una voz crítica del entonces gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por sus nexos con el crimen organizado y a quien hoy las autoridades de Estados Unidos buscan para procesarlo. En México, ninguna autoridad lo busca.

Guadalupe Escamilla, periodista, asesinada en abril de 2005. Recibió catorce impactos de bala de un agresor que nunca fue identificado mientras llegaba de madrugada a la radiodifusora en donde trabajaba.

¿Recuerdan a Martín y Bryan Almanza Salazar, dos niños neolaredenses que iban con su familia a la playa de Matamoros en abril del 2010? Cruzaron un retén militar en Ciudad Mier y luego, de manera inexplicable, un grupo de soldados comenzó a disparar hacia la camioneta en la que

viajaban con su papá, mamá y primos. ¿La versión oficial? Primero, el silencio, el ocultamiento de la tragedia. Luego, la descalificación y el linchamiento mediático, y finalmente la justificación: “quedaron atrapados en un fuego cruzado entre autoridades y delincuentes”. Fueron víctimas “colaterales”, dijo el secretario de la Defensa Nacional.

También recuerdo a doña Cinthia Salazar, madre de los dos niños, cuando se entrevistó con el entonces presidente Calderón en la residencia oficial de Los Pinos: “exijo justicia y una disculpa pública” y, hasta la fecha, seguimos esperando ambas cosas.

En agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados 72 cuerpos: 58 hombres y 14 mujeres. Todos migrantes nacionales y extranjeros centroamericanos. Al menos dos víctimas lograron sobrevivir a esta brutal masacre, por mera gracia de Dios. Las “investigaciones” de las autoridades federales llevaron a la detención de varios presuntos responsables. Pero estas investigaciones en ningún momento tocaron a los funcionarios que eran responsables de proteger a nuestros hermanos migrantes en su travesía por territorio nacional.

¿Cómo era posible secuestrar a más de 70 personas sin que ninguna autoridad se percatara de ello? Ni estatales, ni federales. ¿Cómo funciona entonces la inteligencia nacional? ¿Qué papel desempeñan las autoridades de seguridad pública federal, principalmente aquellas dedicadas a la vigilancia carretera o ferroviaria?

Los 70 migrantes de San Fernando no fueron los únicos secuestrados, decenas de autobuses fueron interceptados por el crimen organizado en diferentes carreteras de Tamaulipas. Hombres, mujeres y niños por igual. Pero el gobierno de Felipe Calderón y de Egidio Torre Cantú guardaron silencio; ocultaron lo que estaba sucediendo hasta que emergió la barbarie.

De hecho, muchos guardaron silencio por miedo, por complicidad, por *valemadrismo*: concesionarios del transporte, periodistas, partidos políticos, las organizaciones religiosas, las universidades, hasta el gobierno de Estados Unidos, que en todo se entromete y, salvo contadas ocasiones, solo emitió alertas para que sus ciudadanos no transitaran por las carreteras de Tamaulipas.

El 27 de enero de 2011, el ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Vaca salió de la Ciudad de México con destino a Laredo, Texas. Manejaba un carro Honda y no llegó. Fue secuestrado cerca de los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, en una carretera federal. Tampoco las autoridades investigadoras lo han podido localizar. Dos meses después, el 27 de marzo, Andrés Ascensión González y Braulio Hernández Bravo salieron de Chignahuapan con rumbo a la frontera de Nuevo Laredo. Fueron interceptados por un grupo de hombres armados saliendo de Reynosa, Tamaulipas. Hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ante ejemplos como estos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. fue creado en agosto de 1997 para la defensa y promoción de los derechos humanos. La violencia que sacudió a nuestro país en los años que mencioné nos convirtió en acompañantes de dolor, abogados, psicólogos, mediadores y, finalmente, en víctimas.

A la fecha somos la única agrupación que sobrevive en Tamaulipas; y eso, gracias al apoyo, la colaboración y protección de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos como CADHAC, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras. Si no fuera por estas organizaciones hermanas, desde hace muchos años yo estaría preso, exiliado o, en el peor de los casos, muerto.

En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 fuimos víctimas de graves amenazas por parte del ejército y la marina, así como de la delincuencia organizada. Esto nos llevó finalmente a pedir la “intervención” del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lamentablemente, el Poder Judicial y el Poder Legislativo nos han dejado solos en esta lucha contra la injusticia y los abusos de nuestras “autoridades”.

Creo que la gran lección de todo esto es que, con la participación ciudadana de miles de mujeres y hombres valientes en todo el estado, pudimos sacar al PRI del gobierno de Tamaulipas y, con ello, luchar por una nueva era para nuestras familias. Una nueva era en la que la paz y la tranquilidad nos ayuden a superar una década de violencia, dolor y muerte.



LA SIEMBRA QUE YA EXISTE, LA PAZ MEXICANA EN PROCESO

Roberto E. Mercadillo Caballero

Cátedras CONACYT-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Muchas de las reflexiones en torno a la violencia y la paz en México surgen de una perspectiva sociológica fundamental. Y es que es dentro de la estructura de nuestras sociedades, en sus instituciones y en su movimiento en donde queremos experimentar y vivir la tan añorada paz. En complemento a esta perspectiva, sin embargo, algunas propuestas biológicas y cognitivas suponen que la paz no se encuentra solo al exterior de los cuerpos humanos, en su sociedad abstracta. La paz es también una vivencia, una serie de experiencias internalizadas en nuestra mente y sentidas en nuestros cuerpos. Los científicos sociales mexicanos que estudian la cultura de paz son escasos y lo son aún más los provenientes de disciplinas biológicas. Pero, aunque escasos, estos últimos también tenemos algo que decir.

La paz y la violencia involucran una discusión sobre los hechos, los procesos y la cultura. Comenzaré la discusión con esta última aludiendo al antropólogo Clifford Geertz (1973), para quien la cultura es una herencia de significados, de símbolos y de creencias para comunicarnos y para desarrollar conocimiento y actitudes frente a la vida. Con esto en mente, aludo ahora a la definición de violencia que otorga la Organización Mundial de la Salud: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Es cierto que esta definición no reúne todas las diversas experiencias violentas vividas por personas y grupos, las cuales pueden variar en sus propósitos, consecuencias y motivaciones. No obstante, podemos coincidir, a juzgar por diversos reportes, en que la violencia en una sociedad se deduce, comúnmente, mediante la cuantificación: los números, las cifras y las tasas de lesiones, muertes, trastornos y privaciones ocasionados por la violencia, por el uso de la fuerza y el poder. Parece que la manera más sencilla de percatarnos de la violencia son sus *factos*, sus hechos consumados y cuantificables. Pero si bien pueden hacernos ver sus horrores, tales hechos no son la historia completa de la violencia; son la consecuencia de una cultura que, siguiendo a Geertz, los favorece mediante creencias, símbolos y estilos de vida permeados en nuestras instituciones, grupos, sistemas de educación, familia y acciones personales; de forma tal que casi percibimos la normalidad en sus expresiones, como una especie de inconciencia de la cultura violenta en la que estamos inmersos.

La paz se actúa, también, desde la persona, desde el compromiso empático de “los de a pie”.

La paz y la violencia son una dialéctica, un binomio. Si nos percatamos de la violencia únicamente a partir de cuantificaciones de conflictos y daños, esperamos a la paz, también, como hechos opuestos a la violencia, cuantificados como la ausencia de los conflictos. Esta forma de paz, entendida así desde la paz romana, pasando por la Paz de Westfalia en 1648 y llegando hasta los cuerpos de seguridad de las Naciones Unidas, justifica la intervención militar, las guerras y otras formas de sometimiento en pos de una ausencia de conflictos, que, aunque forzosamente, los inhibe. La pretendida paz —entendida como ausencia de conflictos— no es congruente con los procesos de evolución de la vida humana y de su sociedad, determinadas, ambas, por conflictos constantes. Pero, al igual que la de la violencia y la guerra, la cultura de paz (no la paz sola) involucra creencias y símbolos que transcurren en la historia, que se construyen y varían

de una civilización a otra. La cultura de paz es la búsqueda de formas y actitudes no violentas para mediar y lidiar con los conflictos que figuran en la vida humana, para comprender su origen y, a partir de eso, pensar y actuar su solución.

Curiosamente, la cultura de paz tiene importantes antecedentes en las ciencias biológicas, los cuales pueden rastrearse en El Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia (David Adams, *The Seville Statement on Violence*, 1987), firmado apenas en 1986 por 19 científicos internacionales, tres mexicanos entre ellos, Santiago Genovés Tarazaga (antropólogo físico), Diana López Mendoza (psicofarmacóloga) y José Luis Díaz Gómez (psicobiólogo). Aunque surgido de las ciencias biológicas, El Manifiesto de Sevilla propone, paradójicamente, que la violencia no está biológicamente determinada, que los seres humanos no somos violentos por naturaleza, que la agresión es una adaptación para enfrentar situaciones dañinas, pero que la violencia no es una adaptación, es un aprendizaje cultural, una invención para el dominio y el sometimiento. Si la guerra y la violencia no son una fatalidad biológica, entonces, la misma especie (nosotros) que inventó la guerra puede también construir la paz.

El Manifiesto de Sevilla fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, ordenando su difusión entre los Estados miembros. Dos de sus firmantes, el farmacólogo Federico Mayor Zaragoza y el neurobiólogo David Adams, se integraron a la Oficina General de la UNESCO, el primero como director general y segundo como funcionario. Confiados en que el terreno para cultivar la paz estaba preparado, en que la paz no es solo la ausencia de conflictos y en que se sitúa en la mente de los hombres, como se plantea en la Declaración Yamusukro (1989), diseñaron la primera Declaración y Programa de Acción para una Cultura de Paz, en 1999. Como binomio, la misión del programa es compensar la cultura de guerra mediante acciones contrapuestas, como lo plasma Adams (*Cultura de paz: una utopía posible*, 2014) en la siguiente tabla.

CULTURA DE GUERRA Y VIOLENCIA	CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA
Creencia de que el poder se basa en la fuerza	Educación para una cultura de paz
Tener un enemigo	Tolerancia, solidaridad y entendimiento internacional
Gobierno autoritario	Democracia participativa
Secrecía y propagandismo	Libre flujo de información y conocimiento
Explotación de la gente	Derechos humanos
Explotación del ambiente	Desarrollo sostenible
Dominación masculina	Igualdad entre mujeres y hombres

Gran parte de la labor de los autores de este libro coincide con las propuestas del programa para una cultura de paz. Son bien llamados *sembradores de paz* porque nos hacen ver que su cultivo en México, las acciones necesarias para alcanzar la paz, no son lineales, no son una receta de libro incompatible con la realidad y naturaleza caóticas del ser humano. Más bien, cual sembradores conocedores de su región y su clima, tiran semillas en espera de una cosecha y confían en un suelo fertilizado constantemente por experiencias dolorosas pero resilientes, por ideas y por acciones. Mencionaré algunas de estas siembras.

Desde Chihuahua, Carlos Fong expone su postura contra la militarización. Nos habla del uso de la fuerza militar y del aumento de la represión en su región, de los intereses económicos, ajenos a su pueblo, detrás de la explotación y el manejo de recursos naturales. Pero también nos habla de la historia y el inicio de los colectivos que luchan contra esos intereses y represión, de la complejidad de los conflictos para no reducirlos solamente a la falta de canales democráticos, sino para considerar la conciencia

de las personas que han vivido esa explotación y que actúan para mantener su dignidad. Por su parte, Fernando Ocegueda, desde Baja California, comparte que la violencia que él mismo ha vivido lo ha hecho adoptar la resiliencia como una vía para transformar su indignación y dolor en vehículos pro-sociales y cooperativos, en acciones para la paz.

Desde Michoacán, José Luis Segura Barragán traduce la contemplación en conciencia, plantea a la pobreza como reflejo de la violencia y a la paz como sinónimo de justicia. Nos habla de la rigidez de las instituciones eclesióásticas para demandarles que centren su realidad en obras sociales, así como de la dignidad y la esperanza como fundamentos humanos para permanecer en la constancia del cambio y para percatarnos de su florecimiento, que provoca alegría, amor y respeto.

Sobre la participación ciudadana, Raymundo Ramos habla de la formación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como del acompañamiento en el dolor a las víctimas y el acercamiento a las autoridades para favorecer el perdón, la reconciliación y la justicia. Por su parte, Jorge Verástegui, desde Coahuila, señala la labor para la búsqueda, armonización legislativa y atención a familias de personas desaparecidas, procurando espacios sanadores del deseo de venganza y de la culpa.

Con las siembras mencionadas quiero resaltar que la búsqueda y el cultivo de la paz no se sitúa de forma exclusiva en las instituciones o en la abstracción del Estado, aunque, por supuesto, son elementos imprescindibles en el cambio. La paz se actúa, también, desde la persona, desde el compromiso empático de “los de a pie”. Este subrayado no es banal, por el contrario, coincide con lo declarado en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, 1946: “Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos, no puede obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.

Hasta aquí he planteado algunas ideas para comprender a la paz como un cultivo hecho por personas cuyas cosechas se reflejan (o se pretende) en la acción de las instituciones y del Estado. Ahora daré paso a algunas

perspectivas surgidas de mis áreas de estudio, las neurociencias, la psicología, la antropología y la complejidad.

En este libro se habla de las repercusiones de una cultura de guerra y violencia que hemos vivido en México desde hace varias décadas. Aunque vividas como largas y extenuantes, su origen es mucho más antiguo, sobrepasa el conteo de las décadas y nos coloca en el periodo Neolítico, hace aproximadamente 7,000 años. De acuerdo con hallazgos arqueológicos, la violencia estaba ya presente en las primeras sociedades de cazadores-recolectores y su incipiente cultura de guerra se observa con claridad en los primeros asentamientos humanos, en los albores de la agricultura (David Adams, *Cultura de paz: una utopía posible*, 2014). Es por eso que, además de las acciones urgentes que muchos mexicanos están llevando a cabo contra la violencia, debemos, a la par, aceptar su antigüedad para conocer las bases que la promueven y la posibilitan, para transformarlas en una nueva cultura que considere sembrar raíces profundas.

A la par de las acciones por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, creo que debemos pensar, juntos, activistas, académicos y funcionarios, qué tipo de nueva cultura, creencias y símbolos queremos desarrollar. Para esto, debemos pensar en cómo vamos a comprender la vida, cómo vamos a considerar el desarrollo y el bienestar, cómo vamos a concebir a los otros y cómo pretendemos relacionarnos con ellos y ellas, cómo desvaneceremos la noción de enemigo y de desigualdad antes de eliminar los actos desiguales en sí mismos. Como parte de las acciones, debemos mirar hacia los filósofos que han definido a la persona como un ser íntegro, con un cuerpo sensible, con voluntad, afectos, responsabilidad y libre albedrío, para que sea “la persona” y no nuestras atribuciones la que defina a los migrantes, a las víctimas, a los desaparecidos y a sus familiares, pero también a los gobernantes, a los militares y a los perpetradores.

Para cambiar la lógica de guerra y violencia que ha prevalecido los últimos miles de años creo que debemos pensar en estrategias cognitivas para que nuestra mente y la de los que vienen internalice nuevos conceptos sobre la persona y la vida. Las neurociencias nos dan algunas

pautas. A partir de investigaciones desarrolladas en México, sabemos que la función cerebral que posibilita la violencia, es similar a la que posibilita actos cooperativos y pacíficos; tenemos la oportunidad de elegir, racional e intencionalmente, la información que entra a nuestros cerebros para favorecer la cooperación y no la guerra (Roberto Mercadillo y Nallely Arias, "Violence and compassion: a bioethical insight into their cognitive bases and social manifestations", 2010). Sabemos que los miembros de las fuerzas públicas, los policías, pueden ser tan empáticos frente al sufrimiento ajeno, como puede serlo cualquier miembro de la sociedad; la empatía

Debemos pensar en cómo vamos a comprender la vida, cómo vamos a considerar el desarrollo y el bienestar.

es una actitud que puede desarrollarse mediante la educación y el servicio a los demás, sin importar nuestra posición o cargo social (Roberto Mercadillo, *Retratos del cerebro compasivo. Reflexiones en la neurociencia social, la policía y el género*, 2012). Sabemos que la insatisfacción con nuestra propia vida incrementa la indignación, que la indignación puede motivar el placer de la venganza y que las noticias expuestas en los diarios pueden favorecer el deseo de venganza en una especie de círculo vio-

lento interminable (Daniel Atilano, *Empatía y moralidad en jóvenes universitarios: Una aproximación neurosocial*, 2016). Sabemos que en la cultura maya del México actual, la compasión coexiste con la violencia y que la elección de una u otra se basa en la responsabilidad, en la educación y en el lenguaje (Roberto Mercadillo y María Cervera, "Compassionate and cooperative attitudes in Yucatec Mayan people: cultural and cognitive alternatives to violence", 2016). Los hallazgos neurobiológicos nos indican que es posible cultivar mentes pacíficas y pacifistas, sí. Pero el cultivo no es meramente un aprendizaje de conceptos, se refiere más bien a acciones que internalizamos, que deben llegar a formar parte de nuestra vida cotidiana. Para lograr la internalización y la escucha atenta es fundamental, escuchar lo que el otro, amigo o enemigo, tiene que decir. Un ejemplo de internalización para la cultura de paz se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos. Aunque elaborada en 1948, ningún

reporte científico se refirió a ella sino hasta 1990; a partir de entonces, su referencia supera las 10,000 citas. Debieron transcurrir 50 años para que los científicos, que habían “aprendido” los derechos humanos, los internalizaran como parte de su vida y los consideraran argumentos para la labor científica internacional. Me atrevo a decir que si ignoramos la función de nuestro cerebro y nuestra mente, la asimilación de los nuevos conceptos e ideas que configuran nuestra cultura de paz en proceso será igualmente lenta.

Con el auge actual de la epigenética (la acción de los genes dependiente del ambiente y las experiencias), se ha propuesto que el aprendizaje de las reacciones basadas en el miedo, pueden afectar procesos genéticos que se transmiten hasta tres generaciones. En efecto, los nietos pueden tener disposiciones a la ansiedad y al miedo heredadas por las experiencias traumáticas de sus abuelos (Bryan Dias y Kerry Ressler, “Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations”, 2014). Estamos, entonces, en un punto crucial para pensar acerca de las nuevas generaciones no nacidas, cuya memoria biológica y no solo simbólica, familiar o cultural, guardará los efectos de varias generaciones de violencia, sufrimiento y resentimiento en nuestro país. Estamos en el punto de pensar e implementar, hoy, las políticas públicas en salud mental para lidiar con esos problemas mañana y romper el círculo de la animadversión, el rencor y el miedo. Académicos, activistas y funcionarios debemos trabajar, juntos, en ello.

Las instituciones del Estado son un medio cultural que puede favorecer la violencia o la paz, pero no son la cultura humana en sí misma. Sin pretender caer en una visión simplista del cambio individual que ignora la historia de lo humano y el pesar de los otros, desde la complejidad, creo que este libro puede y debe llevarnos a cultivar una base nueva y alternativa surgida tanto desde la individualidad como de la colectividad, que no ignore la responsabilidad del poder político, pero que tal poder sea el reflejo de nuestras propias mentes. Tampoco pretendo basarme en las buenas intenciones: por la paz se lucha, mediante exigencias y con estrategias. Los autores de este libro son ejemplo de ello.

Anticipo que para quienes vivimos hoy será difícil (o imposible) ver cosechada la cultura de paz como hecho, como *facto*. Pero la cultura de paz en un proceso paulatino y cotidiano, como existencia, ya la estamos viviendo. La hemos comenzado a cultivar desde hace tiempo; algunos de forma más consciente, otros sin darnos mucha cuenta. Nos queda, por ahora, atender su existencia, notar los actos logrados, aprender de ellos y aceptarnos como sembradores.



SEMBRADORES DE PAZ

Este libro se terminó de imprimir en agosto de 2017 en Litográfica Cozuga S.A. de C.V., Calzada Tlatilco 78, col. Tlatilco, CP 02860, del. Azcapotzalco, Ciudad de México.

En su formación se utilizaron las fuentes DIN y Replica.

Se imprimieron un total de 1,200 ejemplares.

Este libro recoge la experiencia de mexicanos que han respondido a la violencia de manera ejemplar en diez de los estados de la República con mayor índice de homicidios. Los testimonios de estos sembradores de paz relatan su lucha por la justicia ante violaciones a los derechos humanos, desapariciones, feminicidios, contraproducentes políticas de militarización, colusiones criminales y otras atrocidades tristemente frecuentes en nuestro país desde hace algunos años. Más que una denuncia reactiva, las palabras de estos sembradores de paz buscan ser un llamado a la acción para los millones de mexicanos que creemos que las noticias de violencia endémica, comunidades desgarradas y tragedias impunes no deberían ser cotidianas, y que construir la paz es posible.

Carlos Fong Ronquillo • Javier Llausás Magaña • Silvia Núñez Esquer • Fernando Ocegueda Flores • Alejandro Solalinde • Abel Barrera Hernández • José Luis Segura Barragán • Jorge Verástegui • Lourdes Huerta • Raymundo Ramos



Seminario sobre
Violencia y Paz

EL COLEGIO
DE MÉXICO

ISBN: 978-607-8320-74-5

